

DE LA HABANA A BOGOTÁ:
**desAcuerdos
de Paz**

Anisley Torres Santesteban

Aborda el conflicto colombiano, la negociación de paz en Cuba y lo ocurrido después del acuerdo firmado por la realidad política regional. Incluye testimonios de Timochenko, Gabino y Juan Manuel Santos, entre otros.

CONTEXTO
LATINOAMERICANO

DIÁLOGOS
EN CONTEXTO

ocean
sur


DE LA HABANA A BOGOTÁ:

desAcuerdos de Paz

Anisley Torres Santesteban (Cuba, 1982). Licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana. Estudios de postgrado en realización audiovisual por Deutsche Welle Akademie. Analista de política internacional en noticiarios y programas de opinión de la Televisión Cubana. Realizó servicios de corresponsalía para televisoras latinoamericanas como Telesur y CM& de Canal Uno, en Colombia. Articulista en la revista *Contexto Latinoamericano*.

DE LA HABANA A BOGOTÁ:

desAcuerdos de Paz

Anisley Torres Santesteban



una editorial latinoamericana

Derechos © 2020 Anisley Torres Santesteban
Derechos © 2020 Ocean Press y Ocean Sur

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, conservada en un sistema reproductor o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin previa autorización del editor.

ISBN: 978-1-922501-03-5

Primera edición 2020

PUBLICADO POR OCEAN SUR
OCEAN SUR ES UN PROYECTO DE OCEAN PRESS

E-mail: info@oceansur.com

DISTRIBUIDORES DE OCEAN SUR

América Latina: Ocean Sur • E-mail: info@oceansur.com

Cuba: Prensa Latina • E-mail: plcomercial@cl.prensa-latina.cu

EE.UU., Canadá y Europa: Seven Stories Press

- 140 Watts Street, New York, NY 10013, Estados Unidos • Tel: 1-212-226-8760
- E-mail: sevenstories@sevenstories.com

ocean
sur



www.oceansur.com
www.facebook.com/OceanSur
info@oceansur.com

Índice

Introducción	1
La fatigosa búsqueda de la paz	7
Timochenko: «Sería un suicidio político firmar un acuerdo y no cumplir lo que allí se pactó»	15
¿Por qué el No a la paz en el plebiscito?	28
¿Dónde queda la paz para Simón Trinidad?	37
Los nuevos peores amigos	41
Paz completa	46
Otro traspies a la paz	51
Gabino: «El día que en Colombia haya democracia, sobran las armas»	55
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le apuestan a la palabra	78
Cumbre de paz	82
Historia repetida de diálogos y crisis	85
Coherencia sí, pero todos	89
Uribe al banquillo	93
La carrera de poderes en Colombia	97
Narcotráfico, violencia y paz otra vez marcando intención de voto	101
¿Por qué La Habana?	106
Violencia sistémica	110
El ducado con un Petro en el zapato	113

Un Congreso con nuevos legisladores y vieja política	117
De un Nobel a un novel	122
La paz estancada	126
Los «conejos» del Acuerdo de Paz	130
Los cien días del ducado colombiano	134
Atentado a la paz	138
El ELN seguiría en La Habana	145
El humanitarismo belicoso de Trump y Duque	150
Impartir justicia: el talón de Aquiles del Acuerdo de Paz	154
El caso Santrich y el futuro de la JEP	157
¿Y Santrich?	160
Círculo vicioso de guerra	163
La frontera belicosa	169
El chiste del momento	173
Del conflicto armado al conflicto social	179
Con tantos muertos, ¿de qué paz me hablas, viejo?	184
Samper: «Nos asomamos a la paz y no queremos devolvernos a la guerra»	191
Santos: «Cuba hizo posible un proceso que parecía imposible»	203
El abrazo de tres	213

Introducción

«¿Por qué hablas con ese *man* (hombre)?», me dijo asustado y en son de advertencia un colega, que después supe hacía parte del equipo de comunicación del gobierno de Colombia, cuando me vio conversando en plan empático con uno de los guerrilleros de las FARC. «Ese y todos esos *manes* (hombres) y las “viejas” (mujeres) que andan con ellos son “puros” asesinos, narcotraficantes», y agregó una palabrota solo comprensible en su jerga popular, que después se haría demasiado familiar a mis oídos.

Así me acercaba a un conflicto complejo en extremo como el colombiano y lo hacía como casi todas las personas que no lo habían vivido en carne propia, con una visión parcializada, repleta de medias verdades y con tantísimas omisiones a voluntad de quien se arrogaba el derecho a contar la historia.

Quien me alertó por mi «descuido» al dirigirme a los insurgentes terminó, al cabo de cuatro años, reconociendo que había gente «chévere» entre ellos, bajando la cabeza al saber que los crímenes andaban mucho más repartidos de lo que creía y que los bandos, que hasta ayer suponía bien delimitados, tenían borradas las fronteras. Llegó a confesar que no conocía su país, no solo geográficamente hablando, sino desde el punto de vista de la realidad socioeconómica del campo marginado. Hablaba un bogotano de menos de 30 años y una vida de cierta comodidad, que sabía que su Colombia estaba en guerra, pero no cómo, por qué y hasta dónde calaban los horrores de esa guerra, más allá de lo que narraban los medios de comunicación, los

mismos medios a los que ahora como profesional de la imagen pertenecía.

¿Qué pasaba entonces? ¿Quiénes eran los personajes que durante tanto tiempo se pasearon por los pasillos del Palacio de Convenciones, al oeste de la capital cubana? ¿Por qué se trataban como enemigos? ¿Por qué tardaban en ponerse de acuerdo? ¿Qué los mantenía enfrentados? ¿Qué tenían que solucionar? Y finalmente, ¿por qué en La Habana?

Mis preguntas al comenzar una cobertura que en algún momento pareció no tener fin, pero que por el camino se nos hizo a algunos una verdadera obsesión. Era como un acto religioso, asistir mañana tras mañana, en el mismo rango horario —salvo los días de los grandes acontecimientos que se convertían en 12 y hasta 16 horas de trabajo ininterrumpido— al mismo sitio, al que tenía como única escenografía un par de escaleras y el icónico cartel *Diálogos de Paz. La Habana, Cuba*. Madrugar era la clave del éxito para coger un buen puesto y el mejor ángulo para una declaración habitual de la parte más satanizada, que se adueñó entonces de los micrófonos que le habían sido privados por años para contar su verdad.

El contrario, un equipo más circunspecto y refinado que los rudos guerrilleros, pocas veces compareció a la prensa. Empezaron siendo fríos y distantes, con derroche de diplomacia, es decir, juicioso protocolo. Aunque jamás perdieron esa discreción y reserva extrema sobre su misión, terminaron humanizándose tanto como los de las FARC, entre ellos y hacia nosotros, los temerarios de la prensa. Bastaron unas pocas alocuciones para que me convirtiese en una admiradora del verbo del Dr. Humberto de la Calle, el jefe negociador que representaba al mismísimo presidente Juan Manuel Santos en La Habana. Estuviera o no de acuerdo con su parecer, cada oración lucía perfectamente

construida, convincente, y en el tono y candencia inmejorables. Un orador, un político; presidenciable, pensé. Lo había intentado ya en el pasado, volvería a buscar ese puesto en el futuro, pero otra vez en vano. Otro que se robaba mi devoción era el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, por su porte de caballero, siempre amable y con una media sonrisa para saludar, más que todo, una pieza clave en este entuerto.

La insurgencia siempre fue retórica en demasía. Había plenipotenciarios del grupo que se les daba mejor eso de hilvanar un mensaje creíble de cara a la opinión pública. Aun así, eran incisivos en sus ataques y feroces defensores de sus argumentos. Iván Márquez, el homólogo del Dr. De la Calle, era explicativo y conciliador; Ricardo Téllez muy a lo canciller, como se le llamaba; Jesús Santrich, un verdadero látigo con el gobierno; Pablo Catatumbo y Pastor Alape, más reflexivos y anecdóticos. *Tanja* terminó siendo la sensación por su historia de holandesa renegada de la pacífica y cómoda vida europea para militar como guerrillera. Primero aprendí de ellos por esos alegatos matutinos y después en el intercambio personal al que le apostaron con mayor éxito y donde se franqueaban mejor.

En tanto tiempo de conversaciones encendidas, estuvieron después al alcance las versiones intermedias, mucho más objetivas y esclarecedoras, las de investigadores del conflicto, la de movimiento sociales dedicados toda una vida a ayudar a buscar la paz, y finalmente, las palabras más desgarradoras provenientes de las víctimas, víctimas de una guerra despiadada, quizás como todas las guerras, quizás bastante más. Estaba una de las 21 madres a las que la fuerza pública les asesinó a sus hijos y los vistió luego de guerrilleros para presentarlos como muertos en combate —lo que se conoce como ejecución extrajudicial—, la joven embarazada a la que violaron y luego mataron el feto

en su panza, el gobernador que estuvo casi ocho años secuestrado por los rebeldes y el general de la policía que estuvo cautivo otros 12, la que sufre todavía la desaparición de su hermana, el indígena desplazado de sus tierras, el sobreviviente a una masacre, el torturado, el mutilado, la mamá de un policía asesinado por la insurgencia y el papá de un combatiente guerrillero asesinado por agentes estatales, y el que había sido víctima de unos y otros, más común de lo que se pensaba. Una lista de dolor interminable de la que apenas si tuve una muestra —60 personas de un universo de más de 7 000 000 de víctimas— y fue suficiente para entender que la paz era una urgencia y que no había delante de mí ni buenos ni malos. «Todos han hecho cosas horribles», la sentencia del Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, otro de los visitantes habituales a la mesa de pláticas.

Lo que sucedía a la hora de parcializarse, más allá de una narrativa impuesta a fuerza de repetición, era que los horrores cometidos por las FARC tenían un responsable con nombre y rostro al que señalar con el dedo, en el peor de los casos, se culpabilizaba a toda la organización. Pero los crímenes del adversario caían en terreno ambiguo: el Estado, encarnado en sucesivas administraciones que apenas duraban unos años en el gobierno liderando la confrontación para luego dejarla en manos de la siguiente; soldados o policías de una fuerza que cambiaba de comandantes con regularidad. Demasiado impersonal. Además que, en últimas, el Estado se «defendía» de un enemigo ilegal armado. Solo que, legalidad y justicia, no siempre han ido de la mano.

Las causas fundacionales de la guerrilla parecían auténticas; el propósito del gobierno por desarmar a los grupos sublevados, con la excusa de que reclamasen sus derechos por la vía política,

parecía sensato. El miedo de las FARC a los incumplimientos tenía bases sólidas que tornaban obvias sus reticencias a apurar «la cosa»; la prisa del ejecutivo por dejar todo zanjado, antes que otro gobierno antidualogante asumiese, era compartida por muchos. Y así, un montón de contradicciones más surgían cada día, por solo hablar de las de buena fe y no aquellas erigidas a partir de cizañas partidistas, oligárquicas y mediáticas.

Este pudo haber sido el libro de todo lo que sucedió entre agosto de 2012, cuando se conoció que había un proceso en marcha en Cuba, y agosto de 2016, cuando se concretó un acuerdo listo para ser firmado en Colombia. Definitivamente, lo hubiese sido si cada línea de lo que en La Habana se escribió, con tanto sacrificio, desvelo, contratiempos y empeño, hubiese encontrado cause práctico en Bogotá y se hubiese replicado en todo el territorio colombiano. Desde el momento justo en que un Acuerdo de Paz, con todos los calificativos grandilocuentes del momento de su adopción, comenzó a deshacerse como quien deshoja una flor, este libro cambió su propósito para explicar el desacuerdo posterior, que pasa por una aguda polarización a lo interno del país, por intereses económicos dependientes de la guerra, por hacer política a costa de la exclusión y el sufrimiento de mayorías, por una subordinación acentuada al parecer del domiciliado en la Casa Blanca y por el contexto regional, en el que la relación con Venezuela —otro de los países acompañantes de la paz que resultaría traicionado junto a Cuba— cobraba particular importancia.

A cuatro años de la firma del acuerdo, lapso idéntico al de las negociaciones en su fase pública, la paz de manual, no acababa de sobrevivir más allá del papel.

La fatigosa búsqueda de la paz

El año de la paz en Colombia: 2016. La paz de papel, la que más que paz en sí misma, era punto de partida para la construcción de ese escenario de armonía y concordia que ambicionaban, más que nada, los colombianos porque los vivos —y no pocas generaciones atrás— no habían conocido otra cosa distinta a la guerra. El pronóstico se cumplió no exento de altibajos. Unos seis años de búsqueda a una salida negociada al conflicto más antiguo del hemisferio occidental dieron como resultado una sociedad polarizada, dos versiones de un mismo acuerdo final para la terminación de la guerra y el Premio Nobel de la Paz en manos del presidente Juan Manuel Santos.

La Habana, capital de la paz

Cuba fue el escenario del acercamiento, de la negociación y del desenlace. La isla acogió a dos partes, que por más de medio siglo, uniformes y armas de por medio, se batieron en el terreno de combate. Ahora, los enemigos cambiaban los fusiles por la diplomacia, al saber que no había derrotados ni vencidos, en una confrontación por demás fratricida, y donde el listado de víctimas se hacía cada vez más interminable, tanto como doloroso.

Los primeros contactos entre la administración de Santos y los insurgentes de las FARC se produjeron en estricto secreto. En agosto de 2012 se le informaba al mundo de la existencia de una agenda de seis puntos para el inicio de una fase pública del proceso, que en lo adelante se conocería como *Los diálogos de paz de La Habana*.

Es así que el 19 de noviembre de ese mismo año, se instala en la capital cubana la mesa de conversaciones, la cual había tenido un mes antes una presentación formal en Oslo, dado el caso que Noruega acompañaría a Cuba en este esfuerzo diplomático, ambos países como garantes responsables, imparciales, pero de invaluable ayuda para cada crisis que sobrevendría.

Desde entonces, comenzó una rutina mediática, que no por cotidiana se hacía aburrida o predecible. Las alocuciones de los jefes guerrilleros, quienes prácticamente por primera vez tenían la posibilidad de expresarse ante la multiplicidad de medios que se albergaron en la isla para reseñar día a día el proceso, marcaron la pauta de la negociación, toda vez que el diálogo se mantenía en absoluta discreción al margen de los micrófonos para preservar la integridad de las conversaciones.

Además de la reserva, otra máxima guio la plática: el hecho de que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Un juego de palabras que daba por sentado que, si no se llegaba al final de la negociación, todo lo consensuado quedaba en letra muerta.

La agenda

Como primer tema de discusión: la *Tenencia de la tierra*. Y es que la guerrilla más grande de Colombia tuvo sus orígenes precisamente en movimientos campesinos que se hastiaron del latifundismo y la explotación de los grandes terratenientes. Ha sido el campo colombiano el epicentro de la pobreza y la desigualdad en un país con sobradas riquezas naturales inequitativamente distribuidas y era entonces urgente poner sobre el tapete la necesidad de una reforma agraria integral.

Le siguió la *Participación política*. Más de una vez los de las FARC enfatizaron en que lo que llevaban a cabo con el ejecutivo

colombiano no era un proceso de rendición, sino un diálogo entre iguales. Por tanto, la dejación de las armas —dejación y no entrega porque jamás se las entregarían a su adversario— estaría condicionada al acceso a la política, siendo reconocidos legalmente como un partido de oposición con aspiraciones de gobierno. Con esta postura, reivindicaban además a toda la izquierda del país, aniquilada a golpe de bala por disentir de los poderes político y económico.

En el orden temático debía abordarse a continuación el punto denominado *Fin del conflicto*, pero fue postergado, dando paso en el debate a la problemática de las *Drogas*. Siendo, probablemente, el mayor flagelo de Colombia, y pesando sobre los guerrilleros la acusación de ser parte del cultivo y el tráfico de estupefacientes, sin embargo, el asunto fue de los más fluidos en la mesa de conversaciones. Se pactó el compromiso de sustituir los cultivos ilícitos por programas de desarrollo agrícola, acompañado ello de la intervención estatal en aquellas áreas rurales donde la coca se convirtió en un elemento de subsistencia para el campesinado, que ha sido al fin y al cabo el eslabón más débil de la cadena de producción, comercio y consumo.

Tocó el turno a las *Víctimas del conflicto*, el gran tema que sumió a la mesa en un letargo, en un círculo vicioso de logros y tropiezos. El problema central estaba en que dentro de este tópico se incluía una cuestión trascendental: la justicia. Por lo que, por más de un año las partes barajaron fórmulas disímiles con la ayuda de numerosos expertos de todas las áreas para elaborar un mecanismo inédito en materia jurídica. Surge así la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la cual se juzgaría a los actores del conflicto que hubiesen cometido crímenes graves, tipificados como de lesa humanidad, se establecerían penas especiales, se otorgaría amnistía para los delitos políticos y se

diseñarían las distintas formas de retribución moral y material a los colombianos afectados por el conflicto, mas no habría barrotes ni uniformes a rayas para los alzados en armas.

Tal fue el impacto de haber solucionado el tema de las víctimas y la justicia, que para el anuncio vino hasta La Habana Juan Manuel Santos y estrechó su mano por primera vez con el máximo jefe de las FARC Timoleón Jiménez, *Timochenko*, una acción que se repetiría otras tres veces más hasta el apretón definitivo con el que se proscribiría la guerra y se daría el paso a la reconciliación y la reconstrucción de Colombia.

De este encuentro surgió también el augurio que resultó fallido. Por primera vez se le ponía fecha a la paz: el 23 de marzo de 2016, pero las partes fracasaron en el intento de cumplir con el mandato. Si algo aprendieron gobierno y FARC, a golpe de crisis y trabas, es que las presiones y los plazos siempre resultaron adversos para el proceso.

La recta final

Dos temas quedaban en el tintero, pero con avances sustanciales, pues al demorarse el consenso en el asunto de impartir justicia, las partes habían decidido cambiar las dinámicas de trabajo, hasta entonces de una mesa única, a comisiones paralelas. En la etapa final, el cronómetro popular, mediático y político los obligó a entrar en una especie de cónclave con instrucciones precisas de Santos de no parar hasta que saliera el humo blanco de la paz.

Las interminables sesiones de pláticas, que en muchos casos se extendían hasta la madrugada, proyectaron la hoja de ruta para el desarme y el cese bilateral de las hostilidades.

Con un texto final, que recogía la totalidad de los preacuerdos, y la decisión de refrendar lo pactado a través de un ple-

biscito, se cerró en La Habana la negociación el 23 de agosto de 2016 para ser suscrito el gran acuerdo, de manera oficial, en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, el día 26 de septiembre de ese año.

Primer intento de paz

Palomas, camisas blancas, cantos y aviones sorprendidos en son de concordia y no de guerra adornaron la ceremonia más esperada en Colombia. Una gran cantidad de invitados internacionales dando un espaldarazo al proceso de reconciliación entre el gobierno y las fuerzas insurgentes. Parecía cerca la paz, al fin tangible, solo era cuestión de recibir el apoyo popular que se vaticinaba mayoritario. Pues Santos y Timochenko habían prometido que los colombianos tendrían la última palabra y confiaron en ellos para coronar la concordia.

Contrario a todo pronóstico, otro sería el resultado. El plebiscito realizado el 2 de octubre, apenas seis días después de la pomposa ceremonia de Cartagena, dio la victoria por estrecho margen a los detractores del acuerdo de paz, un grupo liderado por el senador opositor y expresidente del país, Álvaro Uribe, quien supo articular una campaña de desinformación y mentiras alrededor del acuerdo que conllevó al triunfo del No en la consulta popular.

A ello se sumó un abstencionismo superior al 60% y una imagen deteriorada de la guerrilla que caló fundamentalmente en los electores de las ciudades alejadas del conflicto, así como el voto castigo a la gestión de Santos como presidente.

Lo cierto es que los más de 6 000 000 de colombianos que expresaron su descontento en las urnas con lo consensuado en La Habana, obligaron a las partes a renegociar e incorporar un grupo de propuestas modificativas de algunos temas

esenciales, entre ellos: el asunto de género, la elegibilidad política y la justicia.

Voló la paloma

Cuarenta días después del fracaso en el plebiscito y luego de un ejercicio profundo de diálogo político en que el gobierno escuchó a la oposición y trasladó sus insatisfacciones a los guerrilleros, vio la luz un texto mejorado, con ajustes y precisiones de narrativa y contenido. Un documento que, al decir de sus autores, mantenía el espíritu del acuerdo inicial, pero sumaba al menos el 80% de las propuestas de la oposición, la misma que quedaría igualmente inconforme con el nuevo pacto.

Es así que se celebra la segunda firma del segundo acuerdo de paz, en una ceremonia menos suntuosa, con menos invitados, en el corazón de Bogotá a pocos pasos de las principales instituciones políticas del país. Sería bautizado como el Acuerdo de la Esperanza, o también el acuerdo de Colón, en referencia al nombre del teatro que acogió la rúbrica.

La refrendación esta vez tuvo lugar en el seno del Congreso de la República. A pesar de las críticas que exigían un nuevo plebiscito, el gobierno apoyado en la Constitución fue categórico en afirmar que el legislativo es la máxima expresión del pueblo y por tanto lo representa políticamente.

Se produjeron dos votaciones: una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes, y ambas lograron la mayoría de los votos de los parlamentarios, a excepción de los diputados del partido de Uribe, Centro Democrático, quienes se retiraron de las sesiones.

Del papel a la práctica

Finalmente, el primero de diciembre fue elegido por los equipos negociadores del Gobierno y las FARC como el día D, es decir, el día a partir del cual se comenzarían a implementar los protocolos de dejación de armas y concentración de los guerrilleros para su tránsito a la vida civil en legalidad, lo cual se produciría en un período máximo de seis meses. De acuerdo con lo estipulado, el desarme se realizaría de manera escalonada y la totalidad del armamento quedaría en manos de Naciones Unidas 150 días después del día D.

Todo el proceso anterior se puso en marcha bajo la supervisión de la ONU, a través de un mecanismo de verificación y monitoreo, encargado además de la seguridad de los guerrilleros y la estabilidad del cese el fuego.

En el ámbito político, el Congreso comenzó, desde entonces, la tramitación de los proyectos de ley necesarios para la ejecución de la letra chica de las 310 páginas del Acuerdo Final de Paz. El camino más viable a la vez que polémico para algunos magistrados y senadores resultó ser un mecanismo denominado *fast track* (vía rápida) por el cual se reducirían a la mitad los tiempos legislativos para poder darle luz verde a la implementación.

Como todo cambio estructural, pasarán años para que los colombianos interioricen y sientan los beneficios de las reformas en turno. Parar el derramamiento de sangre entre hijos de una misma patria ha sido el logro mayor, pero acecha desde el primer momento hasta hoy la sombra de la guerra sucia. A Colombia se le ha enquistado la violencia y es precisamente esa cultura de la intolerancia hacia lo diferente la que más tiempo tomará cambiar.

Seguía vivo el paramilitarismo azuzando odios y quedaba también otra fuerza insurgente en armas, el Ejército de Liberación Nacional, cuyo proceso de diálogo político no terminaba de cristalizar. Alcanzar un acuerdo integral que sumase a los insurgentes del ELN terminó siendo la tarea pendiente del presidente Santos, quien afirmara que «toda vida es sagrada y toda guerra, una derrota».

Tras el acontecimiento que significó la firma de la paz, el año 2017 se volvió crucial para el país antes de adentrarse en el año electoral de 2018. Los colombianos y el mundo que les acompañó en su camino conciliador esperaban que, durante ese tiempo, la política se arrojase de democracia y que la palabra fuese la única arma usada por los hombres para enfrentar sus diferencias. La paz empezaba a construirse en ese entonces, mientras sus eternos enemigos planeaban las escaramuzas.

Timochenko: «Sería un suicidio político firmar un acuerdo y no cumplir lo que allí se pactó»

Entrevista a Rodrigo Londoño, Timochenko. Marzo, 2016.

Timochenko, nombre con el que Rodrigo Londoño se bautizó en la guerra —los guerrilleros aborrecían que se les refiriese como «alias»— no estuvo desde el principio en La Habana; era el máximo jefe rebelde pero no plenipotenciario designado para asuntos del proceso, esa tarea recaía en su segundo, Iván Márquez, y un pequeño equipo. A ratos, se rumoraba entre pasillos del Palacio de Convenciones, la sede habitual de los diálogos de paz, que se le había visto, que andaba por esos predios en «modo avión», de manera clandestina. Pero no fue hasta bien avanzada la negociación que su presencia fue oficializada y comenzó la batalla mediática por lograr la entrevista. Como la mayoría de los alzados en armas, no gustaba de los micrófonos porque la prensa, y en particular la colombiana, trataba a la insurgencia con la misma adversidad que el enemigo en el terreno de combate.

Fue poco después del 23 de marzo de 2016, la fecha fatídica, la primera camisa de fuerza que se le puso a la paz pero que le quedó estrecha, que se hizo posible la conversación con el número uno de las FARC. Resultó más que oportuno que fuese en ese momento, porque después de haber fracasado el plazo fijado por él y Santos para la esperadísima firma del acuerdo final de paz, primaba un sentimiento de desánimo en torno al proceso. Los colombianos consideraban que ya se había dilatado demasiado. Y es que era sumamente difícil desde fuera de la mesa entender que, acercar posiciones tan enfrentadas, no era cosa de días, ni meses, ni siquiera años. A estas alturas, puedo asegurar que, después de conocer los modos de pensar

de ambas partes, de saber las intenciones y aspiraciones con las que llegaron al diálogo y cómo tuvieron que ir moldeándolas, de descubrir las crudas historias de guerra detrás de lo que ahora era una plática entre iguales — o todo lo iguales que seres tan hostiles podían considerarse el uno al otro — bastante sosegada, y hasta diplomática, — no exenta de exasperaciones, furia, puñetazos, ultimátum, chantajes, incómodos silencios o retiradas bruscas — cuatro años, descontando el tiempo de aproximación y exploración secreta, me parecen un abrir y cerrar de ojos. Hay que tener en cuenta que no se había pactado sólo el desarme, lo cual hubiese durado, evidentemente, menos tiempo, fue un mega acuerdo de proporciones históricas, abarcador de todas las problemáticas de Colombia y con propósitos tan idealistas — cuasi románticos como el de tierra para todos y reforma política en medio de un gobierno neoliberal — que se convirtió en una seria amenaza para los centros de poder en el país.

Más allá de que no hubo foto, apretón de manos ni mucho menos documento con sendas rúbricas para anunciarle al mundo aquel 23 de marzo, que Timochenko siguiera en modo público en la capital cubana también auguraba que pronto habría «algo» de lo que presumir. Nadie lo sabía en ese momento, pero el 23 sí resultó ser un día para la posteridad, solo que tres meses después de lo esperado.

Por lo pronto, urgía saber por voz de uno de sus protagonistas por qué no había consenso definitivo aún.

Timochenko, ¿qué falló para que el 23 de marzo no se firmase la paz?

No creo que se deba ver como que algo falló. Trabajamos ambas partes muy intensamente para tratar de cumplir esa meta que nos habíamos propuesto. Es un acuerdo que hicimos con el presidente Santos.

Estamos ya en la etapa final del proceso, donde se comienzan a tocar aspectos sumamente delicados de la negociación, delicados para ambas partes, pero en especial para nosotros. Estamos discutiendo ya los detalles de la reincorporación nuestra a la vida política legal, porque siempre hemos estado haciendo política con las armas.

Tenemos una carga histórica que pesa mucho en todo este diálogo, en toda esta concertación. Han sido experiencias de distintos procesos de paz que ha habido en Colombia, amnistías, nuestro comandante en Jefe, Manuel Marulanda, pasó por dos amnistías, conoció lo que en aquella época se dio, donde a la mayoría de los amnistiados no les cumplieron y a muchos los asesinaron, y hay experiencias más recientes, por ejemplo, en la negociación que realizó el grupo guerrillero M-19, que su principal líder fue asesinado pocos días después de haber firmado la paz. Entonces, todos esos elementos pesan y por eso hay que ser muy cuidadosos en lo que se acuerda.

Ahora, hay otros elementos que inciden. Nosotros llegamos a La Habana en lo que se llamó el encuentro exploratorio que fue secreto, justamente, a explorar la posibilidad de iniciar el diálogo con el gobierno. Hay que decir que el planteamiento inicial del gobierno fue un planteamiento hacia una guerrilla que ellos consideraban que estaba derrotada, que estaba desmotivada, que estaba desmoralizada, fruto de la intensa ofensiva del famoso Plan Colombia. Y allí lo que encuentran es una realidad distinta. Incluso, esos seis meses que duró el encuentro exploratorio fueron bastante difícil, duro, es más, le puedo contar a usted una «chiva» (primicia) periodística, en medio de eso hubo un rompimiento, hubo un momento en que se dijo: aquí no hay más, vamos a anunciarle al pueblo colombiano que no pudimos, que estuvimos haciendo este esfuerzo y no se

pudo. Pero la cosa se recompuso, con la ayuda muy importante de Cuba y Noruega, se lograron otra vez conciliar posiciones y logramos esta agenda.

Entonces, también se nota que algún sector, yo no digo que todos, pero hay algunos sectores que quieren, a pesar de lo que hemos avanzado, de que ya acordamos una agenda, de que nos sentamos en igualdad de condiciones, que estamos concertando, no negociando la entrega de una organización revolucionaria, hay sectores que, en estos momentos tan complejos, tratan de volver otra vez con ese planteamiento (la rendición) y eso para nosotros sí que es inaceptable.

¿Será sensato volver a fijar nuevas fechas para la firma de un acuerdo, dado el caso que usted y el presidente Santos se han comprometido con que 2016 es el año de la paz?

Las cosas que nos falta acordar, que nos falta conciliar, que nos falta consensuar no son muchas, son complejas, sí, pero nosotros estamos convencidos, si de verdad —como yo lo creo— hay la voluntad del presidente Santos de sacar adelante este proceso y, como me dijo por ahí en una carta personal, «tenemos la responsabilidad histórica de dejarle a las futuras generaciones un país en paz», yo creo que encontramos la solución, vamos a lograr ponernos de acuerdo.

El proceso a lo interno de la mesa de conversaciones y de cara a la opinión pública colombiana ha vivido de crisis en crisis. Ahora mismo, ¿cuáles son los temas críticos que tienen trabada la negociación? Ha trascendido que existen diferencias sustanciales en asuntos como la dejación de armas y las zonas de ubicación de la guerrilla.

Decía un compañero por ahí que vamos de crisis en crisis hasta el acuerdo final. Nosotros hemos realizado un compro-

miso entre las partes sobre el hecho de que las discusiones internas no hacerlas públicas. Pero han salido a flote aspectos que de todas maneras generan inquietud.

A nosotros nos parece una falacia esa matriz que se ha tratado de imponer de que nosotros estamos dándole vueltas y vueltas a la dejación de las armas, que no hemos mostrado disposición real de dejar las armas, y que de pronto nuestro interés es hacer política con las armas en la mano. Eso es una verdadera mentira. Seríamos suicidas y nosotros no tenemos vocación de suicidas. Sería un suicidio político firmar un acuerdo y no cumplir lo que allí se pactó. Sería un suicidio político acordar incorporarnos a la vida legal, con las normas que tiene el establecimiento, y tener las armas ahí, listas para usarlas en cualquier momento o seguir usándolas. Esto ha sido un proceso sumamente serio, rodeado por una buena parte del pueblo colombiano, lo hemos hecho en buena medida de cara al pueblo colombiano, también está inmersa la comunidad internacional, está Cuba, está Noruega, está Venezuela, está Chile, ahora se está comprometiendo mucho más Estados Unidos, entonces, sería un acto de mucha irresponsabilidad, y nosotros hemos sido siempre muy serios en lo que decimos y en lo que acordamos.

En los temas que le mencionaba antes relacionados con el fin del conflicto, ¿cuál es la visión del gobierno que la guerrilla no comparte?

Al finalizar este proceso de dejación de armas, en la concentración que llaman ellos, nosotros decimos localización de determinadas áreas para iniciar la dejación, nos quieren tratar como si fuera un proceso de desmovilización. Y no. Vamos a entrar en una etapa previa, que es transitoria y que, incluso, mientras más corto sea ese tránsito, mucho mejor para nosotros, porque a veces quieren hacer ver que nosotros estamos dándole

largas. Yo creo que los más interesados en lograr un acuerdo pronto somos nosotros.

Entonces, ese tránsito va a ser corto, pero no es un momento de entrega, ya están diciendo que tenemos que entregar las armas, que las tenemos que destruir. No. Ahí hay una serie de iniciativas que están sobre la mesa, sobre las cuales también ya hay consenso en algunas de ellas, de cómo va a ser ese proceso. Y allí se nos debe tratar con dignidad.

Van cuatro, de seis puntos en la agenda, zanjados. Hemos estado hablando hasta este minuto de uno de los pendientes, el fin del conflicto, pero queda además la refrendación. ¿Cómo ve la guerrilla este tema: habrá plebiscito, constituyente o un mecanismo intermedio?

Esa es una de las preocupaciones que tenemos, que muchas de las veces el gobierno desconoce ese sexto punto, como si no estuviera en la agenda. Y es nuestra insistencia en la mesa, ese sexto punto tenemos que consensuarlo. Ya se han ido tocando algunas cosas, pero es que en este tema de la refrendación no nos hemos sentado, con toda la calma del caso como debe ser, a mirar las distintas ideas y consensuar las distintas posiciones y llegar a una consensuada.

Esperamos que en esta etapa que falta, en esos próximos ciclos, acordemos esos temas. Está la verificación también, está la financiación y el cumplimiento de lo que se va a acordar.

Nosotros nos comprometimos, y en la agenda está, a la dejación de armas, pero es un acuerdo de dos partes, las dos partes se comprometen a hacer dejación de armas, interpretando esto como la no utilización de la violencia en la política. Eso va tanto para uno como para otro. ¿Nosotros qué hacemos? Dejamos las armas, no las vamos a usar. Pero el gobierno también tiene que comprometerse. Nosotros venimos de una etapa, y todavía la

estamos viviendo, en medio de este proceso han asesinado a más de 25 líderes sociales en los últimos días. Bueno, y frente a eso qué. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que tenemos unas mínimas garantías para hacer ejercicio de ese derecho (a la política) sin la posibilidad de que nos asesinen tan miserablemente.

Usted ya había advertido que no se iba a dar la foto con Obama, ese momento que el gobierno colombiano soñó: hacer coincidir la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba con la firma del acuerdo final de paz para Colombia. En cambio, se dio otro encuentro importante que fue la reunión con el Secretario de Estado, John Kerry. ¿Qué le planteó la guerrilla a Estados Unidos, un país que los ha considerado una organización terrorista, un país que mantiene órdenes de captura y extradición sobre muchos de los principales jefes insurgentes, un país que ofrece 5 000 000 de dólares a modo de botín por información que sirva para apresarlos a usted, por ejemplo?

A mí me satisfizo mucho que, de entrada, el señor Kerry planteara la disposición de su gobierno para ayudar hasta donde fuese posible en el avance del proceso de paz. Me satisfizo también mucho el conocimiento que tiene del proceso, de las dificultades mismas, entró hablando de ellas, de que las entendía, incluso, nos recomendaba que no fuésemos a anunciar nuevas fechas sobre la fecha frustrada, que eso sería un error garrafal.

Nos pidió que habláramos con sinceridad y con franqueza sobre qué podía hacer Estados Unidos. Le planteamos distintas iniciativas. Recuerde que Estados Unidos estuvo detrás del famoso Plan Colombia, que lo financió con más de 10 000 millones de dólares. Toda la tecnología de punta la puso a disposición de las Fuerzas Armadas colombianas. Hoy en día,

Colombia tiene la cuarta flota de helicópteros más grande del mundo, la segunda en América Latina, fruto del apoyo de Estados Unidos.

Mire, Estados Unidos se la jugó a la guerra. Inicialmente pusieron dos años como plazo para lograr el objetivo de destruirnos, pasaron cuatro y no pudieron. Le dieron a ese señor (Álvaro Uribe) la posibilidad de otros cuatro años (al frente de la presidencia), y tampoco. Dijeron no más. De todas maneras, la guerra también desgasta; la guerra cuesta y la plata se acaba.

Uno sabe que hay un interés geoestratégico. Colombia es un sitio neurálgico dentro de la geo-estrategia de Estados Unidos y nosotros concebimos su posición dentro de ese criterio. Pero saludamos el que ahora tengan la disposición, de pronto no con la suficiente cantidad de plata pues dijo que había 450 millones de dólares, y eso frente a los 10 000 millones invertidos en el Plan Colombia, no es nada. Pero bueno, algo es algo, peor es nada, dice el dicho.

Lo más importante es la voluntad, la disposición, porque eso deja sin base a aquellos sectores recalcitrantes de la ultraderecha que quieren seguir viviendo de la guerra, quieren seguir aumentando su riqueza, su capital, sobre la base de la destrucción de nuestra patria, de la muerte de nuestros hombres, de nuestra gente, de nuestro pueblo.

La imagen de la guerrilla se ha construido sobre historias medio tenebrosas, en parte por la versión hegemónica de las distintas administraciones colombianas, un poco por el tratamiento de los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, adversos a las FARC, y un poco también por los errores y horrores cometidos en la guerra. Teniendo en cuenta esa realidad y sabiendo que cambiar las mentes de las personas tarda mucho más tiempo que las transformaciones de

índole formal y legal, ¿cómo borrar o lidiar con esta imagen una vez que se firme la paz y tengan que reinsertarse como uno más dentro de la gente. ¿No hay miedo al rechazo?

Tiene razón en lo que usted plantea y es una preocupación que tenemos porque el Plan Colombia no fue solamente toda esa parafernalia bélica: helicópteros, aviones, tecnología de punta, satélites, instructores de los mejores que tiene Estados Unidos se vincularon a la lucha contra nosotros. Sino también, dentro de ese plan hubo el diseño de lo que ellos llaman la acción psicológica. Hubo todo un diseño y toda una orientación, comenzando por negarnos nuestro carácter rebelde, se fue imponiendo la matriz de que éramos terroristas, criminales, asesinos. A los medios de comunicación le pasaron directrices para que nunca se refirieran a nosotros como guerrilleros o subversivos. A pesar de que fue una confrontación muy dura, meses donde hubo 300 o 400 operaciones militares, donde hubo pérdida de vidas humanas, nada de eso se conocía en los medios, todo eso estaba neutralizado. Es decir, en Colombia es como si no hubiera guerra en los medios de comunicación. Se aprovechaba cualquier error que pudiéramos cometer, cualquier acción cuyos resultados podían ir en contra de nosotros, y eso sí se amplificaba, y así se fueron generando matrices de opinión, tratando de estigmatizarnos. Yo creo que los cubanos tienen mucha experiencia en eso también. Han tenido todos estos años una lucha muy similar, viendo cómo se ha tratado de pintar todos estos años al mundo que Cuba es una dictadura. Es algo muy similar y con las mismas herramientas.

Nosotros, por la experiencia que hemos vivido, sabemos que eso lo contrarrestamos muy fácilmente hablando con la gente, teniendo la oportunidad de conversar y hablando con la verdad. Ese escenario que hemos logrado crear a partir del

acuerdo en la mesa de conversaciones de la comisión de la verdad, la comisión del esclarecimiento del conflicto, ese escenario va a ser muy importante para nosotros, porque allí de verdad se van a colocar los hechos tal y como fueron, cada uno deberá decir su verdad y eso es algo favorable a nosotros. Además, cuando tengamos la posibilidad de hablar abiertamente con la gente, sin ninguna restricción, la gente nos va a entender porque les vamos a hablar como hablan todos, porque nosotros venimos del pueblo colombiano. Y entre pueblo nos entendemos.

Hablando de verdad, hay que remitirse a los hechos, a los crímenes cometidos por un bando y por otro, y al perdón, porque la reconciliación pasa en primera instancia por el arrepentimiento y por saber perdonar. ¿De qué se arrepiente Timochenko?

Nunca había querido decir esto: yo me arrepiento de no haber ingresado antes a la guerrilla y haberme preparado mucho más para poder haber aportado mucho más a la guerrilla.

Usted dijo que no descartaba volver a la guerra si el gobierno les hacía una jugada sucia. ¿No tienen temor de volver a alzarse ahora que por todos lados se rechaza la opción armada?

Si nos obligan, estamos en disposición porque somos revolucionarios, tenemos unos ideales y lucharemos por ellos hasta el fin de nuestros días. Queremos hacerlo en paz, queremos hacerlo sin necesidad de hacer uso de las armas. Estamos haciendo el máximo esfuerzo y dando todo lo que nosotros tenemos en función de crear esas condiciones, pero todo no depende de nosotros. Y hasta que no exista el acuerdo final, tenemos que estar en disposición de seguir haciendo lo que hace 50 años venimos haciendo, no lo quisiéramos hacer, pero

siempre hay que estar en disposición. Nosotros no vamos a arrear las banderas por las que hemos luchado tantos años. Vamos a cambiar de método, de forma, es otra cosa, pero los objetivos siguen válidos.

¿Cómo ve Timochenko a Santos, un presidente en el que se puede confiar, que le apuesta verdaderamente a la paz? ¿Qué desaciertos cree que ha tenido al encarar esta negociación?

Lo primero es valorarle la audacia, la decisión y la valentía de haber iniciado este proceso. Claro, sabemos que lo hace fruto de unas condiciones y circunstancias, una guerra que venía agotando el presupuesto nacional, una guerra que venía afectando a las Fuerzas Militares, porque fueron muchos años de confrontación, hay cosas que todavía no se conocen, no salen a la luz pública, pero en esos momentos de guerra había que ir a los hospitales militares, la cantidad de hombres y mujeres ahí tendidos fruto de la guerra. Todo eso venía afectando, además de una situación económica bastante difícil y compleja. La implementación de grandes mega proyectos de infraestructura y de minería transversalizaban las zonas de conflicto, y necesitaban resolver el problema, pues decidieron jugársela a esto.

De todas maneras, uno sabe que él tiene que manejar ahí un equilibrio sumamente difícil. A cada rato, a uno le toca ponerse en los pantalones de él para entenderlo, para comprenderlo. Lo importante es que, hasta el momento, a pesar de los vaivenes que ha tenido todo esto, se la ha jugado y le ha tocado lidiar con un sector muy complejo. Yo creo que ahora se la irá a jugar con más decisión porque tiene el apoyo de Estados Unidos, que eso es clave.

Cuando habla de sectores complejos, se refiere a los enemigos de la paz. ¿Quiénes son esos enemigos?

Los que se han alimentado y los que se han enriquecido; los que han mantenido el poder político a partir de la guerra. Esa es la gente que no quiere que haya paz en Colombia. Ven en peligro la posibilidad de seguir enriqueciéndose. Ven en peligro sus privilegios. Y cada vez son menos, son mínimos, menos representativos. Lo que pasa es que hacen mucha bulla, escandalizan mucho.

Colombia necesita paz, pero una paz completa, con todos los alzados en armas, y aún no termina de cristalizar el proceso con el ELN.

Con los compañeros (del ELN) intercambiamos, incluso hemos tenido la oportunidad de intercambiar, facilitada por el propio gobierno de Santos; aquí en La Habana, tuvimos una reunión con el comandante Gabino. Nosotros estamos convencidos que ellos también se la van a jugar por la paz. ¿En qué momento? Yo espero que sea lo más pronto posible.

Pensemos en las FARC sin armas. Al movilizarse desde la política, ¿cuáles serían las banderas que defenderían? ¿Intentarían alianzas?

Nosotros hemos venido pensando que tenemos que convertirnos, si logramos cristalizar este proceso, que tenemos la fe que sí, en el catalizador de todos aquellos sectores de izquierda, democráticos, de avanzada, populares, los que están peleando por el medio ambiente, con una cantidad de sectores con los que nos identificamos, en los objetivos de construir una Colombia amable, una Colombia en la que la desigualdad la reduzcamos a su mínima expresión, en que acabemos el analfabetismo, en que acabemos esa alta tasa de mortalidad infantil que tenemos —tenemos regiones en que la tasa de mortalidad infantil

supera el 40% — nada de eso es justo, en un país con las riquezas que tiene Colombia. Si nosotros logramos jugar ese papel, que es para el cual nos estamos preparando, nos sentimos por bien servidos.

En cada acuerdo parcial y ante la resolución de cada crisis en el diálogo, las partes agradecen constantemente a los países garantes, Noruega y Cuba. ¿Se imagina Timochenko este proceso, con tal nivel de avance a las puertas de sellarse el acuerdo final, en otro territorio que no fuese Cuba?

La decisión más acertada fue haber iniciado estas conversaciones en Cuba. Nosotros teníamos nuestra preocupación porque era venirnos de Colombia, que queda bastante lejos, pero la verdad es que eso se ha visto compensado, primero, por la forma como nos han atendido, como nos han tratado y las condiciones que se nos han brindado, y porque nos identificamos con los objetivos de la Revolución Cubana, son nuestros objetivos. Aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestra solidaridad incondicional a la Revolución Cubana. Aquí hemos vivido en carne propia lo que es la solidaridad revolucionaria, no de dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene.

Para nosotros ha sido, incluso, un elemento de motivación. La mejor forma de retribuir todo lo que hemos recibido en estos años de la Revolución Cubana, en aras de la paz de Colombia, es alcanzar la paz misma. Yo tengo una emoción muy grande, jamás pensé que iba a poder estar en la patria de Fidel, en la patria de Raúl, del Che, poder hablarle al pueblo cubano, un referente que ha sido nuestro en toda esta lucha en las montañas de Colombia.

¿Por qué el No a la paz en el plebiscito?

El 2 de octubre de 2016, Colombia toda decidía si abrazaba la paz que proponía el acuerdo negociado en La Habana y firmado apenas seis días antes en Cartagena de Indias, o si seguía padeciendo guerra y muerte. Pensaron las partes involucradas en el diálogo conciliatorio, como también pensó la comunidad internacional en su conjunto, que aquello del plebiscito iba a ser una consulta formal con un resultado predecible y, cual cubo de agua fría, un No, por ínfimo margen, causó espasmo.

¿Qué pasó? ¿Por qué triunfaba la opción negativa si por años se clamaba paz, se exigía paz, se imploraba paz, se soñaba con la paz?

El día siguiente a la jornada electoral, Bogotá amanecía aparentemente tranquila. Había cesado la lluvia que marcó las votaciones por la cercanía del huracán Matthew —que impactaba con furia categoría 5 la costa caribeña del país— y la gente volvía a sus rutinas de trabajo y de vida. Pero en la Plaza Bolívar, corazón político, cultural y social de la ciudad, se escuchaban e, incluso, podían adivinarse según el rostro de los transeúntes, los argumentos entrecruzados del sentir popular. Un dato ilustrativo resultaba ser que, la mayoría de los partidarios del Sí frustrado aquella mañana en la céntrica plaza, transpiraban humildad en su vestir, decir y comportarse; mientras que los convencidos del No, lucían traje y corbata, o algún otro signo representativo de estar más arriba en la cadena alimenticia.

«Siento una tristeza muy grande al ver lo que está pasando en mi país. Vimos un país dividido totalmente. No hay ganancia para unos ni para otros».

«Yo era partidario del Sí, porque quería dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, una paz duradera, no que siguiésemos

con este conflicto armado y que hubiesen muertos y atentados en cada punto de la región colombiana».

«Lo que pasó es para bien del país porque ganó la paz y perdió el acuerdo. Eso conlleva a que se haga un acuerdo diferente porque no hay que desconocer que más de la mitad del país no estaba de acuerdo con el acuerdo, con la paz todo el mundo está de acuerdo».

«Tal vez hubo mucha desinformación en la población, en las personas que votamos. Y una decepción total porque esperábamos que ganara el Sí».

«La gente está resentida con la guerrilla. Habría que ver si de verdad los de las FARC están arrepentidos y cuáles son sus intenciones».

«Es inconcebible, increíble que se hayan opuesto a ese Sí. Eso es solo rencor, sólo odio, sólo envidia de que Santos sí pudo lograr la paz. Los demás, como no la lograron, entonces hacen lo imposible pa' desacreditarlo, pa' acabarlo, pa' destruirlo. Usted sabe, mi niña, que cuando lo bueno camina, lo malo corre pa' hacerle zancadilla y hacerlo caer.»

El deseo mayoritario de paz no se tradujo en las urnas. En parte, por viejos rencores con la guerrilla, insatisfacciones en la gestión presidencial y la siempre presente manipulación mediática, acompañado todo ello por el desconocimiento de cuánto, qué y cómo se había negociado. El altísimo abstencionismo, superior al 60%, la confianza ciega en las encuestas que pronosticaban victoria al Sí, y una muy bien hilvanada campaña de desinformación sobre el contenido de lo pactado en La Habana, a cargo del expresidente Álvaro Uribe, condujeron al resultado adverso en la consulta. Parecía que Colombia había obviado el llamado de las partes negociadoras: «es mejor un acuerdo imperfecto que salve vidas, a una guerra perfecta que siga generando víctimas».

En busca de otros por qué, aprovechando el poder vivir por esos días de cerca la realidad colombiana para poder entender lo complejo del conflicto y la diversidad de pensamiento de su gente después de conocer las historias de vida más duras que he escuchado, conversé con Alejo Vargas, politólogo y escritor, académico de alto rango en la Universidad Nacional de Bogotá, pero más que todo, un activo participante en diversas etapas del proceso de paz.

Dr. Vargas, ¿qué factores incidieron, a su juicio, en este resultado contrario al acuerdo de paz, que por demás ya había sido firmado con bombos y platillos, y se vendía como un éxito rotundo, apoyado por un despliegue mediático internacional?

En estos cuatro años, las dos delegaciones han logrado superar, como en todo proceso de este tipo, dificultades, tensiones, crisis, pero siempre han logrado salir al otro lado. ¿Qué sucede? Que buena parte de la sociedad colombiana ha tenido una mirada bastante distante de este proceso de conversaciones, por varias razones. Una, la primera y más obvia, porque es en el exterior, luego eso se vuelve algo que no toca la cotidianidad de las personas. Segundo, porque también, en un país mayoritariamente urbano, el conflicto hace ya varios años dejó de tener un impacto sobre el mundo urbano. Para la población que vive en las ciudades, que es casi el 70%, el conflicto es una cosa que concibe distante, allá en el mundo rural. En tercer lugar, me parece que la polarización política entre dos grandes líderes, el presidente Santos y el expresidente Uribe, se terminó trasladando también al tema de la refrendación de los acuerdos.

En eso hubo un manejo hábil del sector que promovió el No. Porque más allá de que, efectivamente, había sectores que tenían dudas, preguntas o que no compartían aspectos

del acuerdo, también se dio manipulación de información, se dijeron verdades a medias. Por ejemplo, hace unas semanas, el Ministerio de Educación tuvo una crisis con sectores de la sociedad por la llamada «mirada de género» (propuesta del Acuerdo de La Habana) en el tema educativo. Todos esos aspectos se fueron conjugando para decir que el acuerdo incluye, de manera solapada, la ideología de género, el acuerdo nos va a llevar al «castrochavismo», el acuerdo es un acuerdo de impunidad, el acuerdo garantiza que las FARC mantengan dineros mal habidos del narcotráfico, y todo esto caló en un sector de opinión que uno tendría legítima duda de que, efectivamente, hubiesen hecho una lectura tranquila de los acuerdos y demás. Probablemente, los movió más esas consignas y también, sin dudas, la proyección de la polarización política que te mencionaba hace un momento, entre los dos liderazgos fundamentales del país. De tal manera que, aquellos que son seguidores del expresidente Uribe, miran al presidente Santos como su enemigo, al que hay que derrotar. En buena medida, veían también votar No al plebiscito como esa forma de plantearle (a Santos) una derrota.

En síntesis, me parece que el resultado del plebiscito favorable al No, a pesar de que haya sido una favorabilidad pequeña — en la democracia las cosas funcionan así, así sea por un voto, el que gana, gana — es una mezcla de elementos, donde hay desde elementos de preocupaciones legítimas de sectores de opinión que no comparten determinados puntos del acuerdo, hasta otros aspectos que, sin dudas, son también de manipulación.

De acuerdo al mapa electoral, la periferia del país votó de un modo y el centro, donde se ubica la capital, de otro. ¿A qué se debe esta división tan marcada?

En esa periferia de Colombia es dónde últimamente el conflicto ha estado más localizado. Toda la costa pacífica, la costa atlántica, la parte del sur del país, toda la frontera con Perú, Brasil y Venezuela, toda esa es el área donde el conflicto ha tenido presencia. Y allí lo que vimos es que, toda esa población que ha vivido el conflicto más cerca, es la que vota más claramente a favor del Sí, porque consideran que ésta es una manera de encontrar la terminación del conflicto.

En el centro del país, probablemente, hay una mirada más distante del conflicto. Por supuesto, en ese sentido, se percibe como un conflicto que tiene una cierta presencia, pero una presencia que le es más bien extraña a la mayoría de estos compatriotas.

¿El resultado del plebiscito pudiera incidir en las elecciones presidenciales de 2018? ¿Pudiera entenderse como que de esa misma manera están organizadas las fuerzas políticas de cara a esa cita comicial?

Es una especie de pre-primarias, podríamos llamarlas, en el sentido de que, efectivamente, el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, se posiciona bastante bien para una candidatura presidencial.

Probablemente, un candidato de sectores del centro que apoyan al gobierno, como sería el Dr. Humberto de la Calle, sin dudas, es de los que termina debilitado con el resultado del plebiscito, porque, como él encarnaba en cierta medida la negociación, al darse este resultado contrario, va a ser afectado.

Pero todavía no está claro que eso se pueda extrapolar. Obviamente, es una muestra de la votación, pero en la que ape-

nas participó más menos el 36% de los votantes; claro, no va a votar en las elecciones (presidenciales) más allá del 55, por mucho, del 60%, digamos. La abstención colombiana se mueve por encima del 50%. Entonces sí, es una muestra importante, pero esa otra franja de votantes que no participaron pueden modificar mucho los resultados.

Sin dudas, el principal beneficiado es un eventual candidato del Centro Democrático. En los otros partidos de la coalición que apoya el plebiscito, todavía no es claro, parecía Humberto de la Calle como una figura, quizás sigue para algunos teniendo alguna importancia, o el vicepresidente Germán Vargas Llera, quien pareciera también que por conveniencia ha mantenido cierta distancia en relación con este tema de los acuerdos, pero todavía ahí pueden haber muchas opciones de candidatos, que en este año y medio que falta, todavía no se recompone quiénes vayan a ser las fórmulas presidenciales.

El presidente Santos convocó de inmediato a una reunión con todos los partidos políticos del país para intercambiar sobre las inconformidades con el acuerdo y Centro Democrático no participó. ¿Qué lectura darle a esa negativa?

Entiendo por qué el Centro Democrático no va a la reunión posterior al plebiscito con el presidente Santos, porque el presidente invitó a los partidos, pero el Centro Democrático no aceptaba ser uno más entre los partidos. El Centro Democrático se posicionó en la votación del plebiscito como el interlocutor único frente al gobierno. Lo que ellos esperan, a mi juicio, es que toda esa coalición se ponga de acuerdo con unos delegados y entren a dialogar con ellos, porque ellos como ganadores del plebiscito se consideran «Los» interlocutores y creo que en parte tienen razón.

¿Qué veo? Cualquier tipo de revisión de aspectos de los acuerdos va a ser una revisión a tres. Tienen que estar, además de los negociadores del gobierno, sin dudas, delegados del No. Si no para las FARC no habría certezas, porque pueden llegar a un acuerdo con los negociadores del gobierno que, si este sector que ganó el plebiscito no tiene ahí una presencia, pues ellos no saben si también a ese nuevo acuerdo que se logre le va a pasar lo mismo. Entonces ese sector de alguna manera va a tener que incorporarse a la negociación con las FARC. Por eso hablo de revisión a tres de esos aspectos.

Ahora, primero van a tener que ponerse de acuerdo aquí, gobierno y oposición, sobre cuáles son los puntos, que a juicio del No, tienen que ser puntualmente revisados, para saber exactamente de qué se está hablando. Hay voces desde aquellas que dicen que hay que cambiar todo, entonces estaríamos frente a un proceso que habría que reiniciarlo, hasta algunos como, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, que plantean alrededor de unos cuatro temas. Uno es prisión efectiva para los que están involucrados en delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra. Segundo, el tema de elegibilidad política para esas mismas personas. Tercero, el tema de reparación material de las víctimas con recursos de las FARC. Cuarto, la relación de las FARC con el tema del narcotráfico. Alrededor de eso es que está el centro de las preocupaciones de los sectores que creo más razonables, hay otros, como te mencioné, que no quieren nada o lo que quisieran es algo así como un acuerdo de capitulación (para las FARC).

Ese es el ejercicio que creo deben hacer inicialmente para que, cuando se vuelvan a reunir con las FARC, estén unos puntos precisos, sobre los cuales hacer precisiones o una revisión de lo acordado. No va a ser una tarea fácil, pero igual considero

que, si no hay acuerdo, el futuro de la negociación es bastante incierto porque, obviamente, para el gobierno es casi imposible echar a andar unos acuerdos que tienen un voto de opinión mayoritariamente en contra.

¿Por qué si las víctimas, que son las mayores perjudicadas con el conflicto armado, hablan de perdón y aplauden el acuerdo de paz, los políticos como Uribe promueven el desconocimiento de este pacto que sería el inicio de la ansiada reconciliación para los colombianos?

Hay un universo muy grande de víctimas, 8 000 000. Yo no me atrevería a decir que todas las víctimas están en la misma posición. No hay dudas que las víctimas que estuvieron en La Habana, en general, comparten esa posición de perdón, pero hay sectores de víctimas que siguen teniendo una posición muy dura contra las FARC, por distintas razones. Y entonces, esos sectores, por un lado, se sienten identificados con esa posición del No, pero también están esperando una respuesta en relación con los hechos que los afectaron. Si fueron secuestros, que les digan si apareció, si está vivo o si está muerto, qué paso, dónde, la persona que lo volvió víctima.

Las víctimas que fueron a La Habana tienen una actitud de perdón, de contribuir a la reconciliación nacional, pero, insisto, no es ese el genérico de las víctimas.

¿Qué esperar que pase ahora? ¿Cuáles serían los próximos pasos para salir de este trance?

Soy casi que por principio optimista. Sé que estamos en una encrucijada compleja, difícil, porque nadie se la había imaginado, yo creo que ni siquiera los del No estaban seguros que efectivamente iban a ganar, pero pasó. Nos enfrentamos a una situación en que no era claro el plan B, aparentemente, no había

plan B previsto y estamos tratando de desbrozar un camino que no es tan claro cómo se va a señalar.

Yo esperarí­a que, tanto del lado del gobierno como de las FARC, haya una actitud de flexibilidad, porque si se coloca cada uno en el punto de que ya los acuerdos est­an negociados, que ya eso que se negoció es, pues no vamos a llegar a ninguna parte y, probablemente, lo que vamos a tener es una ruptura, quiz­as en unos meses, de la tregua y, desafortunadamente, volver a una situaci­on de confrontaci­on. Igual entiendo que, si hay flexibilidad, lo cual no quiere decir ceder en todo lo que los amigos de No plantean, y sentados en una mesa, all­ı́ creo que se pueden construir f­ormulas, alternativas en la cuales todos cedan y se logre un nuevo acuerdo que tenga mayor legitimidad, no digamos unanimidad porque nunca la habr­a, pero una mayor legitimidad que garantice que se pueda transitar hacia el siguiente gobierno o los siguientes gobiernos en perspectiva de que se puede implementar la paz.

¿Dónde queda la paz para Simón Trinidad?

A Simón Trinidad lo conocí a través de una figura de cartón a tamaño natural que la delegación de las FARC a los diálogos de paz en La Habana exhibía con frecuencia para recordar que el guerrillero era uno de los plenipotenciarios designados para negociar con el gobierno la salida diplomática a la guerra y que, por tanto, debía ser liberado de la cárcel de máxima seguridad donde se encontraba recluso en el estado norteamericano de Colorado. Su nombramiento no era un capricho, se basaba en la experiencia de este hombre en la búsqueda de la paz, pues había sido uno de los actores principales en las conversaciones anteriores, que tuvieron lugar en San Vicente del Caguán.

La expresión risueña y confiada, la seguridad que transmitía con sus brazos cruzados en la imagen que algunos llegaron a confundir en cierta ocasión con un ser humano real, contrastaban con las condiciones en las que ha vivido el insurgente durante su encierro en Estados Unidos. Sus compañeros consideraban que le habían sepultado vivo por las circunstancias infrahumanas de su reclusión.

Apresado en Ecuador en 2004, deportado posteriormente a Colombia donde enfrentó varios cargos, y finalmente extraditado a Estados Unidos, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, verdadero nombre de Trinidad, fue condenado a sesenta años de prisión —la máxima pena posible para el caso— por su presunta participación en el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses, o para ser más exactos, contratistas de agencias de inteligencia que perseguían información de las FARC en la selva colombiana. Para condenarlo fue necesario realizar dos juicios, pues el primero fue anulado por falta de consenso entre los miembros del jurado y, aun así, en el segundo, tampoco

lograron probar su participación directa en el secuestro y lo culparon de conspiración para cometer ese delito. Hubo otras imputaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el terrorismo que tampoco pudieron ser demostradas.

Desde entonces, pasó más de una década en confinamiento absoluto, en una fría celda bajo tierra, con derecho solamente a una hora de sol al día. Por mucho tiempo, le prohibieron leer y escuchar la radio, hasta lo privaron de atención médica especializada. El contacto humano se resumía a escasas visitas de familiares cercanos y unos pocos minutos para llamadas telefónicas al mes.

La foto que lo representaba en la mesa de diálogos de paz comenzó a humanizarse para mí cuando el periodista colombiano Jorge Enrique Botero, colega devenido amigo de tantas madrugadas en la cobertura del proceso, me contara la historia que luego diera vida a su libro: *Simón Trinidad, el hombre de hierro*. Fue entonces que pasó de cartón a hombre y luego a metal. Porque solo así puede entenderse que una persona nacida y criada entre la clase pudiente bogotana, universitario, banquero y profesor, cambiara bienestar por vida en campaña. Es cierto que lo intentó por la vía pacífica antes de tomar las armas, pero fue testigo del exterminio de la fuerza política en la que militaba, Unión Patriótica, y optó por la rebelión.

Ha pesado sobre sus espaldas desde ese momento la misma carga de odios y estigmas que sufren sus hermanos de causa. Ha vivido por ello el encierro y la privación de sus derechos elementales, y cuando pensaba que no podía ser peor, sufrió el dolor de perder a dos de sus seres más queridos: su compañera de lucha, «la bellísima Lucero», — como él le llamara — y su hija Alix, «la niña de los ricitos de oro», víctimas de la crueldad del

conflicto armado, que no reparaba entre rebeldes de causa y civiles inocentes.

La negociación de la paz colombiana en Cuba abrió una ventana a la posibilidad de su liberación. Casi a diario los jefes insurgentes exigían la presencia de Trinidad en la mesa de pláticas. Que Estados Unidos participara en el proceso con un enviado especial avivó las esperanzas, y la visita del entonces Secretario de Estado, John Kerry, a La Habana y su reunión con las FARC aceleró los anhelos por el retorno del guerrillero.

Pero se firmó no uno, sino dos acuerdos finales de paz y Simón Trinidad no obtuvo el perdón presidencial del saliente presidente Barack Obama. Puede que Obama se haya dejado intimidar por algunos senadores estadounidenses que condicionaron la ayuda financiera al postconflicto o que el gobierno colombiano no haya ejercido la suficiente presión para cumplirle a las FARC e interceder por la excarcelación del prisionero. Después, la Casa Blanca cambió de residente, uno muchísimo menos implicado o comprometido con la paz en Colombia y Juan Manuel Santos se lavó las manos porque, al fin y al cabo, había logrado la consecución de sus propósitos: dos mandatos presidenciales, el título de haberle puesto fin a la guerra en Colombia y el premio Nobel de Paz.

Lo cierto es que el caso de Trinidad ha estado manipulado desde el principio. En 2013, una filtración de Wikileaks ponía al descubierto que el interés por su extradición no provino de Estados Unidos —no existían procesos judiciales que justificaran ese pedido—, sino que fue el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe quien fabricó los cargos de narcotráfico para levantar el interés de la agencia norteamericana antidroga.

Otro de los falsos presupuestos fue tratarlo como miembro del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC. Según

su abogado, Mark Burton, en su condición de miembro de la organización guerrillera, pero no de su alto mando como se le ha querido presentar, Trinidad debería ser devuelto a Colombia y juzgado por la Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana.

Luego de que los guerrilleros cambiaron las armas por la palabra, en un proceso de implementación repleto de obstáculos y promesas rotas, Simón Trinidad siguió tras las rejas. Para él no hubo amnistía, desarme, verdad, justicia, ni mucho menos tránsito a la vida civil. Una de las llamadas zonas veredales de transición, que agrupaba a la insurgencia para la desmovilización, llevó su nombre.

En la actualidad, no ha cesado el pedido de repatriación para el hombre que, aun después de siete décadas de vida y con una condena que seguramente supere su existencia, dice no estar ni desesperado ni derrotado.

Los nuevos peores amigos

Hay quienes dicen que Venezuela y Colombia tienen una relación de amor-odio. Lo cierto es que, como vecinos que son, la convivencia ha pasado por buenos, malos y hasta peores momentos. Los descalabros casi siempre se producen porque sus políticos olvidan que se trata de dos países que alguna vez fueron un mismo territorio, con raíces históricas comunes y los mismos padres fundadores.

En abril de 2017 tuvo lugar un pico de tensión a propósito del contexto de desestabilización social y crisis política que entonces vivía Venezuela. Y a pesar de que se manipuló el origen del altercado, fue el presidente Juan Manuel Santos quien tiró la primera piedra. El detonante estuvo en un mensaje del mandatario colombiano en la red social Twitter: «Hace seis años se lo advertí a Chávez: la revolución bolivariana fracasó». Y aunque resultaba peligroso sacar a la luz esa sentencia en el estado de la situación venezolana, no se trataba solo de palabras, hubo hechos que fueron alimentando el enfrentamiento.

Colombia fue uno de los países de la región que respaldó las intenciones injerencistas de la Organización de Estados Americanos en los asuntos internos de Venezuela. Posteriormente, el gobierno de Santos elevó a la ONU su preocupación por la «militarización de la sociedad venezolana» y, junto a otras diez naciones latinoamericanas, suscribió una carta en la que condenaba las muertes ocurridas en las protestas en Venezuela y pedía al ejecutivo chavista garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas. Para rematar, el diputado venezolano opositor, Luis Florida, fue recibido en la Casa de Nariño.

Ante esa clara toma de partido de su homólogo colombiano, Nicolás Maduro respondió sin que le temblara la voz y

visiblemente exaltado: «Colombia es un Estado fallido». A Santos no le gustaron para nada los argumentos que sustentaban la afirmación de Maduro: la privatización de la salud, los altos índices de pobreza, hambre, desempleo, la gran cantidad de personas desplazadas a suelo venezolano huyendo de la guerra. Muchísimo menos toleró la amenaza de Maduro de revelar secretos sobre presuntas farsas en el proceso de paz.

El cruce de palabras apenas comenzaba. Santos inmediatamente respondió a su par que la de Colombia era «una democracia sólida, donde se respetan los poderes públicos, donde se respeta la independencia de los poderes públicos, se respetan las libertades». Una alusión directa al conflicto de poderes en Venezuela entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo chavista.

Definitivamente, con esta cruzada de ataques, dejaban de ser los camaradas de hace unos años, una controvertida amistad que heredara Maduro de Hugo Chávez, a quien Santos llamara «mi nuevo mejor amigo». Con ese calificativo quiso dejarle claro a su predecesor Álvaro Uribe, en 2010, que recomponía las relaciones colombo-venezolanas que el propio Uribe había roto. Comenzaba una era dorada para la coexistencia de estos vecinos a ratos recelosos. Sería entonces que Venezuela se convertiría en factor clave del diálogo político para la paz colombiana: Chávez, el hombre que propició el acercamiento con las FARC, y Maduro, el continuador de los esfuerzos conciliatorios. En el pasado, cuando Juan Manuel Santos ostentaba el cargo de Ministro de Defensa, habían estado a las puertas de una guerra.

Resultó cuando menos un oportunismo del Jefe de Estado colombiano distanciarse de Venezuela, precisamente, en el minuto en el que ya el acuerdo para el fin del conflicto estuvo firmado, la confrontación bélica formalmente acabada y él,

orgullosos de su Premio Nobel de Paz. Sus asesores debieron considerar que ya no era necesario que Santos tragara «buches amargos» de quien fuera un aliado temporal, mas no real, porque la dependencia que tenía del chavismo para que le garantizara la estabilidad en las conversaciones con la insurgencia cesó.

Ni siquiera en los tiempos difíciles de los cierres de la frontera común, Santos y Maduro habían elevado tanto el tono. Por el contrario, habían solucionado sus múltiples problemas: el tráfico informal de mercancías, la fuga de combustible y papel moneda venezolano, las violaciones territoriales y aéreas, todo ello lo resolvían a través de diálogos ministeriales, e incluso, al más alto nivel. Tampoco los exagerados y maniqueos comentarios de la derecha colombiana que acusaban a Santos de abocar el país al «castrochavismo» en su negociación con la guerrilla, le hicieron perder la compostura y criticar a Venezuela o Cuba.

Pero después de firmada la paz, Venezuela no fue de la misma ayuda que antes cuando sí era preciso tratar de amigo a Chávez o a Maduro. Al parecer, se volvió más urgente mostrarse leal al aliado de siempre, Estados Unidos, a quien debió molestarle mucho el inicial silencio de Santos frente a la situación venezolana. Sobre todo, cuando el presidente norteamericano Donald Trump estuvo siempre poco o nada interesado en la paz colombiana. El tema no fue prioritario en su agenda de política exterior para América Latina, y a Bogotá le urgía aumentar el compromiso financiero de Washington con el postconflicto. Resultaba más necesaria la fidelidad, luego de producirse un aparentemente fortuito e informal encuentro entre Donald Trump y los exmandatarios colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, los máximos enemigos del gobierno de Santos.

A pesar de que la Casa Blanca quiso en su momento minimizar el hecho, refiriendo que se trató de un encuentro casual, de solo «un rápido Hola», Pastrana publicó en Twitter su agradecimiento por «la cordial y muy franca conversación sobre los problemas y perspectivas de Colombia y la región». Un golpe estratégico de la oposición colombiana dado el caso que Trump no se había topado todavía con Santos — apenas si habían hablado por teléfono. La reunión oficial se realizó poco después, en mayo de 2017, y para la ocasión, al ver que Estados Unidos sí estaba muy centrado en el asunto venezolano, el presidente colombiano decidió mostrar una postura firme de cara a su cita con el magnate neoyorkino.

Tal elección de bando provocó un deterioro agudo de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas que los comandantes de las FARC lamentaron, pues consideraron desagradecido al presidente colombiano. Santos no prestó suficiente cuidado al hecho de que, por aquel entonces, aún tenía en juego un proceso de diálogo con la segunda guerrilla en importancia del país, el Ejército de Liberación Nacional, en el que Venezuela también participaba como garante. Además, el ELN siempre se había identificado mucho más con las ideas revolucionarias del chavismo, al punto que, durante mucho tiempo, presionaron para que la mesa pública de conversaciones se instalara y sesionara en Caracas.

Evidentemente, Santos necesitaba también desviar la atención de dos problemas domésticos importantes: los vaivenes de la implementación de la letra chica del acuerdo de paz y una eventual relación con el escándalo de corrupción de la empresa multinacional Odebrecht. Si a ello agregamos la matanza en ascenso de líderes sociales y políticos, razón suficiente para crear una distracción convincente.

Se acababa así la época de concordia y prudencia, y regresaba un período de dimes y diretes mediáticos, de confrontación diplomática y discursos incendiarios. Los guiños amistosos eran sustituidos por peleas irreconciliables entre los nuevos peores amigos.

Paz completa

Los altos mandos de las dos fuerzas insurgentes que por más de 50 años —con similitudes y diferencias tanto en lo ideológico como en lo táctico— estuvieron en guerra frontal con el Estado colombiano, se vieron las caras en La Habana en mayo de 2017. La isla caribeña volvió a ser escenario de concordia, tal y como lo hizo eficazmente por cerca de seis años, entre las fases pública y privada, para lograr un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el ejecutivo de Juan Manuel Santos.

Por primera vez, la plana mayor de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional se reunía en Cuba con la anuencia del gobierno de Santos, luego de firmada la paz con las FARC y comenzado un proceso de diálogo formal con el ELN. La cumbre interguerrillas tuvo un propósito urgente: poner el pie en el acelerador del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la delegación *elena*.

El contexto que vivía cada uno de esos grupos rebeldes era bastante diferente en el momento del encuentro, digamos que se ubicaban en los extremos: las FARC a pocos días de dejar definitivamente las armas y entrar en la vida política y civil del país —según lo que había anunciado la organización y constaba en el acuerdo— y el ELN en una negociación incipiente, de apenas una ronda de pláticas —que comenzó en Quito el 7 de febrero de ese año— sin grandes avances, y en medio del fuego cruzado.

A ello se sumaban las crisis recurrentes por concepto de hechos de secuestro. Ese precisamente fue el elemento que retrasó el inicio de la fase pública de las conversaciones con el ELN, pues Santos puso como condición la liberación del excon-

gresista Odín Sánchez entonces retenido por el grupo insurgente que lidera Nicolás Rodríguez Bautista, cuyo nombre de guerra es Gabino. Posteriormente, se produjo la captura de ocho mineros, que el gobierno colombiano atribuyó a fuerzas del ELN, y que fueron soltados el mismo día que los comandantes elenos se trasladaban a la capital cubana para encontrarse con sus vecinos de causa.

El cara a cara transcurrió con total hermetismo, apenas se conocieron algunos detalles, más bien protocolares, a través de las cuentas en Twitter de los jefes guerrilleros, como que «el diálogo fue abierto, positivo, fraterno»; «se discutieron líneas de acción para fortalecer opciones alternativas de cambio». Pero hubo dos mensajes mucho más cercanos a la realidad que vivía Colombia. Uno lo dijo Iván Márquez antes de tomar el avión en Valledupar que lo trasladaría a La Habana: «vamos en la búsqueda de fórmulas y consensos para destrabar el proceso de paz». Obviamente se refería al estancado proceso con el ELN. Y el otro lo diría Pastor Alape: «en Cuba se discute una paz completa». Porque la reconciliación colombiana quedaría totalmente coja si quedaba reducida solamente a un entendimiento del gobierno con las FARC, que, si bien era la guerrilla más numerosa y la de mayor incidencia en la confrontación con el Estado, el ELN se había mostrado como un interlocutor más complejo porque había exigido siempre más que prebendas políticas a cambio del desarme; sus aspiraciones incluían transformaciones radicales y una mayor participación social en la toma de decisiones.

De acuerdo con el comunicado conjunto final, tras dos días de reuniones a puertas cerradas, las dos organizaciones guerrilleras acordaron mantener este tipo de encuentros como mecanismo permanente de coordinación y diálogo para la búsqueda

de la paz. Coincidieron en la urgencia de sacar definitivamente la violencia de la lucha política en Colombia y poner los derechos de las víctimas en el centro de la reconciliación.

Lo cierto es que Santos le apostó a que Timochenko, Márquez y su equipo les explicasen a los comandantes elenos, Gabino y Pablo Beltrán, que les quedaba menos de un año para lograr resultados en firme, porque las elecciones presidenciales de marzo de 2018 se tornaban inciertas y serían algo así como un nuevo referendo en el cual se refrendase nuevamente la paz o la guerra. Y a todas luces, era mejor un acuerdo en mano con garantías sólidas que se hiciese difícil de revertir con la eventual llegada del opositor Centro Democrático al poder, el partido del detractor en jefe de la paz: Álvaro Uribe Vélez. Los insurgentes de las FARC hablaban un lenguaje más cercano a los rebeldes elenos si se comparaba con el verbo del ejecutivo colombiano. Podrían discernir cuáles eran las temáticas más oportunas y fáciles de consensuar, las metodologías más expeditas y las trabas insuperables.

Pero al espíritu de conciliación se opusieron las reservas y el escepticismo que tenían los integrantes del ELN sobre el «compromiso real» del gobierno con la paz, más cuando el proceso de implementación del pacto con las FARC había sufrido tantos vaivenes, plazos incumplidos, demoras en la aprobación de leyes y el peligroso auge de asesinatos a líderes sociales y guerrilleros desmovilizados. De hecho, el Comandante Gabino descartó que pudiese avanzarse hacia un acuerdo concreto antes de los comicios de 2018.

Entre ambas organizaciones en armas hubo en el pasado un camino largo de desencuentros que pretendía allanarse con la cumbre de La Habana. Los identificó en su momento la lucha guerrillera, y aunque parecía que perseguían un objetivo común

al rebelarse contra el *status quo* que ha dominado Colombia en los últimos 70 años, tuvieron diferencias fundacionales y estructurales.

Las FARC nacieron con una inspiración marxista-leninista, prosoviética, con bases campesinas y una organización vertical de mando; mientras que el ELN tuvo influencias de la Revolución Cubana, la Teología de la Liberación, con un apoyo más urbano y estudiantil y un orden militar más descentralizado. Las FARC funcionaban como un ejército con aspiraciones políticas y el ELN se definía como un movimiento partidista que hacía uso de la vía armada para alcanzar el poder y transformar la sociedad. Ambas guerrillas se enfrentaron entre sí por el control territorial y las fuentes de financiación, a la par que vivieron esfuerzos fallidos de unidad. Sobresale la alianza política que, bajo el nombre de Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, intentó pactar una salida política a la confrontación armada con el gobierno colombiano de turno en territorios venezolano y mexicano pero que fracasó.

Era hora de dejar las discrepancias a un lado, hacer concesiones —la parte más difícil— y dejar las ambiciones o, al menos, luchar por ellas en el terreno político. Cada vez resultaba más inaplazable lograr que convergiesen los dos esfuerzos de paz para una reconciliación verdadera, en una nación en la que, para mayor embrollo, han coexistido otros grupos armados ilegales, pero sin base ideológica ni aspiraciones de transformación, por el contrario, bandas criminales y estructuras paramilitares totalmente mercantilizadas y regidas por la violencia más sanguinaria. Tocaba a unas FARC verdaderamente convencidas de cambiar balas por votos invitar a los del ELN a seguir sus pasos, pero con premura, y transmitirles para ello toda su experiencia negociadora con la mediación de las diplomacias

venezolana, chilena, noruega y cubana. Tocaba al gobierno de Colombia cumplir la palabra empeñada en papel e implicarse en el postconflicto con redoblada voluntad. La paz completa no podía ni puede ser eslogan o fin, sino el medio para construir un país mejor.

Otro traspies a la paz

Desde el inicio era sabido que alcanzar la paz colombiana iba a ser un camino empedrado, fatigoso, a ratos intransitable. Pero incluso sabiéndolo, las instituciones en Colombia no han dejado de sorprender con poderosas jugadas que han vuelto trizas los pasos más esperanzadores. Cuando el país esperaba ansioso la noticia del desarme, cuando los acuerdos iban implementándose poco a poco, no sin tropiezos, la Corte Constitucional puso en jaque la marcha de la paz. Lo más indignante fue que se trató de un golpe disfrazado de democracia, una de las palabras más prostituidas de la lengua española.

El texto negociado en La Habana debía ser traducido en leyes al interior del Congreso para cumplirse efectivamente. Para agilizar tal propósito se aprobó un mecanismo denominado *fast track* que reducía considerablemente los tiempos para las discusiones y anuencias de los proyectos legislativos. Además, lo pactado entre las FARC y los representantes de Juan Manuel Santos debía ser votado en bloque y las modificaciones debían ser avaladas por el gobierno, para ello se había debatido a camisa quitada en Cuba por más de 4 años.

De un plumazo, el *fast track* se convirtió en *slow track*, es decir, en una especie de cámara lenta con la anulación de dos de los artículos de la llamada vía rápida. Los dos numerales eliminados fueron el H: «Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional» y el J: «En la comisión y en las plenas se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación».

Lo más peligroso no fue que se hiciese interminable el proceso de aprobación de leyes, sino que los congresistas tendrían la facultad de analizar artículo por artículo, línea por línea, lo ya convenido entre las partes en conflicto y renegociarlo. Y cuando digo que todo esto estuvo disfrazado de democracia, es porque los argumentos para implantarlo fueron los siguientes: se estaba violando la separación de poderes en la nación al limitar la capacidad deliberativa y decisoria del legislativo y supeditarla a la voluntad del ejecutivo.

Por supuesto que detrás de todo esto estuvo el *uribismo*, pues fue una propuesta del entonces senador opositor de Centro Democrático, Iván Duque, que la Corte acató sin el menor reparo. Luego de la decisión de ese tribunal constitucional, Duque afirmó en su cuenta en Twitter: «Corte valida que Congreso no puede ser notario y en su independencia debe poder hacer los cambios que considere a los proyectos que debate».

De todo ese caos, lo positivo fue que las leyes anteriormente aprobadas, tales como la Ley de Amnistía, las reformas constitucionales para la Jurisdicción Especial de Paz y para que las FARC se convirtiesen en partido político legal y el estatuto de la oposición, no serían alteradas. Sobrevivió la competencia del presidente de adoptar ciertos puntos por decreto con fuerza de ley y, además, las modificaciones que introdujesen los congresistas debían tener conexidad con el acuerdo. «Confiamos en que el presidente haga valer las facultades que le otorga la Constitución para sacar adelante este proceso de paz», dijo en su momento el jefe negociador guerrillero Iván Márquez.

Esto estaba pasando en Colombia mientras el presidente Santos se encontraba con su par estadounidense en Washington. Un encuentro que las partes quisieron vender como exitoso, de respaldo total el uno con el otro. Lo cierto es

que el apoyo de Donald Trump a la paz se redujo a una palmatita en el hombro y frases huecas: «No hay nada más difícil que la paz y queremos hacer la paz en todo el mundo. Ustedes son un gran ejemplo de ello. La de las FARC fue una situación dura y prolongada, pero creo que el presidente (Santos) ha hecho un trabajo magnífico, no un trabajo fácil, pero sí magnífico». No hubo compromiso financiero mayor al misérrimo aprobado — apenas 450 millones — si se compara con los fondos millonarios — 10 000 millones en 15 años de Plan Colombia — que abonaba Estados Unidos para la guerra. Se habló más de narcotráfico y de Venezuela que de reconciliación y postconflicto, aun y cuando Santos fue dispuesto a todo tipo de concesiones, incluso aplaudir la incursión militar del Pentágono contra las fuerzas gubernamentales sirias.

Ante tales fiascos domésticos y externos, el jefe de estado colombiano jamás aventuró un plan alternativo. Prefirió mostrarse confiado con la mayoría de escaños a su favor en el Congreso, pero aquella era una mayoría que ostentaba en coalición y la oposición arremetió con todos los hierros contra los acuerdos, hasta el último minuto de su presidencia. Los plazos siguieron viéndose como camisas de fuerza en todo el proceso previo al 2018 electoral, tanto presidencial como legislativo.

En ese contexto, se conoció además que Santos conversó telefónicamente con el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, puesto que ambos necesitaban buscar una salida al momento crítico, el segundo más peligroso después del No en plebiscito de octubre de 2016, que sometía a refrendación popular el Acuerdo Final de Paz en su versión inicial.

Desde que se conoció la noticia del fallo de la Corte, la insurgencia se declaró en Asamblea Permanente en las zonas vereda-

les donde se encontraba concentrada para el desarme. «No nos enreden la paz», advirtió Timochenko.

En tanto, los senadores partidarios de los acuerdos de paz se dedicaron a estudiar el reglamento del legislativo para evitar los largos debates y la lluvia de proposiciones contrarias al espíritu del Acuerdo Final. Y finalmente, se cumplió la sentencia popular que, donde se hace la ley, se hace la trampa, pues el senador Roy Barreras, un activo negociador en el último período en La Habana, logró encontrar algunas mañas legales para quitarle el freno de mano que la Corte pareció ponerle al *fast track*.

Como lección de vida, los colombianos deberían tener en cuenta que hay momentos excepcionales y/o extremos en los que ponerle la camisa del derecho a la política resulta contraproducente. Éste, fue uno de ellos.

Gabino: «El día que en Colombia haya democracia, sobran las armas»

Entrevista al primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, *Gabino*. Junio, 2017.

Más allá de los tropiezos legislativos y la férrea oposición al texto de La Habana, Colombia seguía enfrascada en lograr materializar la paz. A mediados de 2017, ese proceso estaba dividido en dos etapas. Por un lado, la implementación del acuerdo con la guerrilla más antigua de ese país; por otro, el mismo gobierno de Santos que había pactado con las FARC, adelantaba una mesa de diálogo político con la guerrilla chica, aún en condición de grupo subversivo, el Ejército de Liberación Nacional.

Y justo en esos meses, el alto mando del ELN visitaba la capital cubana, a propósito de reuniones con sus «compañeros» —a ratos aliados, a ratos adversarios— de causa y con los enviados del ejecutivo colombiano. Uno de esos encuentros fue público, al menos todo lo públicamente protocolar que se dejaban ver ante la prensa. Pero un mes después de la cumbre interguerrillas, todavía se les sabía en Cuba y fue entonces que el Comandante Gabino, dejó en la mochila de campaña sus reservas y accedió a conversar.

A los guerrilleros de las FARC los conocía bien. Había vivido junto a las partes cuatro años de negociación, en una cobertura mediática prácticamente de ritual, donde los insurgentes sin fusil ni uniforme verde, ahora en guayabera y otras prendas de vestir muy a lo cubano, se hicieron mucho más cercanos que los del gobierno. Y más, gracias a que había podido traspasar la barrera de lo estrictamente alejado de los medios: esa imáge-

nes y escabullidas frases de encuentros que no permitían cámaras y micrófonos, pero que, en momentos cruciales, se hacía la excepción para los equipos de comunicación de cada delegación y un minúsculo *pool* cubano, respetando la condición de garante y anfitrión de la isla. Ahí era donde me «colaba» y asistía a momentos inéditos: las miradas esquivas o demasiado molestas cuando se trababa el dominó, la discusión vehemente o, por el contrario, la risa cómplice, el murmullo coloquial y hasta el café compartido cuando se imponía la cordura y el más cerrero cedía. Ya por ese entonces había, incluso, hablado de tú a tú con Timochenko, y las citas *off the record* con Márquez y los suyos se habían vuelto habituales.

Pero los *elenos* me eran un tanto desconocidos. Pasé de haber estado en un par de conferencias de prensa, a directamente verme la cara con su máximo jefe en la más absoluta exclusividad. Y resultó ser una plática tan calmada, como reveladora, sin en el acostumbrado «estar a la defensiva». El diálogo fue marcadamente pausado, como a quien nada lo asusta porque ha vivido en guerra por 50 años y sobrevivido a los más feroces ataques. Con igual parsimonia, reivindicaba el carácter revolucionario de su organización, como el hecho de secuestrar personas. Al cabo de la segunda pregunta, ya me había convencido de que un acuerdo con el ELN no iba a ser posible antes de que Santos dejara las riendas de Colombia y con otro gobierno cualquiera que no fuese de extrema derecha, como ya se auguraba la sucesión, pasaría mucho tiempo antes que lograrse algo parecido a lo consensuado en La Habana con las FARC. Esta gente del ELN estaba en otra cuerda.

Comandante Gabino, ¿podría decirse que en Colombia ha habido dos guerras, por el hecho de haber coexistido dos guerrillas, con semejan-

zas y diferencias, frente a un mismo adversario, o ha sido una sola conflagración?

La guerra ha sido una sola. Desafortunadamente, Colombia nunca ha conocido un ambiente de paz desde que pisaron suelo los extranjeros hace más de 500 años. Finalmente, el último período de la guerra algunos dicen que comenzó en 1928 con la masacre de las bananeras, en una región costera de Colombia, del Mar Caribe, de una empresa norteamericana explotadora de banano que masacró, se calcula, unos 6 000 trabajadores. Otros dicen que la guerra comenzó iniciando la década del 40 cuando la oligarquía asesinó a sangre y fuego el movimiento *gaitanista*, que culmina con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. Nosotros decimos que allí comenzó ese proceso de guerra que se vive hoy de manera ininterrumpida.

Por la década de los 60, comenzando, Camilo Torres, el dirigente popular, el sacerdote guerrillero, dijo algo que impactó mucho a la sociedad colombiana porque fue el mejor resumen de la realidad política: «en Colombia, las vías democráticas y políticas para que el pueblo ascienda al poder están cerradas». Camilo, como sociólogo, investigó esa realidad y llegó a esa conclusión.

¿Qué pasaba entonces? Se acababa de crear lo que se llamó el Frente Nacional, que fue la unión de dos partidos tradicionales que han representado a la oligarquía, pero allí se unieron y se turnaron cada cuatro años el poder y excluyeron al movimiento de izquierda y a los partidos de izquierda y los ilegalizaron. Lo que quedó fue una realidad política donde sólo era legal estar en el Partido Liberal o en el Partido Conservador. No solamente fue la legalización teórica de la distribución del poder de la oligarquía y la ilegalización de la oposición sino que, desde siempre, en Colombia ha habido un asesinato sistemático de quien

se opone a los destinos de la oligarquía en el país. Esa fue la causa del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; después, de los asesinatos de los guerrilleros que pactaron la paz con el gobierno, y desde entonces eso no ha parado. Eso es lo que justifica y valida en Colombia el alzamiento armado y la rebelión revolucionaria.

Si ha habido una sola guerra, debería haber habido un único proceso de paz. ¿Por qué el ELN se sumó mucho después de las FARC a esta negociación de paz?

La guerra es una sola y ha sido una sola con toda la fuerza que ha podido desarrollar la oligarquía colombiana, asesorada por Estados Unidos. El ELN comenzó hace 26 años a buscar una salida política al conflicto, en ese entonces con el gobierno de César Gaviria, después con los gobiernos sucesivos hasta hoy; con todos los gobiernos ha habido diálogos con el ELN.

¿Dónde está el problema para dar un salto a una paz estable y duradera, como se dice por todos lados en Colombia? Nosotros creemos que la paz tiene que tener una esencia y un contenido de justicia y equidad social, porque Colombia está en crisis y hay extrema pobreza y extrema riqueza muy concentrada. Decimos que una paz requiere democracia porque lo que dijo Camilo hace 50 años es la muestra de que, realmente, no existe democracia. Y también decimos que es indispensable la soberanía. Colombia está, no solamente sometida a los dictámenes económicos y políticos de Estados Unidos, sino que en su suelo hay legalmente siete bases militares, pero eso sigue, hay muchos secretos en términos militares. En Colombia no existe una realidad de soberanía y determinación. Para nosotros la paz tiene que ser la concreción de esa realidad porque, sencillamente, si no es así, no hay paz. Por supuesto que no queremos que eso se decrete, pero sí consideramos que un proceso de

paz requiere de abrir la senda con realismo político, con creatividad y con ingenio a un proceso de paz serio y duradero, para que pueda realmente cimentarse y satisfacer lo que hoy justifica o valida el alzamiento armado. El día que en Colombia haya democracia y se pueda participar por la vía política en la lucha por el poder sin la necesidad de las armas, las armas sobran y no habrá apoyo para la insurgencia. Como esa no es la realidad, se sigue respaldando la lucha insurgente.

Ahora, ¿por qué no hubo un solo proceso de paz? Por dos razones fundamentalmente, la primera, el gobierno colombiano se ha esforzado hasta el máximo para separar los dos procesos de paz, el de las FARC y el del ELN. Además, del otro lado, la visión de los compañeros de las FARC sobre cómo desarrollar el proceso y qué alcanzar en él, en un tiempo determinado, es diferente a cómo nosotros lo entendemos. La agenda fue diferente, la metodología diferente, y hoy los acuerdos que alcanzaron los compañeros de las FARC y la manera como se van a implementar, nosotros lo entendemos de manera diferente.

Por ejemplo, asuntos de fondo metodológicos. Nosotros consideramos que, una guerra ininterrumpida de más de 70 años, no se puede resolver en una mesa de manera bilateral, gobierno e insurgencia, eso es demasiado débil. El gobierno de Santos es un gobierno demasiado débil. El poder en Colombia está profundamente fracturado. Y nosotros creemos que, en la implementación de los acuerdos, si no hay una participación protagónica de la sociedad que ha vivido el conflicto en estos más de 70 años, realmente no se darán las bases sólidas para que la paz se consolide. Viene un gobierno, viene otro, la misma realidad de los acuerdos de los compañeros de las FARC muestra una complejidad muy profunda. Hicieron unos acuerdos con Santos, luego se perdió el plebiscito y el nivel de los acuer-

dos bajó. Después, la Corte no validó la aprobación en paquete de los acuerdos y van a ser sometidos a que los apruebe el congreso, y el congreso no es un organismo que vaya a defender los acuerdos de paz. Allí está la fuerza de la oligarquía que se ha opuesto con mucha fuerza a que los procesos se desarrollen, y Santos va de salida.

Nosotros quisiéramos y estamos por la defensa de esos acuerdos, pero creemos que hay una correlación de fuerzas supremamente difícil para poderlos defender y para poderlos hacer realidad. Por eso, argumentamos y decimos que, si el proceso lo ayuda a diseñar, lo pelea, y los acuerdos que se logren los defienden las fuerzas sociales excluidas, que son la mayoría, ahí sí podemos decir que se establece una base sólida para defender los acuerdos que se pacten en una mesa.

Visto así, como me explica, Santos de salida y una negociación que involucra a otros sectores más allá de gobierno e insurgencia, pareciera improbable que se llegase a un acuerdo en firme antes del traspaso de mando en Colombia. Pero a la vez, hay un peligro manifiesto que, de ascender el uribismo al poder, se termine de desbaratar el proceso con el ELN. ¿Cómo sopesar estos hechos?

Nosotros hemos dicho y reiterado que creemos que la salida para Colombia es la paz como la hemos planteado: justicia y equidad social, democracia y soberanía. Las dificultades que hay para que los acuerdos con las FARC y el gobierno se consoliden, son un problema de impacto fuerte para la paz en su conjunto, para la paz que plantea el ELN, para la paz que plantean los sectores democráticos y de izquierda,

Nosotros hemos dicho que no creemos, no que no tengamos disposición de alcanzar un acuerdo de paz con Santos, sino que nosotros encontramos de parte del gobierno una conducta

dilatoria en buscar los acuerdos con el ELN. Hay una agenda de seis puntos y no se ha comenzado a discutir el primero. Llevamos un buen tiempo en Quito, pero el gobierno prefiere imponer condiciones para que el primer punto de la agenda arranque. Nosotros decimos no, los acuerdos son bilaterales, entre dos partes, nosotros no aceptamos imposiciones de nadie. Esa es la razón por la que estamos alzados en armas y, ni en la mesa ni en otros escenarios de lucha, aceptamos imposiciones. Somos defensores del consenso, de las búsquedas, de los acuerdos colectivos. Y creemos que en la mesa deben darse acuerdos de tipo bilateral porque eso fue lo acordado, lo definido. Nosotros le reiteramos al gobierno que arranque el primer punto sin más dilaciones que es el inicio de la participación de la sociedad en el diseño del proceso de paz.

Entre los condicionamientos del presidente Santos, sobresale el tema de los secuestros. Si bien es un asunto que se manipula bastante en aras de satanizar a los grupos guerrilleros, ¿cómo defender esa práctica delictiva tan condenable de cara a la opinión pública?

Nosotros somos una organización rebelde, alzada en armas, somos una fuerza de miles de mujeres y hombres. A nosotros nadie, ni desde el exterior ni desde lo interno del país, nos tributa de manera legal porque no hay los espacios que permitan hacerlo para la consecución de los recursos económicos.

En segundo lugar, nosotros somos una fuerza rebelde y nos consideramos con el derecho de privar de la libertad a quien sobreexplota, a quienes se roban los bienes del erario público, a quien es corrupto. Creemos lícito que pague una fianza o que pague un impuesto para la causa revolucionaria.

En tercer lugar, todo el dinero que recolecta el ELN tiene una distribución colectiva y para necesidades de la guerra, no

hay apropiación individual. Nosotros no ganamos sueldo, ni le pagamos sueldo a nuestra tropa. Las vinculaciones al ELN son voluntarias, pero para sostener una fuerza de miles de hombres en medio de la guerra se necesita dinero.

Nosotros asumimos la responsabilidad de desarrollar esa actividad porque consideramos que es una forma lícita. No pedimos que la gente de la sociedad colombiana comparta con nosotros el desarrollo de esas actividades, nosotros consideramos que la gente tiene el derecho a discrepar, a tener otros puntos de vista. Pero no encontramos otra manera diferente de sostener la lucha revolucionaria y el desarrollo de la guerra.

También desarrollamos otro tipo de privación de la libertad. El que entra a nuestros territorios, sin nuestra anuencia, sin nuestra autorización, es motivo de detención preventiva por razones de seguridad nuestra y de seguridad de la comunidad. Y quien infringe las normas establecidas con las comunidades, los delincuentes, los bandidos que entran a la región, también son objeto de privación de la libertad.

¿Qué Estado no priva de la libertad a quien considera que lo debe hacer porque viola sus leyes? Todos lo hacen. En Colombia se cobran fianzas. Todo el que es detenido y va a ser liberado después de una condena tiene que pagar una fianza para poder ser libre, independientemente de su condición de clase. O diríamos que le va peor a los que menos tienen que a los que más tienen por la realidad de corrupción que hay. La única diferencia es que nosotros somos un Estado en construcción, que no se nos reconoce la legalidad por parte del Estado y del mundo, pero tenemos un respaldo pleno de la población más humilde de Colombia y por eso hemos resistido estos más de 53 años de lucha.

De manera que, no encontramos otra forma de mantenernos. Nosotros le hemos dicho al gobierno que ese punto de la privación de la libertad lo discutamos en el quinto punto de la agenda. Nosotros estamos abiertos a discutirlo, pero ya cuando el desarrollo de la agenda y el avance de los acuerdos vayan andando. Tenemos la disposición de discutir sobre todo, no tenemos temas vedados, pero hay un orden ya establecido y en el quinto punto discutiremos este asunto de la privación de la libertad.

¿Cómo contrarrestar la imagen negativa que los medios de comunicación en Colombia han recreado de la guerrilla, ahora que se adentran en un proceso de pacificación y una eventual reinserción social?

Yo recuerdo mucho, cuando comencé a hacerme guerrillero hace 50 años, que de los vietnamitas se decían barbaridades, estaba la Revolución Vietnamita en su plenitud. Acababa de triunfar la Revolución Cubana y de Fidel, del Che, de Camilo Cienfuegos y de esta revolución se decían barbaridades. Es la misma política, eso no va a cambiar. Por fortuna, mucha gente del pueblo, o de los pueblos de Colombia y el mundo, conocen qué es la técnica comunicacional para desvirtuar la realidad y la esencia de un guerrillero y saben qué es propaganda en contra.

En todo caso, una dificultad grande sí es el manejo y el dominio de los medios de comunicación. Por eso esta entrevista y todas las que se puedan hacer, donde se pueda difundir una realidad de lo que es en verdad la insurgencia colombiana, ayuda mucho a la claridad del pueblo. Los grandes medios en Colombia son empresas privadas dedicadas a llevar una matriz de opinión donde se sataniza a la insurgencia. Y precisamente, una dificultad para la paz de Colombia hoy es esa; porque presentaron y han presentado a la guerrilla como todo lo malo que

se puede resumir en el planeta. Y si ahora dicen que hay que hacer la paz para que la guerrilla se inserte en la sociedad, es un asunto sumamente complejo porque ya hay el estigma, y los mismos medios siguen fortaleciendo ese estigma y esa es una de las grandes dificultades de la paz.

Nosotros, como guerrilla, como insurgencia colombiana, mantenemos intactos los principios, la conducta con nuestra población es transparente, tenemos un espíritu de servicio y seguimos, en la práctica y en la vida cotidiana, del lado de los más humildes. Nuestra relación con la población es estrecha y permanente. Nosotros decimos que somos una especie de comunidad, no solamente un ejército, sino una fuerza humanista, de valores. Incluso, los valores que se inculcaron por parte de los grandes revolucionarios como el Che, como Fidel y como tantos otros, nosotros los mantenemos porque también han sido valores del pueblo colombiano a través de su lucha y de su actividad revolucionaria y popular.

¿Cómo define Gabino a su masa guerrillera y como se define a sí mismo?

Yo soy un guerrillero humilde que me ha tocado una guerra muy dura, que la impusieron las clases dominantes, y no voy a cambiar mi futuro y mi destino hasta no encontrar que en Colombia haya paz con justicia social, democracia y soberanía. Los compañeros del ELN tenemos esos mismos propósitos. Somos mujeres y hombres sencillos que estamos del lado de la lucha popular.

Cuando yo digo esto, lo digo porque llevamos una vida humilde. Nosotros no ostentamos riquezas. Precisamente, son las realidades económicas las que nos hacen actuar con los criterios que ya hemos dicho. Somos humildes, no nos retractamos

ni nos avergonzamos de eso, nos sentimos honrados y orgullosos de serlo y de mantener vivas las razones del levantamiento armado y de estar siempre del lado de los humildes.

Más allá de justificar el alzamiento armado con razones de peso y objetivos nobles, en la guerra nada es color de rosa, se cometen atrocidades de bando y bando. ¿Hay espacio para el arrepentimiento en Gabino?

De ser revolucionario, jamás me arrepentiré. En 53 años de guerra ha habido dificultades, somos seres humanos, se han cometido errores. Nosotros, cuando hemos cometido errores, los hemos reconocido públicamente.

¿Por qué se desbordó en Colombia la guerra? Se desbordó cuando el Estado colombiano decidió fortalecer una fuerza ilegal: el paramilitarismo, y las Fuerzas Armadas comenzaron a coordinar con el paramilitarismo y esa fuerza ilegal se sostuvo con el narcotráfico, para lo cual se ampliaron los cultivos, las rutas y el procesamiento de la coca en Colombia. En ese momento, se desbordó el conflicto porque los paramilitares fueron un ejército asesino, que se propuso masacrar la población de los territorios guerrilleros por considerar que, al acabar con esa población, la guerrilla desaparecía. Hubo miles de asesinatos, masacre de población sin distinción de si eran ancianos, niños, hombres o mujeres. El Estado tiene la responsabilidad de eso que en Colombia no se ha analizado, ni hay justicia para esa realidad. Allí se desbordó el conflicto.

Por supuesto, nosotros nunca hemos negado que también se cometieron errores. También hubo fallas en el cálculo de acciones militares, fallaron nuestras armas, armas rudimentarias y populares, no tenemos la modernidad que tiene el ejército adversario. Pero jamás el ELN ha tenido la intención de hacerle daño a la población. Claro, en una guerra, como bien dices, se

han dado ese tipo de situaciones. Nosotros creemos que, en un proceso de paz, las víctimas del conflicto de más de 70 años tienen la palabra para que digan de qué manera se va a resolver el problema de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición de lo que se dio en este conflicto armado.

Hablando de las víctimas y, en consecuencia, de la justicia que ellas demandan, tengo la percepción que el gobierno de Santos quiere venderles a ustedes el paquete de acuerdos que ya pactó con las FARC o, al menos, algunos de sus logros, en particular, el de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo entiende el ELN el tema de la justicia?

Nosotros estamos hoy aquí en Cuba porque vinimos a hablar con los compañeros de las FARC. Hicimos una reunión con ellos, una reunión de dos días muy fluida y muy fraterna. No se trataba de debatir porque los compañeros conocen lo que nosotros pensamos del proceso de paz y también conocemos los acuerdos. Había sido una solicitud que, en una reunión anterior acá en Cuba con los compañeros de las FARC, le habíamos hecho al gobierno para que estuviéramos intercambiando en aras de la paz de Colombia. Y lo hicimos de una manera amplia y provechosa porque así conocemos esas experiencias.

El gobierno colombiano siempre ha querido y nos ha ofrecido los acuerdos de las FARC; ellos han planteado públicamente que lo correcto sería eso, que nosotros hiciéramos los acuerdos, un solo proceso y se pactara la paz. Desafortunadamente, en la construcción de esos acuerdos, a nosotros no nos llamaron ni nos tuvieron en cuenta. Por tanto, nosotros no podemos firmar lo que no hemos desarrollado ni hemos construido, así respetemos mucho y seamos muy responsables en plantear que los compañeros de las FARC son soberanos en tomar la decisión que sea.

Nosotros tenemos una visión propia de cómo debe avanzar la paz en Colombia, de cómo construir esos acuerdos y queremos sentirnos partícipes de ellos porque, en últimas, es ir construyendo paz, es ir avanzando en unos acuerdos que nos satisfagan a todos y, en ese sentido, somos respetuosos, pero tenemos una visión diferente. En resumen, nosotros hemos sido dos fuerzas guerrilleras diferentes, aunque ambas nacidas en el mismo año, con diferencia de un par de meses, y que llevamos hasta aquí el proceso revolucionario en Colombia.

Nosotros hemos estudiado los acuerdos de los compañeros de las FARC, sin dudas, allí hay asuntos que pueden contribuir, que nosotros no desconocemos, pero para nosotros es muy importante que un acuerdo de paz, luego de una guerra que ha soportado la población colombiana de una manera tan fuerte, con miles de muertos, desaparecidos, con 8 000 000 de desplazados, lo correcto es que esa población ayude a diseñar el proceso, lo defienda, lo luche y lo haga respetar. Si no es así, nosotros pensamos que no hay posibilidades.

Nosotros decimos que un proceso de paz, con la complejidad que tiene hoy esa búsqueda y ese propósito, eso no es asunto que se resuelva en un par de días o de meses. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que un proceso de paz no puede ser la firma de un acta de intenciones: firmamos, acordamos y yo voy a cumplir después. El gobierno tiene diseñado un proceso donde dice: firmamos ahora, acordamos, pero la implementación, o sea, los desarrollos son después. Igual derecho tenemos nosotros, discutamos, acordemos y la implementación la hacemos después. Por eso no aceptamos que, desde ahora, nosotros cambiemos asuntos importantes de nuestro derecho a la rebelión por una promesa porque, hay que decirlo, hay profundas desconfianzas en Colombia de las posibilidades de que

los acuerdos se concreten, porque es que eso ya ha pasado con el M-19, con el EPL (Ejército Popular de Liberación) y ahora con las FARC. Las luchas del pueblo colombiano hoy, de los maestros, de la gente del litoral pacífico, de los vigilantes de las cárceles, es porque el gobierno no les ha cumplido. Todo el mundo está peleando porque el gobierno no les ha cumplido. Entonces, mal haríamos nosotros en aceptar que solamente se firme un acuerdo o un acta de intenciones y que, a cambio de eso, nosotros nos dispongamos a desaparecer.

Concebimos el proceso de paz de otra manera. Como hay desconfianza, vámonos demostrándonos las dos partes que cumplimos, y que estemos sujetos al control, a la vigilancia y a la ratificación de una sociedad que ha sido víctima, y muy fuerte, de este conflicto. Creemos que un proceso así, que es más lento, es más difícil, pero con toda seguridad llega a buen puerto si de esa manera se desarrolla.

¿Es debido a esa misma desconfianza que el desarme del ELN no esté contemplado en blanco y negro en la agenda de conversaciones? ¿Cómo concibe la dejación de armas?

Nosotros le hemos dicho al gobierno: hablemos de las armas. Sí, nosotros estamos dispuestos a hablar de las armas, de las armas de todos. Le hemos dicho también al gobierno, un punto de la agenda es ese: sacar la violencia de la política. Y que lo hagamos todos, correcto, democracia, sí. ¿Cómo es la conducta de los gobiernos y del Estado colombiano en torno a la democracia? ¿Por qué los paramilitares? ¿Para qué? Ellos son un gobierno, son un Estado, hay un ejército de medio millón de hombres, ese es el componente de las Fuerzas Armadas, medio millón de hombres. Entonces, ¿para qué los paramilitares? Tienen toda la tecnología de Estados Unidos, de Israel, de Reino

Unido, tiene todo lo que quiera, tecnología de punta. Entonces, nosotros hemos dicho, hablemos de las armas, pero de las armas de todos, de cómo las usamos, cómo las usan ellos y cómo las usamos nosotros.

Que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza, perfecto. Al final de un acuerdo, si hay democracia, si hay justicia social, si se implementan y se hacen los acuerdos y no tienen reversa, por supuesto que nadie querrá tener las armas si no hay necesidad de usarlas y si no son una reivindicación. Si por la vía de la democracia el pueblo que está excluido, que es la mayoría, puede ser dueño de su propio destino por la vía democrática, las armas sobrarán. Nosotros tenemos esa disposición, para nosotros las armas no es un asunto de un cliché, no veneramos las armas, son herramientas necesarias para que un pueblo rebelde garantice la posibilidad de lucha y de poder. Estamos abiertos a hablar de eso, pero de manera bilateral.

¿Por qué no nos comprometimos a dejar las armas? Porque nosotros no sabemos hoy si se puedan dejar o no. El día que consideremos que no hay necesidad de usarlas, no hay problema. Pero cómo las vamos a dejar si no tenemos garantías, si se siguen muriendo los líderes populares y hasta los guerrilleros de las FARC que están en las zonas de concentración, que están en un proceso de desarme y de paz y son asesinados. Esa es la demostración de la situación de violencia que hay en Colombia. Nosotros utilizamos las armas para defendernos, para defender las comunidades y para luchar porque, donde estamos nosotros, en el 90% de los territorios donde nosotros llevamos estos 53 años, hay una ausencia total del Estado. El Estado solo hace presencia allí a través del ejército y la policía en operaciones punitivas contra guerrilleros. Por eso, nosotros allí tenemos unas obligaciones de Estado, de

convivencia de la comunidad, de estabilidad de la comunidad y de seguridad de la comunidad. Mientras esas condiciones no desaparezcan, sería un absurdo dejar las armas para que continúe la dinámica de una fuerza que está en contra de la población colombiana. Esa es la realidad en Colombia.

Por eso nosotros tenemos la diferencia de los compañeros de las FARC en cuanto a la dejación de las armas. Creemos que, hoy por hoy, no hay condiciones para dejar las armas, pero nosotros respetamos la decisión de los compañeros de las FARC, ni más faltaba, ellos son soberanos. Cada fuerza es soberana y, si los compañeros consideran que es el momento, somos respetuosos. La vida es muy rica. De aquí para adelante, va a seguir la vida.

Nosotros decimos: mire que los acuerdos son para firmarlos y para implementarlos después. Que lo hagamos todos. Podemos llegar a unos acuerdos, ahora, vamos a ver si se cumplen, si se desarrollan. Cuando se implementen, se desarrollen y nos satisfagan, bueno listo, será otro momento. Pero si de entrada a ti te piden que entregues algo esencial, que lo requieres y que hace parte de tu vida, y yo solamente te prometo que te voy a cumplir, eso es un desbalance, pero mucho más cuando el Estado colombiano, por parte de todo el mundo, se conoce como un Estado tramposo, ilegal, que no cumple. ¿Cómo hago yo para estar seguro de que hoy sí me va a cumplir? No hay bases. Entonces, que nos cumplamos no solamente con promesas sino con hechos y seguramente que así la paz será estable y duradera y completa, como se dice.

Pero en una negociación entre iguales, para que la cosa llegue a puerto seguro, las partes tienen que, obligatoriamente, ceder. ¿En qué está dispuesto a ceder la guerrilla y qué es innegociable?

Nosotros tenemos claro que, en una negociación seria, hay que ceder. Nosotros reclamamos asuntos elementales que satisfagan el sentir de la población colombiana. El 95% de las mejores tierras colombianas está en manos de grandes terratenientes. La población colombiana, la población trabajadora del campo, no tiene tierras. Creemos que es justo y que es indispensable que haya una reforma agraria que le devuelva a los campesinos las tierras que les quitaron en el conflicto y que ese problema se pueda resolver. Si ese problema no se resuelve, la guerra va a seguir. Nosotros podemos dejar las armas, la insurgencia colombiana puede dejar las armas, pero las nuevas generaciones sin tierras se van a levantar en armas.

Hay una crisis muy profunda en asuntos de salud, de vivienda, de organización social, de democracia, de justicia y si esos problemas no se resuelven o, por lo menos, no se inicia la resolución, no va a haber paz en Colombia. Nosotros no decimos que se establezca un gobierno socialista, no, sabemos que eso es un proceso complejo, muy complejo, pero sí se tienen que resolver los mínimos que le den garantías de continuidad y una mínima satisfacción para la gente.

Los pueblos son sabios. La gente no quiere el paraíso, la gente quiere lo básico: el empleo, una vivienda digna, los servicios básicos y que no se le asesine por pensar distinto. Sin esos básicos es imposible pensar en la paz.

¿Qué paz quiere el Estado? ¿Qué paz quiere la oligarquía colombiana? El silenciamiento de los fusiles, la desaparición de la insurgencia para que los grandes capitales transnacionales terminen de hacerse con el territorio donde está la insurgencia y que en estos 53 años no han podido tener. Esa es la visión que hay en la oligarquía colombiana. Ellos no se plantean de verdad la justicia social. Fíjese usted que, la bandera de hoy

del uribismo, digamos que la clase en el poder más reaccionaria, es volver trizas los acuerdos logrados entre las FARC y el gobierno. Y los mismos compañeros dicen que no es un acuerdo revolucionario, que es un acuerdo que cabe, incluso, en la constitución aprobada en 1991. Y, aun así, el propósito es volver trizas los acuerdos.

¿Por qué es tan importante que la población colombiana construya y diseñe el proceso de paz? Nosotros estamos ahí para ayudar, para contribuir en ese diseño y que sean ellos los que definan qué paz quieren, no qué paz quiere el ELN. Nosotros somos una fuerza revolucionaria que defendemos y estamos a discreción de lo que considere la sociedad. ¿Qué paz quiere la sociedad? Que lo digan los maestros, los campesinos, los estudiantes, los pobladores urbanos, las mujeres, el movimiento LGTBI. Que diga la gente qué paz es la que quiere, qué paz en Colombia hoy puede ser la que se inicie hacia un proceso definitivo. Que lo diga la gente. Nosotros nos sometemos a ese veredicto. Por eso es difícil aquí decir los mínimos son estos. La gente tiene la palabra.

El gobierno no ha querido que arranque el primer punto. El gobierno, nosotros sabemos que quiere una participación muy restringida porque, en la medida que la participación sea más restringida, el gobierno tiene más margen de maniobra. Nosotros decimos: que no nos incumplan a nosotros que, si le incumplen, le incumplan a esa población ansiosa de paz, junto a nosotros, por supuesto. Creemos que eso es más defendible. Porque se pacta un acuerdo, pero hay que ir a desarrollarlo, hay que ir a ponerlo en práctica. Quién más que la población que diga, bueno, esto se acordó, esto lo definimos, estos son los mínimos y vamos a defenderlo entre todos. Que el gobierno defina si respeta ese pacto y llega la paz o si toca seguir

luchando por defender lo que no van a cumplir. Nosotros estamos abiertos, queremos lo mejor, pero estamos preparados para dificultades también. Eso es lo que nos ha enseñado la guerra en estos 53 años.

¿Se pueden esperar gestos unilaterales por parte de la guerrilla como, por ejemplo, un cese el fuego o varios, que siempre son tan aplaudidos por los colombianos?

Nosotros, desde que construimos la agenda, le planteamos al gobierno que todo gesto sería bilateral porque los acuerdos son bilaterales. Creemos que los gestos unilaterales el gobierno los utiliza para mostrar a una guerrilla débil porque ellos dicen que ganaron la guerra, que no hay nada que hacer y que la guerrilla lo que tiene es que buscar una salida digna dentro de los perdedores. Nosotros tenemos una lectura diferente. Nos sentimos con fortaleza para continuar la lucha, si hay que seguirla, o marchar hacia un proceso serio de paz, si hay que hacerlo.

Creemos que los gestos deben ser bilaterales, así son mucho más productivos. Por ejemplo, ahora le estamos planteando al gobierno que, en la venida del Papa a Colombia, que es en septiembre, hagamos un cese bilateral de fuegos y que el gobierno se decida, de una vez y por todas, a dejar andando el proceso de participación de la sociedad que es el primer punto. Esos serían dos acontecimientos muy importantes en la venida del Papa Francisco. Eso le daría, entre otras cosas, sustento a la paz.

Nosotros desde siempre hemos considerado que el proceso de paz debe hacerse en medio de un cese bilateral de fuegos y se lo hemos planteado reiteradamente al gobierno. El gobierno ha dicho no: el proceso de paz es en medio del conflicto. Nosotros decimos: eso es un absurdo. Debe haber un alivio humanitario para la población en guerra, además, nosotros creemos que, en

medio de un cese bilateral, se podría desarrollar el proceso de paz con mucha más soltura, la gente podría participar, la gente de la zona de conflicto podría contribuir al proceso de paz. Le daría eso mucha confianza a la comunidad internacional, a los países garantes, para tener una participación mucho más dinámica. Pero el gobierno tiene esa postura porque tiene la visión de que así debe ser. Entonces decimos que, por lo menos, como un gesto en la venida del Papa pactemos un cese bilateral y se deje andando el primer punto de la agenda.

En referencia a los países garantes, hay algunos que lo han sido del proceso con las FARC y repiten con el ELN. Uno de ellos es Venezuela, y se sabe que el presidente Hugo Chávez fue una figura clave en el acercamiento entre Santos y Timochenko. ¿Hay una figura así en medio de la comunicación de Santos y Gabino?

El presidente Chávez, nosotros decimos en Colombia, se la jugó por la paz. Chávez en un momento determinado fue el facilitador entre el presidente Uribe y el ELN en ese momento. En un arranque de soberbia, el presidente Uribe sacó al presidente Chávez como facilitador y se suspendió la mesa con el ELN, porque Chávez era precisamente ese enlace.

Después de eso, nosotros tenemos que reconocerle a Venezuela su papel protagónico en el proceso de paz. Mucha actividad a parte de la que se conoce, producto del acuerdo entre el gobierno y nosotros para todo lo de la logística, de movimiento, de actividad y de seguridad, lo que podríamos llamar el trabajo gris. A Venezuela le debemos mucho de ese esfuerzo. Lógicamente, a todos los países garantes, pero sí hay que reconocerlo a Venezuela.

No existe una persona. Existe un grupo de personas que le llevan al presidente Santos nuestra visión, nuestros plantea-

mientos, nuestras palabras, nuestra valoración de los problemas y las posibilidades; hay personas que se las llevan, officiosos, y lo están haciendo muy bien, nosotros tenemos confianza.

El proceso del ELN no avanza porque el gobierno desconozca lo que pensamos y cómo anda el proceso. El proceso con el ELN no anda porque no hay una decisión y una voluntad de parte del gobierno de empujar el proceso. Esa es la lectura que nosotros tenemos. Si tuviera esa decisión el presidente Santos y esa voluntad, y se arreglara, este proceso iría mucho más adelante.

¿Influye la situación de inestabilidad política en Venezuela en la mesa de conversaciones con el ELN?

Nosotros tenemos mucha preocupación por las tensiones que existen entre Colombia y Venezuela. Nosotros hemos dicho y lo ratificamos: solicitamos con todo respeto a Colombia, al gobierno colombiano y a todos los gobiernos que están interviniendo en los asuntos internos de Venezuela, que permitan que ese pueblo, ese país, ese gobierno que es legítimo, pueda resolver las dificultades internas, normales en todo país y en todo proceso, de manera soberana y de manera independiente, que no se intervenga, que no se tome partido, porque la autodeterminación y la soberanía obligan a que cada país, cada Estado, resuelva sus asuntos internos con plena independencia. Esa es nuestra solicitud.

Las tensiones de este momento entre Colombia y Venezuela, por supuesto, afectan sensiblemente el proceso de paz en Colombia y, en particular, la mesa de diálogo entre el gobierno y ELN porque Venezuela está jugando un papel muy importante en todas las actividades de desarrollo.

Por supuesto, esto es un acuerdo bilateral entre el ELN y el gobierno del presidente Santos, y del gobierno del presidente

Santos con el gobierno del presidente Maduro. Entonces, en aras del proceso de paz, debe haber mucho respeto, mucha independencia y mucha responsabilidad en el manejo de los asuntos internos de cada país.

Otro de los países garantes, y de los más comprometidos con la paz de Colombia, es Cuba. Dada la experiencia diplomática de la isla en el proceso con las FARC, y de sus buenos oficios en esfuerzos anteriores impulsados por el ELN con otros gobiernos, ¿por qué esta vez no es La Habana la sede de las conversaciones con el ELN? ¿Vendrían a la capital cubana a negociar en algún momento?

Lo primero que hay que decir cuando uno llega a Cuba es que aquí está Fidel. Para nosotros es muy importante el papel que ha jugado Cuba en todo este proceso, se lo hemos reconocido al gobierno.

Nosotros, el método que tenemos para el desarrollo de los diálogos es que cada país pueda ser una sede rotativa. Nosotros no descartamos que cualquiera de los países, sobre todo, de América Latina y el Caribe, sean sede: Venezuela, Ecuador, Cuba, Brasil, Chile. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos considerado muy importante que la paz de Colombia impacte o se articule a las actividades del continente. La paz de Colombia es muy importante para todo el continente y, por tanto, las luchas del continente son muy importantes para la paz de Colombia. Por eso, para nosotros, el que cualquiera de los países en el entorno de América Latina y el Caribe sean sede, no solamente tiene una importancia operativa sino también un simbolismo. La paz de Colombia es la paz de América, es la paz que soñó Bolívar, la que soñó Martí, la que ayudó a construir Fidel, el Che. Por todas esas razones, nosotros decimos

que, en cualquier momento, cualquiera de los países garantes puede ser sede o va a ser sede en las conversaciones de paz.

Por supuesto, tenemos que decir que Cuba ha estado siempre abierta, el gobierno cubano nos ha ofrecido su territorio. Inicialmente, aquí iba a ser la sede para las conversaciones con el ELN, lo que pasa que el gobierno colombiano no estuvo de acuerdo. El gobierno colombiano descartó a Cuba como sede inicial para el diálogo con el ELN. Nosotros conocemos razones, que quizás no es el momento de decirlas, de mezquindad del gobierno colombiano. Pero Cuba siempre nos ha ofrecido su territorio, nosotros lo agradecemos profundamente y, sin dudas, si en algún momento Cuba llega a ser sede, sentiremos mucha plenitud y la total seguridad en la responsabilidad y el profesionalismo con que Cuba siempre nos ha atendido y como nos hemos sentido en este territorio.

Fuerzas desArmadas Revolucionarias de Colombia le apuestan a la palabra

EL 27 de junio de 2017, seguramente, la mayoría de los titulares de prensa que refirieron el fin del desarme de las FARC pudieron ser halagüeños, varios medios calificaron de histórico el día, hablaron de paz concretada, y los más reacios se limitaron a declarar la extinción de ese grupo como fuerza armada. Y, ciertamente, el día tuvo una significación mayúscula, impensable para muchos desde que comenzara el proceso de negociación que se creía uno más, otra vez fallido. Impensable además si se tiene en cuenta que el camino post acuerdo final no ha sido llano o fácil, por el contrario, incumplimientos, demoras, y la muerte pisando los talones a cada guerrillero salido de la cárcel o desprovisto de fusil es lo que ha primado.

Lo primero es aclarar que, contrario a lo que dijera el propio presidente Juan Manuel Santos, las FARC no dejaron de existir con la entrega del 100% de su dotación de guerra, aún faltaba que se declararan oficialmente un movimiento político —eso sucedería un mes y tanto después, en agosto. En ese momento, se trataba de una organización que comenzaba a transformarse, cuando más, había dejado de tener la A de «armadas» de sus siglas. Podía comenzarse a hablar de guerrilleros desmovilizados hasta que cambiasen de nombre y estructura, excombatientes que atravesaban un proceso de tránsito de la ilegalidad a la legalidad, de lo militar a lo civil, en tanto seguían existiendo y por más tiempo, sin dudas, se les llamaría así.

Otro elemento importante de esclarecer es que la totalidad de las armas que se abandonaron en tres fases —primero el 30%, después el segundo 30% y finalmente el 40% restante— hasta llegar al acto formal que tuvo lugar en la Zona Veredal

de Normalización de Buenavista, también llamada La Guajira y ubicada en Mesetas, departamento del Meta, fueron las armas individuales. Naciones Unidas tuvo en su poder el 100% del arsenal personal: 7 132 de acuerdo con el registro. Existían además unas 900 caletas o depósitos ocultos con el armamento pesado adquirido en los más de 50 años de conflicto y con el inestable de fabricación artesanal. Si bien ya los insurgentes habían entregado las señas de su localización geográfica y contenido, aún no se habían incautado para su posterior destrucción, apenas se habían revisado 77, tal y como expresara el jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, en la ceremonia oficial del desarme. Por tanto, a partir de ese acto formal, hubo 7 000 fusiles menos que empuñar en una guerra que continuó librándose, a pesar del discurso oficial; continuó porque siguieron alzados otros actores del conflicto, dígame el Ejército de Liberación Nacional, dígame ese otro grupo más sangriento, desideologizado y mercantilista que son los paramilitares. Podría ser el vaso a la mitad, pero definitivamente desde la óptica optimista de verlo medio lleno, porque sin las FARC y el Ejército dándose plomo habría mucha menos sangre derramada a futuro.

Lo que sí hay que reconocer es que, si se compara con procesos anteriores de desarme, el de las FARC ha sido el per cápita y porcentualmente más alto de la historia colombiana. Algunas cifras oficiales dan cuenta que, en la desmovilización de los paramilitares, se entregó un arma por cada dos mercenarios. En el caso de la negociación con el M-19, se entregaron menos de 300 armas, cuando el estimado de integrantes de la organización rondaba los 700. Y en el caso del Ejército Popular de Liberación, EPL, eran 2500 combatientes y se deshicieron de unas 600 armas.

Visto así, como el silenciamiento de los fusiles, le asistió la razón a Santos cuando expresó que la paz se convertía en «real e irreversible», o sea, no había punto de retorno, pero únicamente con esa masa insurgente con la que se implementaba un pacto de caballeros desde múltiples aristas. «Hoy 27 de junio para mí y para los colombianos es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras» afirmó el mandatario colombiano, pero sería verdaderamente especial cuando la violencia quedase realmente proscrita de toda la vida política del país, porque no solo los guerrilleros la generaban.

Ciertamente, las FARC le cumplieron a Colombia, como expresara su máximo líder, Timoleón Jiménez, Timochenko, y dieron su «adiós a las armas», su «adiós a la guerra». Esperaron luego que el gobierno —el que estaba de salida y el por venir— les cumplieren a ellos la letra chica del acuerdo. Timochenko recordó que «la guerra interna nació del cierre de las vías legales» y que «la paz significa que la participación política estará abierta a todos».

La parte oscura de esta realidad era que, con los guerrilleros de las FARC desarmados, la inminencia de promesas rotas por parte del ejecutivo crecía. De hecho, uno de los rostros más conocidos de la insurgencia, Jesús Santrich, el rebelde invidente de verbo audaz que fungió como negociador plenipotenciario en La Habana, se declaraba en huelga de hambre ante lo que consideraba «el incumplimiento sistemático de los acuerdos por parte del gobierno». La protesta estaba directamente relacionada con la no aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en diciembre de 2016, y por la cual 3 400 presos de las FARC debían ser beneficiados, sin embargo, hasta la fecha del desarme solo se habían liberado 832.

Ahora bien, a pesar de todo, la dejación de armas de la que, como aseguraron las FARC, jamás hubo una foto de un guerrillero entregándola a su adversario o a Naciones Unidas —apenas trascendieron las imágenes de funcionarios de ONU desarmando los fusiles y artilugios de guerra y guardándolos en contenedores— fue el acontecimiento más importante en 53 años de guerra, mucho más que la firma del acuerdo final de paz. A partir de ese minuto, si algo salía mal, generaría un efecto contrario en un país en el que la violencia ha tenido una triste tendencia a volverse endémica.

Cumbre de paz

En octubre de 2017, el Ejército de Liberación Nacional y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se reunieron por dos días en Montecristi, en la provincia ecuatoriana de Manabí. No era la primera vez que se realizaba una cumbre ELN-FARC, de hecho, se había convertido en un mecanismo recurrente en la última etapa de esfuerzo reconciliatorio, pero este tope —que anteriormente fue interguerrillas y cuyo antecedente más cercano fue la cita de La Habana en mayo del mismo año— fue el primero entre una insurgencia en activo y otra desmovilizada y convertida en partido político. Por lo cual, ambos grupos se encontraban en diferentes condiciones de legalidad.

Sin embargo, el propósito era el mismo: convencer, seducir, conminar a los elenos a subirse al llamado tren de la paz. La inoperancia del propio ejecutivo colombiano, a la hora de implementar el acuerdo con las FARC, le había puesto un freno a ese tren —que a ratos parecía perder su locomotora— y había aumentado el escepticismo de la guerrilla blanquinegra.

Más allá de las diferencias del pasado entre esas dos fuerzas anti *status quo*, había convencimiento en ambas de la necesidad de parar la guerra definitivamente. En la Declaración de Montecristi se comprometieron a «que ninguna dificultad —por grande que sea—, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia». El ELN no estaba dispuesto a una paz a cualquier costo —lo había reiterado una y otra vez en toda tribuna pública— porque veía a diario como una cosa era el texto impreso con la letra chica del acuerdo y otra bien distinta su concreción práctica.

Para poner en contexto la realidad colombiana de entonces, baste mencionar algunos hechos. La fuerza política *fariana* acababa de enviarle una carta al presidente Juan Manuel Santos pidiendo que cumplierse con lo firmado. «Comprendemos que una paz estable y duradera implica, por parte del Estado y los ciudadanos, el respeto de la ley y los compromisos adquiridos», decía la misiva y agregaba: «Desafortunadamente, la paz y la reconciliación de los colombianos tienen aún enemigos poderosos, que no escatiman esfuerzo en torpedear la implementación de los acuerdos, ni pierden oportunidad para sembrar cizaña y tratar de sabotearlos».

A ello se sumaban los continuos retrasos en materia legislativa. Ese octubre había sido un mes de continuas trabas para el proyecto de ley de reforma política y electoral por solo mencionar la que estaba sobre el tapete, de muchas otras, y la urgencia estaba en que en diciembre vencía la vigencia de las reglas legislativas especiales con las cuales se venían aprobando las iniciativas —el denominado *fast track*— y como iban los ritmos, lucía improbable que para entonces estuviesen aprobadas todas las leyes necesarias.

Por otra parte, los excombatientes habían empezado a abandonar los sitios de transición porque no estaban garantizadas las condiciones de vida ni los modos de sustento. Solamente de Tumaco, en el departamento de Nariño, unos 300 exguerrilleros habían salido de la zona veredal, huyendo además de la violencia, pues continuaban los asesinatos selectivos a líderes sociales y también a los miembros de las FARC y sus familiares. Además, las fuerzas represivas de la policía —Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido por sus siglas ESMAD— acumulaban crímenes contra manifestantes que exigían vivir con un mínimo de dignidad y los exinsurgentes no escapaban a esta realidad.

Los grupos paramilitares completaban la tarea de exterminio. De ahí que, en la cita ecuatoriana entre las FARC y el ELN hubiera un lenguaje común en torno a este tema: «el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia».

Para rematar, el mismísimo subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, después de visitar Colombia, afirmó tajantemente que el proceso de reintegración no avanzaba de manera adecuada. Dijo: «La experiencia de la ONU en otros lugares (...) señala que cuando la reintegración no ocurre, la paz en sí misma no es sostenible».

Y este era el escenario que observaba con lupa el equipo del comandante Gabino. No iban a cambiar prebendas políticas por un contexto similar, buscaban más y el gobierno les ofrecía poco. La mesa de Quito tampoco despejaba, apenas si se vivía un cese bilateral de fuegos como el mayor logro, pero no existía ningún otro consenso sobre los temas en agenda. Por su parte, el ELN consideraba que su organización era el eslabón fundamental para el equilibrio necesario en la correlación de fuerzas en los lugares marginados socio-económicamente en Colombia. La práctica también les daba la razón, allí donde las FARC abandonó terreno, el Estado no había sabido ocuparlo y los grupos poblacionales quedaban a merced del paramilitarismo y la delincuencia.

Tras la cumbre FARC-ELN, comenzaba el cuarto ciclo de diálogos de estos últimos. El gobierno necesitaba entonces mucho más que emisarios seductores para sumar las voluntades de ese Ejército de Liberación que no iba a claudicar en su lucha armada mientras creyese que poco había cambiado en Colombia, a pesar de que el mundo le exigiese concesiones porque la guerra no era el camino.

Historia repetida de diálogos y crisis

Si bien 2017 podría decirse que fue el primer año de la paz en Colombia, por haber sido el año de la implementación del pacto alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2018 comenzó con toda una concatenación de hechos que desarticulaba el discurso pacifista que el ejecutivo había erigido desde que vendiera al mundo el muy cuestionable fin del conflicto armado.

Además de las múltiples trabas a la letra de lo pactado en La Habana con la guerrilla de las FARC y de la sistemática y selectiva matanza a líderes políticos y sociales en los primeros doce meses post acuerdo, guerra y paz, diálogo y crisis, volvían a titulares en la nación sudamericana, entonces relacionados con el esfuerzo reconciliatorio que coronaría la llamada «paz completa», la negociación con el Ejército de Liberación Nacional.

El 9 de enero de 2017 terminaba la tregua bilateral de 3 meses entre fuerzas de gobierno y la insurgencia *elena*; 24 horas antes se veían las caras las delegaciones negociadoras en Ecuador y, para sorpresa muy positiva, los enviados de Santos eran rostros nuevos —el exvicepresidente Gustavo Bell al frente de la delegación oficial en sustitución de Juan Camilo Restrepo—, y ello denotaba interés por relanzar la vía diplomática, de ponerle afán en pos de lograr consensos a corto plazo; pero apenas expiró el silenciamiento de fusiles, el presidente Santos anunció que su equipo se levantaba de la mesa, abandonaba Quito y volvía a Bogotá con instrucciones precisas de reevaluar la continuidad del proceso y, paralelamente, dio a su ejército la orden de actuar con «contundencia».

El por qué de esta actitud del Jefe de Estado colombiano estuvo anclado en sucesivos ataques de los combatientes del ELN a la estructura petrolera en varios puntos del país — Arauca, Boyacá y Casanare —, a lo que sumó de inmediato una campaña de denuncia para vender el pretexto que sirvió al impasse y ganar apoyo contra los «culpables». Y ciertamente era condenable ese tipo de atentados que ocasiona pérdidas de vidas humanas y daños económicos considerables. Pero no podía desprejiciarse un elemento central: el conflicto armado estaba vivo mientras existiese un grupo guerrillero en activo; acciones como las que propiciaron esta crisis se repetirían una y otra vez, u otros enfrentamientos, porque eran inherentes a una guerra que intentaba solucionarse por la vía diplomática pero que era solo eso, un intento bajo las balas.

Eso sin contar que las crisis en la mesa de diálogo siempre se atribuían a acciones de las fuerzas insurgentes, mientras que la crudeza de la policía o el ejército en las comunidades colombianas bajo protección de grupos guerrilleros no desencadenaba repudio ni siquiera similar, ni llevaba a la ruptura de la búsqueda de la salida política.

De hecho, los ataques en cuestión que conllevaron a la paralización de las conversaciones, se produjeron a poco de culminar el cese el fuego, o sea, que no constituyeron una violación a la tregua. Aun así, no se investigó en profundidad la naturaleza de lo sucedido antes de tomar la decisión de abortar las pláticas. En ese sentido, el líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, Timochenko, exhortó a que «las acciones sean investigadas con rigurosidad y las responsabilidades asumidas» y agregó que «la voluntad de paz no puede estar por debajo de hechos puntuales».

En esa crisis puntual se minimizó que poco antes de que finalizara la suspensión de hostilidades, el gobierno había movilizó a miles de sus efectivos militares hacia zonas de presencia insurgente, lo cual evidenciaba que las partes se alistaban para entrar nuevamente al modo de confrontación, siendo contraproducente con el discurso público que abogaba por la prórroga del clima distendido. La pregunta que debió protagonizar el debate era ¿qué había impedido ponerlos de acuerdo para otra temporada sin fuego cruzado? No era difícil adivinar que, en el primer y rápido cara a cara de los equipos negociadores en ese año, estuvo sobre la mesa la preocupación de los elenos sobre los asesinatos políticos, así como las inconformidades con la falta de compromiso del Estado con la palabra empeñada con las FARC, que dejaba un mal sabor para los del ELN a la hora de concretar acuerdos.

El componente internacional no demoró en reaccionar para calmar los ánimos y pedir sensatez. Los países garantes Brasil, Chile, Ecuador, Noruega, Venezuela y Cuba solicitaron a gobierno e insurgencia iniciar con urgencia el quinto ciclo de negociaciones. «Exhortamos que se asuma como prioridad la negociación de un siguiente cese al fuego, junto a otros temas de la agenda. Llamamos a las partes a evitar un escalamiento que ponga en peligro los avances logrados en el proceso de negociación y en el anterior cese al fuego» se leyó entonces en la declaración de los garantes.

Naciones Unidas y la Unión Europea también pidieron «la rápida reanudación del diálogo». Y el país anfitrión notificó a través de un comunicado que «el interés del gobierno del presidente Lenín Moreno, la canciller María Fernanda Espinosa y el pueblo ecuatoriano es el de continuar prestando todo el apoyo

y la solidaridad que Colombia demanda para lograr la paz completa y definitiva».

Si nos basamos en experiencias anteriores, dígame el proceso con las FARC, escenarios como aquel con el ELN y peores se dieron, y claro que repercutieron en las conversaciones que tenían lugar en Cuba, pero la práctica dictó que pararse de la mesa, suspender el diálogo, jamás fue la solución. Ambas partes deberían haberse centrado en reanudar la tregua, el único logro real y de impacto después de casi un año de negociaciones. Restaban siete meses para que Santos abandonase el Palacio de Nariño y otro, con propósitos no tan pacifistas, ocupase su lugar. «No es momento para crisis», debió ser la consigna que gobierno y ELN asumiesen como bandera.

Coherencia sí, pero todos

La palabra coherencia ha sido bastante vilipendiada durante todo el proceso colombiano de paz. La utilizó, por ejemplo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos para aplicar presión sobre el antagonista político que le sobrevivió como adversario militar: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Poco después de su decisión de pausar las conversaciones que sus plenipotenciarios adelantaban en Quito con los elenos anunció: «He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días (febrero de 2018), hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones». Sustentando su decisión precisamente en la falta de conexión entre el discurso y el accionar de la guerrilla, el mandatario Nobel de Paz revocó temporalmente la Mesa de Diálogo por segunda vez en tan solo un mes – primero interrumpió el inicio de las pláticas al ordenar a su equipo negociador regresar a Bogotá y dar luz verde a sus Fuerzas Armadas para actuar con contundencia.

Es cierto que, en ambos casos, los ataques de la guerrilla colmaron la copa de Santos: «mi paciencia y la del pueblo colombiano tienen sus límites», y más que eso, le llovieron las críticas por mano blanda, pues le cuestionaban que, mientras morían policías o resultaban lesionados, él seguía supuestamente «empeñado» en la solución diplomática. El Ministerio de Defensa notificó por aquel entonces que la arremetida más reciente del grupo insurgente había sido contra fuerzas policiales en el norte del país, específicamente en tres puntos de la ciudad de Barranquilla, con saldo de siete agentes fallecidos y más de cuatro decenas de personas heridas. Hechos absolutamente

condenables, pero tristemente habituales y «naturales» en medio de un conflicto armado que permanecía vivo.

Si se hablaba de coherencia, urgía ser coherente, pero todos. Y asomaba la pregunta: ¿cuándo el Jefe de Estado colombiano había condenado públicamente, con idéntica o similar energía a la que derrochaba para repudiar los ataques insurgentes, el asesinato de líderes indígenas o afrodescendientes del Chocó, de exguerrilleros de las FARC o sus familiares, de dirigentes comunales o campesinos, de mujeres o activistas por los derechos humanos, a pesar de que se ha convertido en una práctica creciente? Una práctica que no tiene otro nombre que asesinatos políticos. ¿Esos decesos le hicieron tomar alguna decisión? ¿Han impactado en el proceso de paz? ¿Acaso las vidas de estas personas son menos valiosas que la de los efectivos militares?

Hubo muchísima menos coherencia en el actuar de Santos cuando por un lado dijo que su máxima era combatir en el terreno como si no hubiese esfuerzo de diálogo y negociar con la insurgencia como si no hubiera confrontación armada. Esa era la llamada doctrina RABIN, aunque para ajustarnos a la realidad, el presidente ponía en ella el término «terrorismo». «Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo» dijo durante uno de sus discursos condenatorios, y volvió a ser incoherente con tal sentencia, después que en el pasado había reconocido a la insurgencia como un actor en igualdad de condiciones en el teatro de operaciones y no como un mero grupo terrorista.

Fue así como Santos violó su propia regla al detener el diálogo. A muchos, como a él, les podía parecer contradictorio que se hablase de paz y se produjesen atentados, enfrentamien-

tos, emboscadas, pero esas fueron las condiciones bajo las que funcionó, o al menos llegó a «feliz» término, el proceso con las FARC y bajo las que comenzó el proceso con el ELN, que solo alcanzó alivio mientras duró el cese bilateral de fuegos, que las partes no pudieron prorrogar una vez cumplido su fin, a pesar de tanta voluntad pregonada.

Ello sin contar que, cuestionar exclusivamente los ataques de la guerrilla siempre ha sido como narrar solo una parte de la historia, porque frente a los combatientes de la insurgencia ha habido un ejército en activo que también conoce de ofensiva. «No tenemos la menor duda de que esto —los ataques en Barranquilla— es una retaliación ante tantos buenos golpes de la policía» afirmó el alcalde de la ciudad Alejandro Char, quien en un primer momento culpó de las acciones violentas a las mafias locales asociadas al narcotráfico, hasta tanto uno de los frentes elenos, el Guerra Urbano Nacional, se atribuyó uno de los ataques.

Lo que sucede es que, en este caso, los hechos siempre han sido contados por los que detentan el poder de los micrófonos. ¿Qué medio de comunicación se hizo eco en su momento de la embestida del ejército contra el ELN? En su cuenta en Twitter, el equipo guerrillero de paz ilustró, gráfica mediante que, solamente en enero de 2018, sus hombres sufrieron diez acciones de la fuerza pública, de las cuales resultaron seis guerrilleros muertos y otros 25 capturados. La delegación insurgente lanzó un llamado al gobierno colombiano a retomar la cita en la capital ecuatoriana para pactar «un nuevo y mejor cese bilateral».

Y sí, le asistía la razón a Santos en que la coherencia demandaba ser consecuentes y, en ese sentido, hacer concordar los actos con las ideas. Y si el ideal era el de la paz, había que

buscar el consenso para una nueva tregua, que permitiese un diálogo más fluido y que condujese a acuerdos concretos, pero sobre la base de presión ejecutiva, de suspensiones al diálogo y total lejanía con la contraparte, jamás se llegaría a nada, o sí, a más guerra y más muertes.

Uribe al banquillo

En las elecciones colombianas de 2018, primero legislativas y luego presidenciales, la figura más polémica del país volvía a las primeras planas porque se había vuelto lastimosamente habitual que los procesos políticos del país girasen en torno a sus excentricidades y opiniones polarizadas en extremo. Álvaro Uribe ha sido de esos presidentes que se resisten a retirarse de la vida pública y no se conforman con cargos menores, de Jefe de Estado a Senador de la República, y no cualquier parlamentario, sino el de más respaldo popular, de acuerdo al volumen de votos. Si bien no podía ocupar de nuevo la silla de gobierno, porque la constitución se lo prohibía, necesitaba posicionar en aquellos comicios a uno de los suyos, una especie de títere que le permitiese fungir a él como el presidente en la sombra.

Lo había intentado antes en 2014, pero Juan Manuel Santos pudo salir airoso en el balotaje por estrecho margen y repetir mandato, gracias a que, al elegido de Uribe en ese entonces, Oscar Iván Zuluaga, se vio envuelto en un escándalo de espionaje ilegal. En esta oportunidad tenía un nuevo candidato, Iván Duque, pero no era sobre el joven aspirante que se centraba el ataque para impedir que el ultraderechista Centro Democrático llegase al poder, sino que los dardos apuntaban al mismísimo Uribe.

Acababa de producirse, a inicios del año electoral, un fallo de la Corte Suprema de Justicia para que el expresidente fuese investigado por falsa denuncia y manipulación de testigos, lo cual había reactivado un antiguo proceso judicial en su contra. A Uribe se le relacionaba con todo tipo de crímenes: falsos positivos, asesinatos extrajudiciales, corrupción pero, sin dudas, era la sombra del paramilitarismo la que más le acechaba, pues fue

durante su gestión que el fenómeno se extendió como la ver-dolaga.

La situación se complejizó cuando Duque, para intentar salvar a su jefe, dijo que encarcelar a Uribe era un pacto no escrito que se había sellado en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC. A lo que el exjefe negociador Humberto de la Calle respondió de inmediato: «No todo gira en torno a Uribe», y agregó sarcásticamente: «No me fui cinco años a La Habana para hablar de Uribe (...) Si ese hubiera sido el objetivo me hubiera quedado conversando en la sala de mi casa».

Se trataba de una película más en ciernes. Los procesos electorales en Colombia suelen ser así de movidos y repletos de rifirrafes, donde todo el mundo saca a relucir la ropa sucia. Si solo por esa vez no hubiese sido más que un montaje mediático, bien habría valido la pena, porque Uribe tiene demasiadas deudas con la justicia colombiana de las que ha salido ileso tras interpretar como ninguno el papel de víctima. Ha ayudado a mantener su impunidad, la llamada «mermelada» política, ese fenómeno mediante el cual se soborna a diestra y siniestra, o para hacerle honor al término: se unta con dinero público al funcionario o magistrado que deba hacerse de la vista gorda.

Álvaro Uribe volvía a estar en el ojo del huracán, pero no significaba su caída, contrariamente, situaciones similares en el pasado lo habían fortalecido. No era la primera vez que se le relacionaba con el paramilitarismo — solo en la Comisión de Investigación y Acusación de Cámara de Representantes tenía abiertas unas 185 investigaciones, y más de una treintena en la mismísima Corte Suprema —, pero históricamente, para salvar su pellejo, ha sacado cartas bajo la manga con el propósito de enlodar al adversario y aparejado a ello, en todos estos años, ha logrado acumular el llamado capital político necesario, para batirse en contienda.

No fue hasta mediados de 2018 que se hizo efectivo el pedido del máximo órgano judicial para que Uribe compareciera a indagatoria, un llamado a contar para que el implicado supiese de qué se le acusaba y de ahí se definía si era procesado o no. Se creía intocable, pero había caído, momentáneamente, en desgracia. A escasos días de instalada la nueva legislatura, Álvaro Uribe sorprendía a todos anunciando en Twitter que renunciaría a su escaño en la cámara alta, puesto que por cierto acababa de asumir nada más y nada menos que como el senador más votado de todo el Congreso, con más de 800 000 votos. El señor popular, considerado una de las voces más duras y que más alto se escuchaba dentro de las paredes del hemiciclo, tomaba tal decisión después de enterarse que una de tantas investigaciones —era el nombre que más aparecía en los expedientes condenatorios— había procedido en su contra.

¿De qué se le acusaba esta vez? Cuatro años atrás, Uribe había presentado una denuncia contra uno de sus detractores más agudos, el también senador por el Polo Patriótico, Iván Cepeda, para quitárselo de arriba, y resulta que de acusador se convirtió en acusado, pues Cepeda arremetió y fue su historia contra el dos veces presidente de Colombia la que la Corte decidió investigar, lo cual, por cierto, había hecho en la primera mitad del año con sigilo, pero a paso firme.

Se produjo un evidente efecto boomerang, si bien el exmandatario había arremetido para que el dedo acusador recayera en su archienemigo, la Corte archivó la investigación de Cepeda y abrió un caso contra Uribe con los mismos argumentos. La manipulación de testigos de la que se le acusaba a Uribe tenía que ver con la causa del senador de izquierda absuelto. Detrás de todo estaba el hecho fundamental: la vinculación de Álvaro Uribe con grupos paramilitares, los que creó, financió y aupó

para que hicieran el trabajo sucio de erradicar a las fuerzas insurgentes, y con quienes finalmente pactó en condiciones sumamente ventajosas para aquellos que no habían sido otra cosa que asesinos a sueldo.

Ahora, los presuntos delitos por lo que se le llamaba a indagatoria eran fraude procesal y soborno, en el que había involucrado a tres exparamilitares, de los cuales dos estaban en prisión y uno había sido recientemente asesinado. A estos testigos los quiso comprar para que no destaparan la verdad sobre su persona y, al parecer, había pruebas sobre ello que involucraban a otro congresista, Álvaro Hernán Prada, tocayo y hermano de causa en esta trama judicial. Hasta aquí la historia que apenas comenzaba.

El asunto en cuestión del momento era la renuncia al asiento en la Cámara Alta. Se preguntaban muchos por qué lo hacía si otras veces había insistido en su inocencia y no había habido consecuencias políticas. Solo que ahora se trataba de una estrategia bien pensada. Si se mantenía como senador, sería investigado por la máxima instancia de justicia del país. Pero de renunciar efectivamente, la Corte perdía jurisdicción y lo procesaría entonces la fiscalía donde Uribe tenía excelentes amigos. De más está decir que el heredero, Iván Duque, había salido en defensa nuevamente de la «honorabilidad, rectitud e incuestionable servicio al país» de su mentor. Centro Democrático en pleno también agitaba las banderas de la inocencia para aupar al líder supremo. Esta bomba explotaba dos semanas antes de que Uribe asumiera los destinos de Colombia, a través de la cara visible del inexperto Duque y se extendería mucho más allá hasta el sonadísimo encarcelamiento, preventivo y en casa pero con número de preso al fin y al cabo, de quien se creía imbatible y todopoderoso.

La carrera de poderes en Colombia

En la carrera por renovar los poderes legislativo y ejecutivo en 2018, por primera vez en décadas, la guerra y la paz no estuvieron en el centro de las campañas electorales como si ambos fueran temas zanjados con el desarme de las FARC y la firma de un acuerdo de reconciliación entre el gobierno de turno y la guerrilla que fundaran campesinos hastiados de la violencia política y el abandono estatal de las áreas rurales. Muy cierto era que el panorama se tornaba distinto al de hace ocho años atrás cuando la confrontación vivía picos máximos de tensión y que ahora aquellos hombres uniformados, entonces al margen de la ley, se habían convertido en ciudadanos con derecho a postularse y elegir, aglutinados en un partido político al que se le reconocía como igual al resto de las fuerzas en contienda. Pero el conflicto no había cesado del todo por más que se quisiera vender la idea de pacificación; aún persistían prácticas violentas y de intimidación que condicionaban la realidad política, incluso a la hora del ejercicio democrático de votar. Sin embargo, primaba la matriz de que en este proceso electoral la seguridad no era un problema al no estar activos los fusiles de las FARC y el ELN haber decretado una tregua unilateral durante la realización de los comicios.

Las parlamentarias del 11 de marzo de 2018, se vaticinaban como atípicas en varios sentidos. La primera novedad era la participación de la FARC como partido, que se presentaba con 36 candidatos en total para ocupar asientos en el Senado y la Cámara de Representantes. La denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común iba con ventaja: aun y cuando no consiguiese un solo escaño por la vía de los votos, contaba con la prerrogativa que le otorgó el Acuerdo de La Habana,

mediante la cual ese grupo adquiriría diez curules de facto, cinco para cada instancia legislativa.

Lo anterior condicionaba que el nuevo Congreso colombiano tuviese un número mayor de miembros, pues los asientos de la FARC se añadían a los de los 102 senadores y 166 representantes. Y no terminaba ahí la suma, pues a partir de una reforma para lograr un «equilibrio de poderes», la fórmula presidencial que quedase en segundo lugar en los comicios para Jefe de Estado obtendría sendos puestos: en el Senado —el aspirante a presidente— y en la Cámara —el aspirante a vicepresidente— es decir, de 268 integrantes, el parlamento pasaba a 280.

Como distinción adicional, los comicios legislativos se realizarían de forma paralela a dos consultas interpartidistas. Dos especies de coaliciones ideológicamente ubicadas a los extremos: la derecha y la izquierda, definirían sus respectivos nombres a optar por ocupar el Palacio de Nariño por los próximos 4 años. Todos los sondeos apuntaban a que, de esta selección a modo de «primarias», saliesen los dos contendientes que hasta el momento lideraban las intenciones de voto —alrededor de un 25% cada uno— aun sin ser oficialmente candidatos: Iván Duque por el Centro Democrático, el hombre de Uribe, y Gustavo Petro por Colombia Humana, el exalcalde de Bogotá con pasado guerrillero y proyección cercana al progresismo. Ambos habían opacado la imagen de otros postulantes como el expresidente Germán Vargas Llera, un exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle.

Tanto Duque como Petro —el segundo incluso recibió un atentado en la ciudad de Cúcuta— estuvieron en el centro de focos de violencia. Tuvieron que suspender actos proselitistas por enfrentamientos entre seguidores y detractores. Con lo

cual, los métodos sucios se siguieron imponiendo en la política colombiana que continúa sin tolerar la pluralidad de pensamiento o cualquier asomo de cambio de sistema. A tal punto llegó la arremetida contra las figuras en campaña, sus familiares, allegados o simplemente activistas contrarios al *status quo*, que la FARC suspendió temporalmente su carrera electoral.

En medio de todo ese escenario, el aspirante por el partido de la rosa roja, Rodrigo Londoño, Timochenko, oficializó poco después su retirada definitiva de la contienda presidencial tras presentar nuevamente problemas de salud que lo llevaron a enfrentar otra cirugía. El grupo basó además su decisión de abandonar la campaña en la falta de garantías para su seguridad y no presentaron otro nombre para reemplazar a Timochenko en boleta.

Así las cosas, cuando en el fondo lo que se cocinaba era una renovación maquillada de una legislatura que como institución estaba totalmente desprestigiada. Pesaban sobre buena parte de las figuras políticas con asiento en el Congreso y de los que aspiraban a ocupar butaca, escándalos de corrupción y otros delitos penales, siendo Álvaro Uribe uno de los de peor pronóstico. Había sido este órgano el que más obstáculos había puesto a la implementación del acuerdo de paz, convirtiendo en pura burocracia cada trámite y evitando o desvirtuando la aprobación de las leyes imprescindibles para la concreción de lo pactado como resultado de la negociación política con la insurgencia.

El país se mantenía profundamente polarizado a partir de la corriente del uribismo: los que seguían al expresidente, que pretendía gobernar tras bambalinas, y los que se oponían a él. La exguerrilla continuaba cargando todos los estigmas apostillados por décadas de guerra y las voces de izquierda permanecían como blanco de ataques al punto de la aniquilación.

Como mal de fondo persistía un sistema electoral corrupto, plagado del voto-favor, el llamado clientelismo político que se ha convertido prácticamente en una política de Estado en Colombia. Lo cierto es que las elecciones legislativas vendrían a configurar más claramente la correlación de fuerza de los partidos de cara a las presidenciales. Sobre todo, porque era poco probable que alguna tolda se alzase con la mayoría necesaria para la aprobación de leyes. Eso sí, los resultados incidirían en las futuras alianzas para los comicios siguientes y anticiparían lo que podría ocurrir en las urnas —que ya anunciaban dos vueltas al seguro— cuando se eligiese al sucesor de Juan Manuel Santos.

Narcotráfico, violencia y paz otra vez marcando intención de voto

Casi a las puertas de los comicios presidenciales de 2018, cobraba vida la sentencia del académico colombiano, Eduardo Pizarro, cuando afirmaba: «uno no puede andar creyendo que la responsabilidad de lo que pasa en el país no la tengo yo. Uno tiene que tener la tranquilidad de conciencia de que traté de hacer algo a través de la herramienta que me brinda la democracia que es el voto». Palabras que servían para Colombia y para toda América Latina, donde la abstención y apatía política de Europa también habían llegado para quedarse.

Toda elección era importante y definitoria, pero más cuando podía significar echar por tierra, borrar de una vez, un acuerdo de paz que por muy desmembrado que se encontrase, era lo más progresista y avanzado que se había logrado en un país con una guerra enquistada en las almas.

Los candidatos más mediáticos para las elecciones del momento eran cinco, aunque en realidad se presentaban seis a la contienda. El sexto era un aspirante independiente sin mucha visibilidad. En general, competían opciones diversas en muchos aspectos programáticos pero en materia de paz y reconciliación se concentraban las mayores divisiones.

Las encuestas arrojaban una segura segunda vuelta y entre los probables candidatos al mano a mano estarían el ultraderechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, pero con cierta desventaja frente al favorito, el elegido de Álvaro Uribe. La campaña de quien iba a la vanguardia se había erigido sobre la base del miedo a la izquierda, al populismo y todo lo que se acercase al rojo. «No queremos otra Venezuela», «no queremos el castro-chavismo». Los mismos eslóganes triviales y carentes

de sentido, que permitieron la victoria al No en el plebiscito del acuerdo de paz, se activaron para disminuir la simpatía *petrista*.

Petro, quien cargaba además con un pasado guerrillero, había advertido de un posible fraude. Sus argumentos habían caído en saco roto, pues el entonces presidente Santos se había encargado de vociferar transparencia, garantías y seguridad. Palabras que quedaban en entredicho en una nación donde jamás la izquierda había llegado al poder, totalmente estigmatizada por los procedimientos de la insurgencia y la aniquilación, a ratos quirúrgica, a ratos de forma masivamente genocida, del pensamiento que disiente.

Los colombianos eran víctima de la batalla de los extremos, en la que se perdían de vista otros candidatos atractivos y con propuestas menos radicales, incluso alguna que otra verdadera apuesta por el ansiado cambio que jamás dependerá solamente de elegir presidente sino del actuar, las decisiones y conducta de los ciudadanos, más urgidos a intervenir en política que a ser presas de la política. Eran los casos de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, más relegados en los sondeos por intentar salirse de algunos de los malos vicios de las elites dominantes en Colombia.

Y a ese panorama se agregaba el estremecimiento noticioso que vivió el país a solo un mes de las presidenciales, típico de esa recta electoral, y donde cada uno de los sucesos tuvo bastante bien disimulado — a veces — el signo manipulador de los partidos que se disputaban el puesto en el Palacio de Nariño.

Primeramente, un exguerrillero de las FARC en huelga de hambre como reacción a la intención del estado colombiano de extraditarlo a Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Inmediatamente después se produce una nueva paralización del diálogo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ante la decisión de Ecuador de retirar sus oficios como sede del proceso. La causa,

relacionada con duros enfrentamientos en la frontera colombo-ecuatoriana y la muerte de periodistas en circunstancias no esclarecidas. A lo que se sumó, del otro lado del país, también en zona fronteriza pero esta vez con Venezuela, un fuego cruzado entre el ELN y otro grupo armado ilegal, el Ejército Popular de Liberación, EPL, situación que desencadenó una crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Y todo ese panorama a poco de la primera vuelta presidencial, a la que necesariamente le seguiría una segunda ronda por la pluralidad de candidatos y la oscilación de los sondeos.

En el caso de los comicios para elegir al sucesor de Santos, si bien el proceso de paz no se posicionó, como en elecciones pasadas, en el centro de la votación, indirectamente estuvo en juego y se usó como baraja de doble cara.

El inculpamiento a Jesús Santrich en un escándalo de tráfico de drogas convino como anillo al dedo al gobierno para responder en contundencia a todos los que criticaban el acuerdo de paz por considerar que otorgaba impunidad para los reincorporados de las FARC. Al poner a Santrich tras las rejas e intentar extraditarlo hacia Estados Unidos, se echaba por tierra la tesis *uribista* de que los crímenes pasarían por alto. Podía ser real, o no, la implicación de este hombre, que no era cualquiera, sino prácticamente uno de los más intransigentes ideólogos de la exguerrilla, que ahora se veía envuelto en serias acusaciones por demostrar, pues existía el antecedente de casos como este, contruidos de cara a la opinión pública. Pensemos en Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 60 años de cárcel tras varios juicios en los que los cargos fueron mutando hasta poder «probar» alguno.

En tanto se desentrañaban los hechos, la salud de Santrich se resquebrajaba debido a las consecuencias de una segunda

huelga de hambre en poco tiempo; con la protesta, él quería probar su inocencia, mientras sus correligionarios exigían su excarcelación ante la inexistencia de pruebas condenatorias.

Por otro lado, romper el proceso de diálogo con el ELN con vino, en cambio, al *uribismo*, que sostuvo siempre el principio de «No diplomacia y Sí plomo» a esa organización. En los pocos meses que quedaban para el cambio de mando, harían todo lo posible por ayudar a dilatar el proceso, que aún no encontraba sede alternativa entre el resto de los sitios posibles, incluso, porque el asunto de revivir la extradición significaba un peligro para los propios elenos que estudiaban cuidadosamente con lupa todo lo que le pasaba a los de las FARC.

Los seguidores de Álvaro Uribe habían mantenido el hábil discurso de decir que no enterrarían el acuerdo de La Habana, pero auguraban lluvia de cambios. Inteligente recurso para sumar a todos los que querían paz, pero acumulaban odios históricos contra los desarmados actores políticos de las FARC.

Y si de pronósticos electorales se hablaba entonces, el termómetro variaba constantemente y quedaba en la memoria el fracaso del plebiscito de paz en octubre de 2016, donde las encuestas daban rotunda victoria al Sí y finalmente se impuso el No. No obstante, acechaba la popularidad del candidato de Uribe. Otros derechistas, como el exvicepresidente Germán Vargas Llera habían salido de la cola para puntear en las encuestas. Se vislumbraba, por un lado, una batalla ideológica: Duque-Petro o, en cambio, un pulseo derechista Duque-Vargas Llera.

El conservadurismo perdía terreno frente a fuerzas nuevas en el espectro político, una tendencia extendida a nivel global. Tal era así que, un candidato como Sergio Fajardo, de una coalición variopinta que incluía a la Alianza Verde, el Polo Democrático

Alternativo y el Movimiento Compromiso Ciudadano, lucía un nada despreciable tercer puesto en muchos estudios de intención de voto. Por lo que bien podía ser una sorpresa que rompiese el aparentemente sólido 40% que atesoraba el delantero, Duque.

Así de tambaleante se presentaba la contienda, que había tenido en los debates presidenciales otro tanto de estupor. Todavía estaba fresco en la memoria el escenario de confrontación que trascendió como «la guerra del aguacate» o «aguacate vs. petróleo» como resultado de una polémica entre Duque y Petro, el primero defensor de la exportación de petróleo y el segundo del cultivo del aguacate. Esa sería la lectura inicial, pero tras cada postura, quedaba sobre el tapate el modelo económico que cada quien defendería en un eventual mandato: el que priorizaba la extracción indiscriminada de recursos naturales, convertía a la industria en monoprodutora y dependiente de la renta petrolera; y otro que trabajaba en la diversificación y la potenciación del olvidado campo colombiano.

Pero desafortunadamente, las preocupaciones más serias de los colombianos no siempre marcaban la campaña de los candidatos en boleta. La disputa se diluía en temas traídos a colación —desde el encarcelamiento de un exguerrillero hasta la ruptura de las conversaciones en Quito— para distraer la atención mediática y favorecer a uno de los aspirantes en detrimento del contrario. Es así que se interpretaban y explotaban cada uno de los sucesos con el propósito de acentuar la polarización en un país que ya había sufrido demasiado las crudezas de la guerra. Y no olvidar que serían las primeras elecciones presidenciales con la mayor guerrilla del país en legalidad y sin armas, aunque sin candidato ni fuerza y sí sobrados estigmas, odios y críticas, por lo que seguía habiendo una línea imaginaria entre los que estaban con o contra las fuerzas insurgentes.

¿Por qué La Habana?

En mayo de 2018, La Habana acogía otro proceso de paz. O digamos que era el mismo —el mismo país que necesitaba la reconciliación entre todos sus hijos— con diferentes actores en conflicto. Los representantes de la última guerrilla colombiana en activo, el Ejército de Liberación Nacional, y el equipo designado por Juan Manuel Santos, se mudaban a la capital cubana para retomar un esfuerzo conciliatorio que había sido, comparado con el que le precedió, más lento, discontinuo, con pocos resultados concretos —sobresalía únicamente como hito la tregua bilateral de 101 días entre octubre de 2017 y enero de 2018— y que a todas luces tenía absolutamente en suspenso su final, más propenso a la ruptura que a un feliz desenlace. Gabino, el Primer comandante del ELN, ya había vaticinado que Cuba sería sede sólo que, contrario a su deseo de estancia rotativa, la isla se había convertido sí o sí en el único refugio posible para desenredar el hilo.

No tocaba entonces hablar de conclusiones, había obligatoriamente que esperar a ver qué ocurriría en las elecciones presidenciales pautadas para dentro de menos de tres semanas; quién sucedería a Santos y cómo asumiría lo que en materia de paz recibiese. Y aquí había dos vertientes: el nuevo jefe de estado continuaría o no con la implementación del acuerdo con las FARC y tendría que redondear o no un compromiso real con el ELN. Y ya era público que, de los siete aspirantes que quedaban en la disputa, después de que dos contendientes se retiraran de la carrera, al menos 3 de ellos, entre los que se encontraba el que más posibilidades de triunfo tenía —el presidenciable por el *uribista* Centro Democrático, Iván Duque— eran partidarios de abortar la mesa de conversaciones si la insurgencia no cum-

plía una serie de requerimientos, que en la práctica se traducían en obligarles a ceder más que el ejecutivo, cuando la experiencia acumulada en el proceso anterior, dictaba que las presiones unilaterales no procedían en un diálogo entre iguales que no se han podido vencer en el terreno de combate.

En medio de las especulaciones electorales, los *elenos* pisaban suelo habanero. La delegación se dejaba ver en fotos en sitios emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la Revolución, con algunos de los iconos guerrilleros que los inspiraran en su lucha, esos hombres que lograron un proyecto socialista que, en alguna medida, ellos habían anhelado, pero no habían conseguido por la vía de las armas.

¿Por qué La Habana? Primeramente, surgió la urgencia de buscar una sede alternativa a Quito después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retirara la condición de garante de su país al proceso y, en consecuencia, dejara de prestar sus buenos oficios como anfitrión, por una concatenación de enfrentamientos violentos, secuestros y muerte en la frontera colombo-ecuatoriana en la que estuvo involucrada el ELN mas no como el único responsable. A pesar de la postura intransigente de Moreno, el grupo guerrillero agradeció a Ecuador «su hospitalidad», pero insistió en «diferenciar su lucha revolucionaria del accionar de narcotraficantes en la frontera».

Restaban otros cinco países garantes de este diálogo, pero la mayoría con limitaciones para acoger la negociación. Brasil y Venezuela atravesaban situaciones de inestabilidad política, se avecinaban elecciones presidenciales y la oposición se mostraba reacia a este tipo de auspicio. Noruega tenía la desventaja de la lejanía, era poco factible logísticamente moverse con regularidad de Bogotá a Oslo. Quedaban Chile y Cuba. Y el primero acababa de estrenar presidente con una tendencia política que

no mostraba demasiada tolerancia con grupos armados que se definían marxistas y comunistas. Además de que Chile tiene una política migratoria estricta que impediría o dificultaría a muchos insurgentes con deudas con la justicia acceder a su territorio.

La Habana, en cambio, combinaba la experiencia diplomática de haber aupado un diálogo similar con resultado victorioso —el de las FARC con el gobierno colombiano— con la estabilidad política y su probada imparcialidad que evidenciaba a través de sus excelentes relaciones con el gobierno colombiano a la par que siempre había mostrado una plena identificación con las causas defendidas por la insurgencia. Asimismo, exhibía tranquilidad ciudadana y amplia seguridad para que ambas delegaciones se paseasen por sus calles. Y no era tampoco la primera vez que generaba este ambiente para cobijar el entendimiento con los del ELN, pues acogió ocho rondas de conversaciones similares entre diciembre de 2005 y agosto de 2007, en un esfuerzo pacificador anterior, aunque fallido.

No obstante, las partes habían dejado entrever que la capital cubana sería una estancia transitoria y que se retomaría la idea inicial de sedes itinerantes. Lo cierto es que el panorama descrito, que incluía además elementos del tipo subjetivo en los equipos negociadores hacia determinadas realidades de los estados involucrados en la mediación de paz, complejizaba bastante el hecho de moverse a otro escenario, por lo que habría que sopesar bien en el futuro cercano los pros y contras. Tampoco había mucho tiempo para grandes cambios en metodología y contexto, pues con el traspaso de mando, en agosto de ese año, podía augurarse el fin de la solución política y retomarse la confrontación.

El tema más urgente, que marcaría el intercambio y los ánimos de los primeros días de agenda en la isla, era la búsqueda de un nuevo cese bilateral del fuego y las hostilidades, calificado de «cese el fuego más robusto y verificable» al decir del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Rodrigo Rivera. Ello para propiciar un ambiente de sosiego durante los comicios presidenciales del 20 de mayo. Algunas voces comenzaban a proponer un gesto unilateral de la insurgencia, comparando procesos y poniendo el ejemplo exitoso de las múltiples treguas de las FARC, pero olvidaban que, en este sentido, los elenos habían sido mucho más tenaces al dejar claro que no habría decisión alguna que no resultase del consenso y cualquiera que fuese, debería ser recíproca.

Estaban sobre el tapete además los asuntos humanitarios asociados a la liberación de los insurgentes prisioneros y el cese de acciones ofensivas por parte del grupo rebelde. Pero más inaplazable resultaba comenzar, de una vez y por todas, la agenda pactada para el diálogo que, en quince meses de negociación pública, no había sido abordada en ninguno de sus puntos, empezando por la participación de la sociedad.

Comenzaba una nueva etapa de intensas discusiones, dobles discursos: el interno de la Mesa y el público en los medios colombianos e internacionales, obstáculos fabricados para entorpecer los avances, cruzada de acusaciones y muchísima ansiedad en un país que necesitaba zanjarse definitivamente el uso de la violencia para dirimir sus diferencias.

Violencia sistémica

En el lapso transcurrido entre la primera vuelta electoral en Colombia y el balotaje, cuando el país entero debía estar en una introspección profunda para analizar pros y contras de las dos fórmulas totalmente antagónicas —la izquierda de Gustavo Petro contra la ultraderecha de Iván Duque— que habían quedado sobre el tablero, la problemática de siempre nublabla los sentidos y entristecía el alma: todos los días podía leerse o escucharse un titular por allí escondido, a veces más visible cuando resultaba imposible ocultarlo, que tenía que ver con un líder comunitario muerto, casi siempre un ser humano humilde, defensor de los marginados, cuyas convicciones lo convirtieron en enemigo y en obstáculo de inescrupulosos con sed de sangre.

¿Por qué se producían estos picos de violencia que semejabán un exterminio planificado? El escenario electoral era sumamente propicio para esos sucesos. Y es que ese río revuelto de cuerpos sin vida permitía a algunos tomar como bandera política «el combate a la inseguridad», aunque después de lucir la banda presidencial las palabras se las llevara el viento.

Prácticamente la mayor «popularidad» de Álvaro Uribe durante sus mandatos presidenciales fue adjudicarse el mérito de haber reducido la delincuencia común de las grandes ciudades, en particular de Bogotá, y haber menguado considerablemente a las tropas insurgentes. Esa «mano dura» ha sido aplaudida desde entonces y le ha valido un capital político sustancioso del que se aprovechaba ahora el heredero y aspirante a Jefe de Estado, Iván Duque.

Los asesinatos sin resolver se les achacaban también a los malos manejos del acuerdo de paz. Siempre que aparecía una

víctima fatal, detrás estaba como presunto autor un «disidente» de algún grupo guerrillero, una forma de seguir deslegitimando a esos combatientes y satanizar el todo por una o varias individualidades. No importa que se tratase de casos puntuales, en la conciencia colectiva seguiría primando el concepto tantas veces repetido en los medios de que las guerrillas matan, son violentas. No tenía igual tratamiento el hecho de que fuesen grupos paramilitares los perpetradores.

La intención de gobierno era ocultar la existencia cada vez más viva de esta práctica, conveniente para hacer el trabajo sucio de políticos transformados en verdaderos parapólicos. Los números esta vez no tenían la última palabra en esta historia. Si se hacían las cuentas, 2017 había sido el año menos violento de las últimas cinco décadas. Pero no podía celebrarse tal disminución de muertes si continuaban los asesinatos del tipo quirúrgico, es decir, selectivos e intencionados.

Al fin y al cabo, se estaba dando un tipo de genocidio muy similar al cometido contra la Unión Patriótica, solo que más meticuloso, para enmascarar el propósito de erradicar a toda esa masa guerrillera, ahora desarmada, y a sus simpatizantes, gente de campo, defensora de minorías étnicas, que continuaba siendo adversaria del sistema político dominante y los grupos económicos que lo sostenían. La historia se repetía, pero intentaban contarla de otra manera.

Aquí entraba a jugar la contienda ya en su recta final. Es cierto que cambiar el curso de los acontecimientos no era solo cuestión de un presidente u otro. Pero los colombianos tenían ante sí dos propuestas distantes, una de ellas con la manifiesta intención de iniciar la transformación general de una sociedad demasiado acostumbrada a la violencia. Sin embargo, cobraba fuerza el odio inculcado a los votantes

contra Petro, construido sobre especulaciones y miedos de la derecha, aun y cuando estaba más que claro lo que traería esa derecha liderada por Duque y Uribe, sobre todo en materia de violencia sistémica.

El *ducado* con un Petro en el zapato

Colombia eligió nuevo presidente en junio de 2018, tras un balotaje en el que se cumplieron los pronósticos de las encuestadoras e Iván Duque se alzó con el puesto en la Casa de Nariño. En un contexto donde los medios tradicionales van perdiendo la hegemonía de las primicias, un video aficionado hecho con un móvil fue el que le dio la vuelta al mundo en el minuto en que se conocían los resultados: mostraba a Duque celebrando eufórico en familia y con los cercanos de su campaña. Poco después iba a una plaza pública en Bogotá para dirigirse a sus votantes y lanzar las primeras promesas post elección.

Recordemos las más importantes: no se harían trizas los acuerdos de paz con las FARC, pero habría correcciones; era de prever que la presencia de los exguerrilleros en el legislativo y el estatus jurídico-legal para los ahora desmovilizados representasen dos piedras en el zapato para los detractores de la paz. Sacar al partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común del Congreso y cárcel para sus máximas figuras eran dos de los «arreglos» que seguramente intentaría el mandatario electo. Duque habló además de dejar atrás la polarización — polarización que ayudó a engendrar y acentuar — y crear consensos, unir al país. En teoría, ideas brillantes, solo que albergaban más demagogia que certezas, si nos guiábamos por sus antecedentes; la duda y el escepticismo se ponían a la orden del día.

Duque, un político muy joven, de hecho, se convirtió entonces en el presidente más joven de la historia reciente colombiana. Más que el tema etario, pesaba su incursión empresarial sustanciosa, en Washington fundamentalmente, allí aprendió el modelo económico que pretendía gestionar ahora como cabeza

de Estado, pero sin experiencia aparejada en la actividad política. Más bien, para complementar su currículo, hizo un curso acelerado. Su hoja de vida en materia de servicio público resultó ser la más corta de todas las de los candidatos presidenciales.

Había sabido camuflarse y cambiar de acera de acuerdo con sus intereses. Lo «descubrió» el saliente mandatario Juan Manuel Santos, hizo carrera en su equipo de trabajo y cuando exprimió suficiente esta tajada, se vendió a un aparentemente mejor postor, y que resultó el ideal, pues Álvaro Uribe, su padre en estas lides, lo catapultó y llevó a lo más alto del país. Sentados uno al lado del otro, cual colegiales, en el Senado, fue tiempo suficiente para aprender mañas y trazar la estrategia perfecta que hiciera que Uribe volviese al poder a través de un elegido.

¿Títere o aliado? Ahí radicaba el verdadero reto. Duque había intentado hacer ver desde el inicio que no era Uribe, aunque perteneciesen al mismo partido ultraderechista Centro Democrático, por lo que, obviamente, eso lo hacía compartir visiones y ambiciones. Podía resultarle infiel al expresidente y distanciarse para adquirir personalidad propia, era a lo que aspiraban algunos votantes desesperados no tan amantes del pasado *uribista*, pero buena parte del capital político que lo hizo ganar el 17 de junio de 2018 con el 54% de los votos, se lo debía precisamente a los *uribistas* confesos. Y si quería repetir mandato en 2022, distanciarse no sería inteligente.

El contendiente perdedor, Gustavo Petro, quedó a menos de 2 000 000 de votos de la presidencia. Perdió, sí, pero alcanzó un respaldo impensable: 8 000 000 de votos; para que se tenga una idea, más cantidad de la que llevó a Santos a la presidencia en 2014. Jamás la izquierda se había visto con tal fuerza, por lo que ahora, y por primera vez, era la oposición más fortalecida

que bien podría —y debía— ponerle freno a un Duque eventualmente desatado.

El liderazgo de esta fuerza anti-Duque podría ejercerse entonces desde el mismísimo Senado, donde Petro tendría un asiento, al ser el contendiente que quedó en segundo lugar y que, de acuerdo con modificaciones en el legislativo, le otorgaban esa prerrogativa. En esa cámara, Centro Democrático obtuvo mayoría, y aunque los partidos de centro-izquierda alcanzaron pocos escaños, su sumatoria haría la diferencia con el fin de torpedear las iniciativas oficialistas. Sobre todo, cuando el país se abocaba a una probable concentración de poderes, pues el 20 de julio de 2018 tomaría posesión el nuevo Congreso y se elegiría a su presidente, puesto para el que estaba propuesto —y generalmente asume el senador más votado como era el caso— Álvaro Uribe. De ser así, el exmandatario sería, además del mentor e impulsor de Duque, la persona que el 7 de agosto de ese año le impusiese la banda presidencial.

Dicen que no vale hablar de lo que hubiera sido y no fue, pero en este caso, los colombianos tienen que sacar una lección: si Sergio Fajardo y Humberto de la Calle no hubiesen llamado al voto en blanco, remontar a Duque hubiese sido una posibilidad cierta. Hay momentos en la historia en que se impone hacer concesiones, más para hombres que no tenían pensado volver al ruedo político, como expresaron entonces Fajardo y De la Calle; decantarse por Petro no les hubiese traído mayor costo político, pero primaron intereses personales por encima del pensamiento colectivo y los intereses de país.

El miedo y la simplicidad de la política hecha a golpe de marketing dieron la victoria a Duque y se la arrebataron a Petro. La ingenuidad de buena parte del electorado les hizo otra vez, como durante la campaña para el plebiscito de paz de 2016,

crear consignas vacías. Votantes que no veían más allá de eslóganes, y acuñaban frases carentes de sentido como «otra Venezuela», «el fantasma del castrochavismo», «las expropiaciones de bienes». No fue así para los electores de la Colombia rural, la que ha sufrido de cerca los horrores de la guerra, la que concentra a las poblaciones afrodecendientes e indígenas que viven el asesinato selectivo de sus líderes, el Pacífico se tiñó prácticamente todo de rojo *petrista* en las dos vueltas electorales. Bogotá también le dio la espalda al vencedor.

El que conoce la historia colombiana sabe que, a pesar del triunfo de Duque, el cambio empezaba a sentirse, con pasos cortos pero firmes. Solo era cuestión de no flaquear en el intento por reconfigurar un país acostumbrado a la guerra, que necesitaba paz y democracia.

Un Congreso con nuevos legisladores y vieja política

Un Congreso más numeroso, con alianzas que daban mayoría al partido que se haría próximamente con el poder ejecutivo, con presencia de exguerrilleros, un incidente fuera de todo protocolo y al parecer sin su peje más gordo, Álvaro Uribe, así podríamos resumir la instalación oficial del nuevo órgano legislativo colombiano que asumió el 20 de julio de 2018 sus funciones por los próximos cuatro años –2018-2022– y que tendría desde entonces dos ejes fundamentales de acción: la implementación del acuerdo de paz con las FARC y la proyección económica del futuro inmediato del país.

Se trataba de un parlamento más numeroso porque, a los 102 escaños del Senado y los 166 de la Cámara de Representantes, se sumaron los diez curules –cinco en cada cámara– que se le otorgaron de facto a la desmovilizada guerrilla de las FARC como resultado del proceso de negociación con el gobierno del saliente mandatario Juan Manuel Santos. Los otros dos puestos adicionales correspondían a la fórmula presidencial perdedora en las elecciones recientes: Gustavo Petro, quien ahora volvía al Senado –antes había sido senador de 2006 a 2010 y representante a la Cámara por tres períodos– y Ángela María Robledo, quien ocuparía un asiento como representante en la instancia baja.

Pero, sin dudas, la atención estuvo centrada en el estreno de los ahora integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Exinsurgentes que abandonaron el uniforme de guerra y vistieron completa etiqueta para la ocasión; cambiaron sus fusiles por el arte complejo y a veces mañoso de la política, en un sistema que le era completamente desfavorable y en el que jugarían con las cartas perdedoras desde el inicio,

pues tenían voz mas no voto. El primer mal paso fue que los militantes del partido identificado con la rosa roja, pero bajo los mismos postulados ideológicos que defendían en su época de grupo armado, no cubrieron todos los curules asignados y solo se posicionaron ocho de los diez investidos, acentuando su ya franca desventaja.

Entre los que no se presentaron en el capitolio nacional estuvo Jesús Santrich, quien se encontraba preso y con orden de extradición a Estados Unidos por presunta vinculación al narcotráfico y con quien se había violado uno de los acuerdos de paz que indicaba que los exguerrilleros debían ser juzgados por la Jurisdicción Especial de Paz y no la justicia ordinaria. Santrich y varios de los suyos insistían en su inocencia y demandaban que se le permitiese hacer uso de su credencial de senador para que se cumpliese con lo estipulado. Tampoco ocupó su escaño Iván Márquez. El que fuera la cara visible de las FARC en el proceso de paz renunció a su puesto en solidaridad con Santrich y como señal de protesta ante las irregularidades e incumplimientos de lo pactado en La Habana, un texto que se desintegraba cada día con la intervención manipulada de la élite política. Contra Márquez también parecía fabricarse una causa judicial que lo apartara definitivamente del camino, a todas luces, la estrategia concebida para este momento de postconflicto. Si en el pasado la extinción de las fuerzas insurgentes que dejaron las armas fue por la vía de los asesinatos que se convirtieron en genocidio, ahora —sin dejar de practicar el exterminio selectivo— la guerra sucia se emprendía de manera más sigilosa a la altura de los mecanismos que se estaban ensayando con líderes de otros países de Latinoamérica.

Por tanto, la FARC estaban en minoría al interior del congreso, más si se tiene en cuenta que no alcanzaron ningún

otro curul por elección popular, quedaron muy por debajo del umbral necesario de votos. Han cargado con demasiados estigmas por más de 50 años de guerra y por los errores que han sido magnificados, a costa de esconderse la actitud del contrario, el Estado, que en su condición de oficialidad cometió atropellos iguales o mayores, pero no amplificadas por el silencio cómplice de los medios de comunicación. Es así que, a lo interno del hemiciclo, primaba el rechazo de la inmensa mayoría de los diputados hacia los novatos legisladores, otrora guerrilleros.

Y esa realidad se complejizaría cuando el 7 de agosto de ese año se consumara el cambio de mando. El presidente electo que asumiría entonces, Iván Duque, era partidario de una revisión o como había definido «hacer correcciones» al texto de paz y entre las espigas que hincaban a los de su partido en el poder y con mayoría simple en el Senado, Centro Democrático, estaba la presencia de los exrebeldes —considerados por el inminente nuevo ejecutivo como delincuentes, narcotraficantes y terroristas— de cuello y corbata en la misma sala donde se discuten y aprueban las legislaciones imprescindibles para el funcionamiento de la nación.

Duque, el heredero de Álvaro Uribe, cada día demostraba más que serviría como títere a pesar de que su padrino lo quisiera enmascarar. De hecho, Uribe sorprendió a todos y doblemente. Primero, al declinar la presidencia del Senado, un cargo que históricamente corresponde al senador más votado, en ese caso él, con más de 800 000 votos. Habló de «nuevos liderazgos» pero mostró contradicción cuando, por un lado, cedió el liderazgo de la cámara alta a Ernesto Macías, pero por otro hacía evidente que el nuevo gabinete de Duque estaría plagado de viejos rostros conocidos de las dos administraciones en las que el propio Uribe fungió como Jefe de Estado. En segundo lugar,

cuatro días después de tomar su puesto y hacer parte de la instauración del nuevo período legislativo, anunció en Twitter su renuncia tras ser llamado a indagatoria por la máxima instancia jurídica.

El equipo que se acomodaría en el Palacio de Nariño dos semanas después de la instalación del flamante legislativo, gobernaría bajo la sombra del fraude que la oposición había denunciado en las dos vueltas electorales, y particularmente en la primera ronda. Sombra de fraude que llegaba hasta las inmediaciones del ya funcional parlamento pues, de acuerdo con el ahora líder de las fuerzas opositoras, Gustavo Petro, «el Congreso que se instala en Colombia es producto de un fraude». El excandidato presidencial denunció que el Consejo Nacional Electoral le quitó tres escaños a la lista de los Decentes, a la Alianza Verde y al Partido Conservador para que el gobierno de Duque contara con el respaldo de colectividades afines en el Senado.

Así se ha caracterizado en los últimos 70 años la política colombiana, como un nicho de corruptela que en buen argot popular llaman «la mermelada». Es falso que el Congreso de la República sea «el templo de la democracia» que describió Santos en su último discurso a los parlamentarios, allí donde tantos funcionarios públicos contaban con múltiples causas pendientes, en su mayoría archivadas o no investigadas debidamente por esa manía de los políticos corruptos de untar con dólares a cuanto juez se interpusiese en su camino. Era precisamente Uribe el caso más sonado; el «popular» Uribe contaba con cerca de una treintena de procesos en la Corte Suprema y rondaba los 200 en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de hecho, era el nombre que más aparecía en los expedientes y asociado a todo tipo de imputaciones: para-

militarismo, interceptaciones ilegales de las comunicaciones, injuria, calumnia, falsos positivos, soborno, manipulación de testigos y un largo historial de atrocidades. Uno de estos procesos lo ponía ahora contra la pared, pero este hombre había sabido emerger siempre como corcho en el agua y resultaba sospechoso que reculara, al dejar el Senado, cuando todo apuntaba a que gobernaría nuevamente el país moviendo los hilos de su joven marioneta.

Fue entonces en ese templo nada democrático del Congreso Nacional donde el senador del Partido Alianza Verde, Antanas Mockus, un peso pesado dentro de las fuerzas de centro-izquierda y el segundo senador más votado, se bajó los pantalones el mismo día de la conformación del legislativo, para llamar la atención de un plenario indisciplinado e irrespetuoso que prefería conspirar en grupos en lugar de prestar atención al discurso del presidente saliente del Congreso, Efraín Cepeda. Los medios criticaron entonces que «Mockus lo volvió a hacer» —ya se había bajado los pantalones años atrás en otro escenario público con similares propósitos de denuncia— pero se quedaron en la epidermis del show que servía a su público y no entraron a analizar que, lo que se volvía a repetir una y otra vez sin posibilidades de cambio, era esa oscura manera de hacer política pensando en esos pocos acaudalados que posicionaron en el Congreso a los que suelen protagonizar los delitos de cuello blanco.

De un Nobel a un novel

Llegaba el 7 de agosto para Colombia en un 2018 electoral. Juan Manuel Santos abandonaba la Casa de Nariño después de ocho años consecutivos — dos períodos de gobierno — y daba la bienvenida protocolar a su sucesor y ganador en las urnas, después de dos vueltas, Iván Duque. El que se posicionaba era un presidente que combinaba dos tipos de juventudes, la de sus 42 años de edad y la de su inexperiencia en cuestiones de alta política. Sin embargo, llegaba de la mano del político más «popular» del país, su mentor Álvaro Uribe Vélez, y antes de esa alianza estratégica, había sido apadrinado por el mismísimo Santos para su entrada a las lides de gobierno.

Y es que, de no haberse producido la ruptura entre Santos y Uribe, al punto de escenificar la mayor polarización nunca vista en la nación colombiana, se habrían consolidado 16 años de *uribismo*, pues el mandatario saliente fue puesto allí por Uribe, tal y como sucedía ahora con Duque. El *santismo* y el mentado *uribismo* se convirtieron en dos corrientes adversas que enemistaron a todo un país, no así en la cúpula administrativa, donde los funcionarios se han turnado las carteras y demás puestos sin demasiadas lealtades ideológicas en una u otra administración. A tal punto, que el nuevo gabinete que asumía tenía rostros demasiado conocidos que, cuando más, habían cambiado tan solo de oficina. La novedad, cumpliendo con una promesa de campaña, había sido lograr la paridad de género en el ámbito ministerial y tener la primera mujer en el segundo puesto de importancia del Estado, la vicepresidencia que ostentaba, Marta Lucía Ramírez.

La investidura tuvo todo tipo de ingredientes: un clima desfavorable, una escenografía muy original, exclusiones políticas

que sentaron un mal precedente y, no lejos de su epicentro, marchas de protesta y desaprobación al hombre que recibía la banda tricolor. Otra vez la Plaza Bolívar, ese sitio obligado en Bogotá para los grandes acontecimientos y las grandes denuncias, sirvió de plató al traspaso de mando. La lluvia intermitente y una premonitoria ventolera retrasaron e incomodaron la ceremonia, quizás augurando los múltiples tropiezos que se avecinaban en la gestión en ciernes. Las flores —15 000 tallos en ilustración de un país que era el segundo exportador de flores en el mundo, después de Holanda— fueron el elemento pintoresco, el toque de gracia para un discurso armonioso e impecable que, de no responder a la retórica habitual en estos casos, hubiese sido un buen comienzo. Duque hizo galas de la moderación que quería venderle a sus seguidores, para desmarcarse del tono más agresivo de quien para muchos era su titiritero, Uribe.

Como quien juega al policía bueno y policía malo, esa estrategia típica de confusión en los interrogatorios, así sucedió igualmente con los roles asumidos en la gala por el Jefe de Estado investido y su *investidor*, el presidente del Senado, Ernesto Macías. Macías, también del partido Centro Democrático y por tanto uno de los correligionarios del ahora líder del ejecutivo, tuvo un discurso provocador, arremetió con dureza contra Santos y señaló uno por uno los errores que, a su juicio, cometió el gobierno anterior. Duque vino a suavizar el tono y mostrarse conciliador con todas las partes. «Somos Colombia», la frase donde invitó a todos a concentrarse para olvidar odios y construir un nuevo país. En lo que sí tuvo razón es que, en ese minuto, no había enemigos de la paz, si ellos, los opositores a la paz de Santos tomarían la reconciliación como bandera, aunque no sin antes advertir que habría «correctivos» para el

acuerdo con las FARC y «condicionamientos» para el diálogo con el ELN.

Eso dijo durante su carrera por la silla en Nariño y eso repitió una vez ataviado con el poder real. Pero, en un gesto contradictorio, su equipo de seguridad a cargo del evento impidió la entrada a uno de los congresistas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, específicamente al senador Carlos Antonio Lozada, y en solidaridad con éste, el resto de los legisladores de la FARC, se retiraron de la ceremonia. Y es que la presencia de exguerrilleros en el Congreso de la Nación, como resultado de los escaños pactados en el texto de La Habana, era una de las espinas atragantadas para Uribe y su pupilo. Muy probablemente, una de esas correcciones que había augurado el flamante presidente.

Los hombres de Timochenko no fueron los únicos en abandonar la Plaza Bolívar durante la toma de posesión, también lo hicieron otros parlamentarios que consideraron inapropiado y fuera de lugar las palabras del senador Macías, quien armó su oratoria a partir de un panegírico a Uribe y un rosario de críticas a Santos. La diatriba reproducía al pie de la letra la publicidad negativa contra el gobierno saliente que su partido había pagado para que, ese mismo día, se leyera, viera y escuchara en los principales medios de comunicación del país.

¿Qué dejaba el Premio Nobel de Paz a su sucesor, el novel presidente Duque? Ciertamente un país aún envuelto en el narcotráfico, con el cada día más creciente asesinato selectivo a líderes sociales y políticos, una economía débil en medio del potencial que representaba ser la cuarta economía de la región latinoamericana, abundantes casos de corrupción y relaciones abiertamente hostiles con la vecina Venezuela. Pero ¿acaso todos estos problemas eran exclusivamente generados por

la administración Santos o más bien se habían enquistado en Colombia por decisiones erradas administración tras administración?

Es fácil reprochar la gestión que se hereda y difícil cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Sería Duque quien erradicase el fenómeno de las drogas cuando planeaba seguir siendo el aliado natural de Estados Unidos, el primer consumidor de estupefacientes y quien por años ha dicho combatir el tráfico creando exactamente un efecto boomerang? ¿Sería Duque quien terminase la práctica de exterminio por vías violentas a todo aquel que pensase diferente al establecimiento cuando ni siquiera se atrevía a pararse en una misma sala con exinsurgentes? ¿Sería Duque quien pusiese fin a la «mermelada» de políticos corruptos cuando defendía a ultranza la inocencia de Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal? ¿Sería Duque quien mejorase las relaciones con su homólogo venezolano cuando acusaba a Maduro de dictador?

Desde su asunción, prefirió mostrarse enfocado en relanzar la economía, a fin de cuentas, le daría el respaldo de la clase media y alta y del sector privado tras anunciar que reduciría el papel del Estado en esos asuntos para lograr un 4% de crecimiento. Quizás sí hubiese conseguido índices macroeconómicos de los que presumir, a costa de que el campo colombiano siguiese postergado, allí donde hace 60 años comenzó la guerra que se intentaba finalizar a golpe de soluciones políticas a medias. Para entonces no podía adivinar, él ni nadie, que una pandemia echaría por el caño todo sueño o plan de despegue económico.

La paz estancada

El inconcluso proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional fue tema recurrente en la campaña presidencial de Iván Duque, pero una vez en pleno acomodo dentro de Nariño, el discurso y la acción tomaron caminos distintos. A pesar de venderle a los colombianos un plazo razonable de 30 días, una vez posicionado, para reevaluar lo que le había dejado su predecesor «adelantado» en esta materia, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar.

Duque no se tomó el menor trabajo de hojear el borrador logrado con el ELN. El plazo expiró y, muy por el contrario a lo de repensar el futuro de la negociación, dictaminó por decreto que el equipo negociador gubernamental al frente del diálogo con la guerrilla chica quedaba sin efecto. Les retiró sus facultades a todos los miembros y en la práctica dejó la mesa de conversaciones de La Habana absolutamente coja.

Es cierto que los mencionados plenipotenciarios desprovistos de tales investiduras, habían sido nombrados por Santos, eran «el equipo de Santos» y tenían un contrato finito en el tiempo para estos asuntos, vencido a inicios de agosto de 2018. Por lo que el presidente colombiano, sencillamente, hizo efectivo un mero trámite burocrático, que se volvía obvio si se tenía en cuenta que cada cual remodela su casa a su gusto cuando se muda, y contrata el servicio que mejor le convenga. Y Duque no iba a ser la excepción de dejar a sujetos con otra visión y otros encargos, que no los suyos, en cuanto a la búsqueda de la paz. Hasta ahí muy bien, mas se imponía designar de inmediato a un nuevo *team*, solo así hubiese sido consecuente con su expresa voluntad de impulsar la solución diplomática.

Si bien no asomó nombres nuevos, tampoco dijo que se acababa definitivamente el proceso. Optó por la solución más cómoda para él: dejar la pelota en la cancha contraria, y envenenar a la opinión pública. La culpa de que la mesa no prosiguiese recayó en los elenos, pues condicionó las pláticas a la liberación de todos los secuestrados en poder de la guerrilla.

No había nada nuevo bajo el sol, también Santos usó esa triquiñuela en el pasado. Y claro que los colombianos todos querían que se parase definitivamente la práctica del secuestro, que los grupos insurgentes usaron en su momento y algunos reconocieron fallida. Solo que había secuestrados, retenidos, y capturados en combate, conceptos que los políticos y los medios solían tergiversar a su antojo y conveniencia.

El ELN mantenía por entonces personas cautivas. Había civiles pero buena parte eran militares. Sabiendo de lo delicado del tema, manifestaron su voluntad de liberar a cuanta persona tuviesen en su poder, pero exigían garantías mínimas que el Estado les negaba, entre las fundamentales, el despeje —la retirada del ejército y la policía— de una zona para la entrega y el acompañamiento de terceros imparciales en la operación: la ONU y los países garantes. Aun sin tener las garantías de seguridad que demandaban, en el primer mes de la gestión de Duque, habían soltado al menos a siete personas. Una de ellas, una adolescente de 16 años que resultó pan caliente para la manipulación mediática. Cierto que se trataba de una menor de edad, pero estuvo cautiva menos de una semana y los insurgentes afirmaron que era usada como informante por las Fuerzas Militares pues habían comprobado que mantenía relaciones sentimentales con un soldado. Una historia que nadie contaba completa y que evidenciaba, por las claras, que el reclutamiento de niños no era privativo de los grupos guerrilleros.

Ningún gesto del ELN sirvió para nada a los ojos del *ducado*. Al ver la inacción del ejecutivo y el estancamiento en el que estaba sometido el proceso, la Comisión de Paz del congreso colombiano envió una carta al presidente Duque pidiéndole permiso para que autorizase una reunión con la delegación negociadora en La Habana; pretendían explorar las posibilidades de reactivación del diálogo al que el Jefe de Estado parecía no darle demasiada importancia.

Duque había optado por un discurso pacificador de cara a la comunidad internacional: le contaba a todo el mundo que la paz era lo más grande y que su administración estaba de a lleno en ella, pero en la concreta, optaba por condicionar el reinicio del proceso con los argumentos de siempre y prefería pasar la bola al contrario, para que la ciudadanía volviese a creer que seguían siendo los del ELN los culpables, intransigentes y únicos obstinados en la lucha armada.

No designaba equipo nuevo para negociar, pero sí lanzaba lluvia de cuestionamientos hacia Cuba —cuya labor como garante había sido reconocida por todos como impecable— por la presencia de jefes guerrilleros ajenos a los negociadores. Se refería al número uno, el comandante Gabino, que estuvo por algunos períodos en La Habana, sin ser parte de los plenipotenciarios, pero con otras encomiendas. Al criticar la presencia de Gabino en territorio cubano, el presidente colombiano cometía un error que en su momento fue calificado de «estúpido» en los medios colombianos, al «manejar con las patas las relaciones internacionales y en particular con isla», pues la entrada y salida de Cuba de toda persona relacionada con el proceso colombiano se hizo siempre bajo estrictos protocolos y con anuencias de las partes en cuestión.

Tuvo que romperse definitivamente el diálogo poco después, tras un atentado imprudente del Estado Mayor del ELN, para que saliera a la luz pública la información que pondría en evidencia al mismísimo Duque. Tanto negó públicamente cualquier acercamiento con su adversario mientras que en secreto establecía contactos, a través de hombres dedicados a ese empeño, sin ser oficialmente designados para tal misión. El jefe negociador guerrillero, Pablo Beltrán, dijo tiempo después que le pusieron al teléfono al mismísimo Miguel Ceballos, el Alto Comisionado de Paz, quien le prometió reuniones discretas con algunos otros enviados de su oficina en Bogotá para reencauzar las pláticas. Eso sí, desconociendo en todo momento lo ya escrito y acordado porque, como cacareaba Duque a los cuatro vientos, «eso no vale, porque yo no lo firmé».

En la práctica, jamás se reactivaron los ciclos de conversaciones ni en La Habana ni en ningún otro sitio. Los negociadores elenos quedaron estancados en la isla, los papeles se los llevó el viento, mientras en Colombia la guerra reverdecía como en sus peores momentos. La paz quedaba a medias.

Los «conejos» del Acuerdo de Paz

Dos meses después de no presentarse a la sesión de instalación formal del nuevo congreso colombiano y entrar en paradero desconocido, apareció Iván Márquez. Quien fuera uno de los dos rostros más mediáticos de la paz colombiana, el jefe negociador de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, dio noticias sobre su persona junto a otro desaparecido, el ex insurgente Óscar Montero, más conocido por su nombre de guerra, *El Paisa*.

Aunque no dejó saber con exactitud la localización de ambos —y pudiera haber habido un tercero con ellos pero sin confirmar en ese minuto todavía, Henry Castellanos, alias Romaña— sobre la que mucho se había especulado, incluyendo voces que lo ubicaban en Venezuela, otras en la espesa selva colombiana donde combatieron por más de medio siglo y que conocían al dedillo, lo cierto es que haber dado señales echaba por tierra en ese momento todas las teorías de que habían traicionado su compromiso con la paz, de que se habían pasado a las filas de la disidencia o que simplemente huían de sus deudas con la justicia. Este último continuaba siendo el punto más polémico por la presunta implicación en asuntos de tráfico de estupefacientes que refiririera el diario estadounidense *The New York Times*, a partir de declaraciones de un sobrino de Márquez apresado en Estados Unidos, a quien el senador colombiano Roy Barreras tildó de delincuente común que jamás participó en la búsqueda de la paz y que debía ser juzgado por la justicia ordinaria sin atizar el fuego contra el proceso de reconciliación.

Se supo de ellos —de Iván y Óscar— por una carta fechada el 22 de septiembre de 2018, firmada de su puño y letra, que enviaron a la Comisión de Paz del Senado y en la cual afir-

maban que el Acuerdo de La Habana había sido traicionado. Explicaron uno por uno los aspectos que consideraban fallidos, deformados al punto de calificar el resultado de «horroroso Frankenstein». Márquez y el Paisa se convirtieron así en la clara disidencia de la fuerza política que surgió de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No aquella que jamás decidió sumarse a la desmovilización y tránsito a la vida civil para seguir haciendo de la guerra y su conexo más cercano: el narcotráfico, un modo de vida; sino a ese grupo de decepcionados con la paz, la paz que había sufrido una metamorfosis más que kafkiana del papel a la implementación práctica.

A pesar de rumores sobre una eventual expulsión de las filas del partido de la rosa roja, la organización no había declarado todavía una ruptura oficial con sus miembros desaparecidos y, en especial, con su figura más votada en el congreso constitutivo, el brazo derecho de Timochenko durante las distintas fases exploratoria, secreta y pública de la salida diplomática a la confrontación armada en Colombia, que inmediatamente después de este incidente pasaría a ser su adversario, y dejaría al descubierto contradicciones y desavenencias históricas entre ambos.

¿Qué señalaban como «fallas estructurales» los escindidos en medio de su indignación? Primero, denunciaban que, tras la entrega de las armas, hubo «conejo», en la jerga colombiana, eso es hacer trampa, cometer perfidia. Acusaban al Congreso de la República y a la Fiscalía de fabricar mentiras para encarcelar a los guerrilleros desarmados y describían lo que llamaban «tres actos de insensatez» que destrozaron lo negociado por 4 años en la capital cubana. Esos tres actos eran: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento a los aspectos esenciales del Acuerdo.

Como ejemplo del primero de estos elementos ponían la detención de un compañero de causa, plenipotenciario en La Habana por demás, Jesús Santrich, elegido como senador para la presente legislatura al igual que el mismísimo Márquez, pero entonces tras las rejas y con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, hacía menos de una semana que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, había dicho que, en sus miles de expedientes, no tenía pruebas de audio ni de video que sustentasen el caso contra Santrich que, en todo caso, las supuestas evidencias, estaban en poder de la justicia norteamericana.

De las modificaciones a las más de 300 páginas suscritas en primera instancia por Iván Márquez y Humberto de la Calle, antes que por Santos y Timochenko, el número dos de las FARC dijo que «personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser negociadores de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor».

Hasta ese minuto, dos años después de pactada la versión inicial del Acuerdo, a poco de cumplirse igual lapso para el texto definitivo, no se había respetado el 100% de la Ley de Amnistía — seguía habiendo no pocos guerrilleros en prisión sin esperanzas de ver la luz del día en libertad —, no había comenzado la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos parecía cuento de hadas y las transformaciones al sistema judicial, electoral y político estaban congeladas. Para ir a lo más elemental, ni siquiera se había garantizado a la gruesa masa de alrededor de 13 000 hombres que integraban las FARC su reincorporación a la vida económica y social del país. Las deserciones habían tenido que ver fundamentalmente con el fiasco del gobierno en este aspecto. A lo que se sumaba la matanza de exintegrantes de la guerrilla o de sus familiares más cercanos a la par que el

asesinato de los líderes sociales. Una realidad que seguiría repitiéndose hasta tanto el Estado y sus principales figuras, en ese caso el propio presidente Iván Duque, no asumiesen la sistematicidad y selectividad de tales crímenes y dejaran de verlo como hechos aislados, inconexos, perpetrados por bandas criminales.

Era la Jurisdicción Especial de Paz, a juicio de Iván Márquez, el punto más desfigurado. Y hay que recordar que fue el que más tiempo de discusión llevó a las partes en La Habana, donde más encontronazos hubo, el que costó más desvelo y desasosiego, aun con la ayuda de expertos en la materia colombianos y europeos. El entramado legal que devino de la JEP definida en la letra del acuerdo dejó por fuera a una parte de los implicados en el conflicto y se ensañó con los insurgentes como los únicos culpables, al punto de buscar subterfugios para someterlos a las penas máximas, desproveerlos de sus facultades políticas, incluso, ponerlos en la mira de la extradición.

Ciertamente se pasó por alto que ese acuerdo de paz, vendido al mundo como histórico y merecedor de un Nobel — para las dos partes negociadoras, aunque solo se favoreció Santos por ser la voz oficial, además de que jamás reconocerían a un actor hasta entonces ilegal y tildado de terrorista — estaba radicado en Naciones Unidas con rango de Documento Oficial, por lo cual no podía ser alterado en su contenido y forma por los sucesivos gobiernos. Pero a esa altura, parecía cosa del pasado y el futuro deparaba muchas más frustraciones.

Los cien días del *ducado* colombiano

La segunda quincena de noviembre de 2018 trajo para Colombia fechas importantes que obligaban a pasarle factura a lo hecho y por hacer: los cien días del gobierno de Iván Duque con apenas una semana de diferencia de la conmemoración, el día 24, del segundo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre su antecesor, Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla FARC. Ante ambos acontecimientos, el balance preliminar resultaba negativo y desesperanzador para la nación pues la imagen de Duque iba en picada, su mentor Álvaro Uribe tampoco gozaba de su mejor momento y la implementación de lo pactado en La Habana para lograr la reconstrucción y sanación del país había quedado relegada a acciones simbólicas que distaban de lo escrito en papel.

Al joven presidente le había dado por viajar en su primera etapa de funciones, y su discurso ante la comunidad internacional seguía siendo oportunista y falto de transparencia cuando de la paz opinaba. Más allá de los compromisos políticos multilaterales como fue el caso de su estreno en Naciones Unidas, puso el foco de atención en Europa y hasta al mismísimo Papa Francisco le hizo la visita. Su agenda estuvo, claro está, mucho más centrada en lo económico, pues si en algo coincidía el actual Jefe de Estado con su predecesor, era en situar a Colombia en las grandes ligas, aunque fuese un país en vías de desarrollo con sobradas deudas sociales internas, la mayoría resultante de décadas continuadas de conflicto armado.

En el ámbito regional, había tenido una postura coherente con su proyección pre investidura. Coqueteo y fidelidad a toda prueba hacia el mandatario estadounidense, lo cual vale resaltar que había sido amor correspondido de parte de Donald Trump

hacia su pupilo sudamericano. Para ello, había tenido que mostrarse bien crítico de su vecino venezolano y adoptar otras decisiones radicales que mostrasen ruptura con Latinoamérica y cercanía con el norte, tal fue el caso de la salida de Bogotá de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, y la amenaza de romper relaciones diplomáticas con Caracas en enero de 2019, después de haber liderado la campaña en el área para cerrarle el círculo a Nicolás Maduro, un intento de asfixia —tentativa de magnicidio mediante— del que el presidente venezolano salió ileso.

Pero el verdadero caos para Duque estaba en casa. Estudiantes por casi un mes en huelga y las víctimas de 60 años de guerra exigiendo una justicia que nunca llegaba. A ello se sumaba el asesinato de líderes sociales comunitarios, actores políticos de oposición y guerrilleros desmovilizados, un ejercicio de exterminio cotidiano. Si no contaba con más visibilidad en los medios de comunicación, era precisamente porque se silenciaban muchos de los crímenes y, en el mejor de los casos, se intentaban desligar de la política y se presentaban como hechos aislados de violencia cuando a todas luces se trataba de una práctica sistemática.

Sin embargo, en el último año y más estrechamente, desde que Duque asumió su puesto en la Casa de Nariño, la cifra de activistas muertos se disparó de tal modo, que el presidente se vio obligado a adoptar un Plan de Acción Oportuna (PAO) porque dijo no querer impunidad en esos hechos, quería «trabajar en la prevención de manera acertada». Involucró en ese empeño a la Fiscalía, la Fuerza Pública, la contraloría y al Ministerio Público. Lo cierto es que de poco serviría tal estrategia que auguraba medidas «ejemplarizantes» para los autores materiales e intelectuales, si no se solucionaban las causas estructurales

de tal escalada violenta, que partían, en primerísimo lugar, de cumplir con el acuerdo de paz. La matanza a cuentagotas que se vivía —y vive aún hoy— tenía raíces comunes con los orígenes del conflicto armado en Colombia; cumplir con los seis acuerdos parciales de los seis puntos de la agenda negociada con las FARC y sus especificidades, era atender los reclamos de las poblaciones de Nariño, el Cauca o el Catatumbo y revertir la situación de marginación y violencia.

Del resto de sus promesas electorales, también se había podido palpar un «donde dije digo, dije Diego». Tales incongruencias las había presentado como desacuerdos entre él y su gabinete, cuando realmente respaldaba cada una de las iniciativas que en ese mismo minuto le valían una impopularidad creciente. Por citar uno de los ejemplos más polémicos del momento, de aquella reforma fiscal, anunciada en vallas publicitarias para bajar los impuestos, estaba sobre el tapete un proyecto de Ley de Financiamiento que perseguía justamente lo contrario, incrementar el IVA —impuesto sobre el valor agregado— a la canasta familiar. Y sobre su oferta líder, acabar con la corrupción, que era realmente la preocupación mayor de los colombianos, pues nada había logrado en firme; ni siquiera se aprobó la consulta anticorrupción y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se encontraba implicado en la madre de los escándalos de corrupción que ha revuelto a toda América Latina: Odebrecht.

En el Congreso, la fragmentación política seguía dando al traste con la aprobación de las leyes necesarias para la transformación que clamaba la ciudadanía. Si bien los exinsurgentes ocupaban sus escaños e intentaban impulsar una agenda propia, su capacidad de maniobra era cada vez más reducida y no acompañaba tal empeño que, por otro, lado se fabricasen

zancadillas para sacar del juego a las voces más radicales del ahora partido FARC, involucrándolas con delitos asociados al narcotráfico como eran los casos de Jesús Santrich, preso y en peligro de extradición hacia Estados Unidos, y uno de los rostros más conocidos de la paz, Iván Márquez, devenido el mayor decepcionado del proceso, obligado a exiliarse en paradero desconocido.

Del otro esfuerzo de diálogo, el que verdaderamente quedó en manos de Iván Duque para su desenlace, ni un solo paso en firme, solo condicionamientos al Ejército de Liberación Nacional que conllevaban a inmovilidad.

Así había transcurrido el lapso que suele ser un medidor importante en toda administración para definir cuánto de demagogia hubo en el candidato para llegar a presidente y cómo pinta el escenario futuro. En tiempos de nacionalismos extremos, de egoísmos y excentricidades, Duque había demostrado poco con qué seducir a sus votantes, se había quedado en una línea gris, en la que ni siquiera había hecho gala de la moderación que alguna vez le endilgaron para distanciarlo del líder recalcitrante de su partido Centro Democrático que lo llevara al poder.

Atentado a la paz

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, a fines de 2016, no había habido un revuelo mayor, tanto a lo interno del país como a nivel regional e internacional, en torno al más reciente proceso de pacificación. A inicios de 2019, las circunstancias se tornaron bastante distintas, lejos de agitarse banderas de paz y pregonarse optimismo, se retrocedía a los momentos más oscuros e inciertos de la confrontación armada tras un atentado con coche bomba que vino como anillo al dedo a un nuevo presidente nada partidario del diálogo político para rematar un esfuerzo pendiente de negociación diplomática con la última guerrilla en activo: el Ejército de Liberación Nacional.

El hecho en sí era de altísima complejidad, por lo que representaba el retorno a la violencia más cruel en plena capital de la nación, el derramamiento de sangre, en este caso de jóvenes cadetes, la magnitud del ataque: 22 personas muertas y alrededor de ocho decenas de heridos, en fin, conmoción, luto, repudio, indignación, bajo la máxima de que toda vida es sagrada y que la guerra es abominable. A todo ello se sumaba la crisis diplomática regional que tal situación había creado, desde el momento en que los confesos autores del estallido en la Escuela de Policía General Santander estaban en medio de un proceso de paz que, aunque estancado desde agosto de 2017 por el cambio de gobierno, involucraba al menos a cinco Estados en condición de garantes —Ecuador que era el sexto se retiró por otro incidente violento en su frontera con Colombia— y particularmente a Cuba, como sede, y en consecuencia refugio de los

designados para negociar, en ese caso, diez miembros del ELN, algunos de ellos pertenecientes al Comando Central.

Se desató la polémica y la polarización se enquistó cada vez más en la sociedad colombiana ya bastante harta de la guerra y sus consecuencias devastadoras. Costaba no dejarse llevar por el discurso dominante, el cual había entronizado la matriz de que el siniestro obligaba a poner fin automáticamente a la negociación política y encarcelar de inmediato a los culpables.

Pero esa resultaba ser una conclusión apresurada, y en total concordancia con los intereses del ejecutivo que lideraba los destinos de Colombia, sin tener en cuenta una visión general del fenómeno en todas sus aristas. Primeramente, a Iván Duque, el mandatario que ahora encaraba el rol de justiciero y reivindicador de las víctimas del atentado, jamás le interesó sentarse a la Mesa con sus contrarios para continuar una agenda previamente establecida con la administración predecesora, y evitar que escenarios de terror como el vivido el 17 de enero de ese año se repitiesen. Desde que asumió la banda presidencial y se instaló en la Casa de Nariño, sus acciones fueron contrarias a las aspiraciones de paz: disolvió la delegación negociadora heredada de Santos y no nombró un nuevo equipo; dijo que evaluaría lo avanzado y pactado hasta el momento con los del ELN y jamás se vieron los resultados de tal estudio; condicionó desde el inicio el reimpulso de las pláticas a pesar de que la contraparte dio muestras de ceder particularmente en el aspecto más espinoso: el secuestro, pues se dieron varias liberaciones unilaterales por parte de la insurgencia a cambio de cero gesto gubernamental; desoyó todos los pedidos de reanudar el proceso que provenían de la ciudadanía, en su lugar, arreció la ofensiva militar para retomar la doctrina de su mentor, Álvaro Uribe, de plomo con los guerrilleros, aun y cuando las más de

seis décadas de conflicto armado evidenciaron que era necesaria una solución negociada porque ninguno de los adversarios había sido capaz de vencerse en el terreno de combate.

Ese fue el preámbulo del momento de crisis tras el atentado, sin entrar en detalles en la desarticulación que sufrió el acuerdo suscrito con las FARC, cambios prometidos por Duque que se convirtieron en lo que negó en campaña: «hacer trizas» lo firmado con el hoy partido político de la rosa roja. Se sumaba la otra parte de la historia no contada, o al menos, poco divulgada, de manera que parcializarse resultaba muy fácil. Había que partir de que los procesos con las FARC y el ELN se dieron ambos bajo los términos de no detener las acciones bélicas. Es decir, en La Habana o Quito, donde se instalaron los encuentros con una y otra guerrilla, se discutía sobre paz y reconciliación, al tiempo que en la selva, poblados y ciudades colombianas continuaban las maniobras ofensivas y defensivas. Además, en Colombia no se vivía una conflagración convencional, sino una guerra de guerrillas; atrás quedaron las escenas peliculeras de ejércitos enfrentados hasta que uno dominase al otro, bien sea por la superioridad numérica o la fuerza de sus medios de combate. La práctica irregular de más de 60 años había sido el sabotaje, los ataques sorpresivos, el espionaje y la infiltración en las tropas enemigas como tácticas fundamentales, teniendo en cuenta la asimetría de los bandos. Por tanto, toda agresión que comprendiese objetivos militares y bajas enemigas era perfectamente reglamentaria en medio de lo injustificable que es la guerra en toda su expresión y que se tornaba mucho más incomprensible en tiempos presentes aparentemente cada día más civilizatorios.

Entonces, sucedía la embestida a la escuela de cadetes de Bogotá, la sociedad colombiana y mundial se paralizaba, no sin

razón, olvidando por un minuto que los coches bomba son el pan diario de todas aquellas naciones en guerra y Colombia no era la excepción en tanto no finalizase la suya, que no terminó con el acto protocolario en el Teatro Colón, allí donde Santos y Timochenko estamparon sus respectivas firmas de paz con un «balígrafo», ni con la ceremonia de entrega a Naciones Unidas de poco más de 7 000 fusiles de los desarmados exguerrilleros de las FARC. La beligerancia seguía mientras la paz no se completase con otro acto de concordia, esta vez con el actor armado que todavía quedaba en el terreno.

Es así que, a la acometida en la escuela policial, le precedió una ofensiva de las Fuerzas Militares contra los campamentos insurgentes aun y cuando el ELN había decretado una tregua temporal por navidad y fin de año. En medio de la distensión, el ejército, bajo órdenes de Duque, menospreció tal gesto, tampoco obligado a respetarlo al ser una decisión unilateral de la guerrilla, y aprovechó para avanzar en sus posiciones y someter a los combatientes *elenos*; bombardeó un campamento insurgente el 25 de diciembre de 2018, «lanzando más de 12 bombas de centenas de libras de explosivos cada una, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento», de acuerdo con lo descrito en el comunicado en el que el ELN reconoció la autoría del atentado en Bogotá. «Es entonces muy desproporcionado que, mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa», remataba el texto tras dar a conocer los hechos precedentes. Para algunos sonaba a justificación injustificable tal reivindicación, sobre todo cuando se tardaron 4 días en asumir su participación en el estallido con carro bomba.

A pesar de todo, era difícil que un bogotano asumiese como legítima esta acción de la guerrilla, cuando alteraba su tran-

quilidad y sembraba pánico, cuando era calificada a todos los niveles, incluyendo la comunidad internacional, como un acto terrorista, cuando los fallecidos y lesionados promediaban los 20 años, cuando eran estudiantes, como se dice, con una vida entera por delante. Surgían muchas preguntas: ¿tiene una academia de policía carácter militar? ¿Puede escudarse la acción en el marco del Derecho Internacional Humanitario? ¿Cuán ilícita puede ser la operación si en el caso colombiano, la policía y el ejército han sido parte activa del conflicto armado y para los atacantes se convierte esta institución en objetivo de guerra toda vez que allí «reciben instrucción y entrenamiento oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social»?

La disyuntiva mayor era qué hacer después de la ruptura oficial del diálogo por parte del gobierno de Duque y la reactivación de las órdenes de captura a los negociadores del ELN. He aquí otro asunto discutible. Se ponía el blanco en los plenipotenciarios del equipo guerrillero que estaban en la isla caribeña y que, en teoría, debían estar alejados de toda planificación de acción de guerra, a petición del Estado cubano en primera instancia. Parecía que el presidente colombiano aprovechaba el contexto para arremeter y poner en posición embarazosa a un país con el que tenía diferencias ideológicas profundas y lejanía de intereses en la región, acentuadas precisamente por la cercanía de La Habana con Caracas, un enemigo declarado de Bogotá.

Trataba de obviarse por parte del ejecutivo de Duque, la existencia de «unos protocolos» para en caso de ruptura. La discusión pasaba al plano jurídico de si eran vinculantes o no, si eran términos acordados que fuesen más allá de una adminis-

tración en particular, y debían ser asumidos como compromisos de Estado. Al decir de uno de sus firmantes, el exjefe negociador del ejecutivo de Santos con el ELN, Frank Pearl, dichos documentos se aplicaban «en cualquier caso y no condiciona cuál sea la razón del rompimiento». Naciones Unidas avalaba que era un pacto de Estado al estar rubricado por cinco países, además de la firma de las partes: Cuba, Noruega, Venezuela, Chile y Ecuador. A pesar de ser secreto, se había podido filtrar que el documento incluía el retorno de los miembros del ELN en un plazo de 15 días a su condición de clandestinidad en suelo colombiano con ciertas garantías para su seguridad provistas por la contraparte y con la participación de los países garantes. Hasta el momento, tanto Cuba como Noruega, dos de esas naciones involucradas como mediadoras del proceso, habían sido enfáticas en la necesidad de apegarse y respetar lo estipulado en los protocolos. Pero Duque y su tren ministerial, buena parte de los partidos políticos en Colombia y la rama legislativa y judicial desestimaban seguir una hoja de ruta diferente a la captura y entrega de los guerrilleros para que cumpliesen su condena en territorio colombiano, creando una crisis en el orden del derecho internacional y sentando un pésimo precedente para la resolución de conflictos a nivel global mediante negociaciones que involucrasen a terceros.

La controversia se extendía más allá cuando de muertes se trataba, todas dolorosas por igual pero no con la misma trascendencia: por un lado, la de los cadetes llenos de sueños que le apostaban a su futuro, y por otro, esas más silenciadas, la de los líderes sociales, activistas de derechos humanos, opositores políticos, familiares de insurgentes o exguerrilleros que a diario colmaban los titulares locales, víctimas de asesinatos que se querían vender como aislados pero que eran ya práctica

sistemática. Dificilmente podía aplicarse la separación de buenos y malos, culpables e inocentes cuando los errores y crímenes se entrecruzaban de acera. El ataque de aquel 17 de enero venía a convertirse entonces en una torpeza mucho mayor para el momento que atravesaba el país, que toda reflexión sobre su licitud. Había solo un asunto incuestionable: la única forma de parar la consecución de actos atroces era con el fin de la guerra y más cerca de tal propósito estaba una negociación política que la prosecución del conflicto.

El ELN seguiría en La Habana

El 2 de febrero de 2019 venció el plazo establecido en el protocolo firmado por las delegaciones negociadoras del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional el 5 de abril de 2016, en Caracas, para que, en caso de ruptura del proceso, los guerrilleros designados como plenipotenciarios en el diálogo de paz regresaran a Colombia. Lo que el documento previsto para tal ocasión estipulaba —antes había estado en estricta reserva— ahora era del dominio público. Vale reiterarlo: en los 15 días posteriores a la disolución de la mesa de conversaciones, el equipo del ELN debía abandonar la sede de las pláticas y volver a su zona de operaciones; además convenía que a los insurgentes debía garantizárseles un retorno seguro a su condición de clandestinidad por lo cual las órdenes de captura deberían continuar suspendidas por al menos 72 horas una vez en territorio nacional. Fueron detalles que algunos de los firmantes, tanto de un lado como de otro, fueron deslizado tras la coyuntura que provocó la paralización definitiva de un esfuerzo de paz ya sepultado desde antes por la administración del presidente Iván Duque.

¿Qué seguía ahora? A propósito del vencimiento de los términos del protocolo de retirada, una de las voces más autorizadas para explicar las opciones sobre la mesa era el jefe negociador del ELN, comandante Pablo Beltrán. Beltrán, seudónimo de combate para su nombre de cuna, Israel Ramírez Pineda, un sesentón en buena forma, guerrillero desde la juventud temprana, que abandonó estudios universitarios para irse al monte, pero que mostraba una preparación superior a la media insurgente. Allí donde antes había conversado largo y tendido con Gabino, y que también fuera sitio obligado para encuentros

informales con el equipo de la FARC, ahora servía de escenario a este diálogo con Beltrán para que diera su versión de los hechos y contrarrestase los argumentos de furia de Iván Duque y sus seguidores del lado colombiano.

El líder *eleno* contó que, en las dos semanas posteriores al anuncio del presidente Duque, debió trazarse el plan de retorno, pero no había habido avance ninguno en ese sentido porque la contraparte insistía en una opción única: que Cuba entregase a los diez negociadores del grupo insurgente para que fuesen procesados y encarcelados por el atentado con coche bomba en la escuela General Santander de Bogotá. Beltrán calificó de «muy belicista» la postura del mandatario colombiano y agregó que la comunidad internacional que acompañaba el proceso, y en particular los países garantes, le habían pedido a Duque que reconsiderase su actitud.

La delegación del ELN fue más allá al exponerle al actual gobierno que «si no le gustan los protocolos que nosotros firmamos con Santos, porque es que a este gobierno nada que venga del anterior le sirve, pues entonces que proponga otra alternativa pero que dé garantías como las contemplan estos protocolos de retorno».

Desde que se instaló el nuevo ejecutivo en la Casa de Nariño hacía entonces seis meses, el ELN le había solicitado que «vaya a la Mesa» bien sea con las objeciones o las proposiciones que considerase pertinentes, pero ese reclamo había chocado del otro lado con oídos sordos. Ya que a Iván Duque no le satisfacía lo establecido en blanco y negro con su antecesor —que era a la postre un documento de Estado por el aval internacional que había tenido este proceso de paz, este texto en particular había sido firmado por 5 países— los guerrilleros estaban dispuestos a renegociar: «Nosotros inclusive pensamos que se pactara un

retorno en las condiciones que se logre negociar con el gobierno de Duque, un retorno de una parte de la delegación del ELN a los campamentos, a consultas, que las necesitamos, y estaríamos considerando que, por ejemplo, otra parte de la delegación continuara acá (en La Habana) impulsando toda la reapertura de la mesa, impulsando la continuidad del proceso de paz».

A pesar de la negativa manifiesta del presidente Duque de proseguir el diálogo, la guerrilla confirmó que había habido contactos bilaterales. Mientras los canales públicos evidenciaban discrepancias y lejanías «para mantener contento al núcleo duro de la coalición del gobierno», en un nivel más discreto y confidencial se manejó un acercamiento, hubo varios contactos telefónicos y se manejó una cita secreta en Cuba. De hecho, de una de esas reuniones «por debajo de la mesa» salió la petición por parte de los enviados de Duque –durante la transición, antes del cambio de Jefe de Estado– que no firmaran un cese bilateral al fuego con el gobierno de Santos. Sin embargo, el ELN consideró que esa fue solo una parte del problema en aquella recta final del diálogo que tuvo lugar entre mayo y agosto de 2018. La otra fue que la delegación negociadora de Santos traicionó a quien la mandataba, se plegó al nuevo ejecutivo electo y «amaneció de buenas a primeras siendo seguidora del presidente Uribe y por eso no prosperaron las negociaciones en esas últimas semanas porque todos se volvieron seguidores de Uribe».

El ELN reconoció que el proceso de paz atravesaba en ese minuto una crisis profunda, pero no se la atribuyó al ataque perpetrado en la academia policial, que por demás catalogó como «acción de respuesta» y «ataque en la retaguardia», sino que responsabilizó al sucesor de Santos de tal situación por el incumplimiento de los acuerdos con las FARC y la inacción

gubernamental ante el creciente asesinato de líderes sociales, así como por la no reactivación de la mesa de conversaciones. «Nos mandó a decir y nos lo dijo abiertamente: no hay negociaciones por ahora y lo que vamos a hacerle es una ofensiva militar». Beltrán apuntó que los gestos de la guerrilla para evidenciar su voluntad de paz no han sido ni reciprocados ni valorados por su contraparte. «Ofrecimos en diciembre (de 2018) un cese el fuego unilateral y fuimos bombardeados en varias partes».

Ante la disyuntiva de quién ordenó el siniestro del 17 de enero de 2019 que desencadenó la situación de ruptura de las conversaciones, el equipo que permanecía en La Habana insistió en que, a pesar de la unidad de toda la estructura guerrillera a partir de su dirección nacional, ellos habían cumplido expresamente con la petición del gobierno cubano de «centrarse en las tareas de paz», por tanto, no eran informados ni tenían jurisdicción ni mando en las decisiones de carácter militar en el terreno de combate.

Numerosas fueron las críticas recibidas por la acción que acabó con la vida de 22 jóvenes cadetes y lesionó a cerca de 80. Muchos la consideraron «no oportuna» y que le daba argumentos a la extrema derecha para hacer trizas el esfuerzo conciliatorio. Para el jefe negociador, todo derramamiento de sangre resultaba igual de doloroso y la única salida que avizoraba era la solución política al conflicto armado.

Sin embargo, la salida diplomática estaba ahora más lejana que nunca tras la orden de suspensión dada por Duque, un mandatario que mucho antes había establecido como condición, para la reanudación de las pláticas, la liberación de todos los secuestrados y el fin de las acciones violentas. En cambio, para la insurgencia no había temas vedados: «Nosotros no tenemos rayas rojas. Todo lo que Duque y Uribe quieran colocar (en la agenda)

se lo aceptamos». Ya había habido gestos de la guerrilla en un pasado reciente en torno a esos condicionamientos. Se habían venido dando varias liberaciones unilaterales y durante la tregua bilateral de 101 días pactada con Santos, el único acuerdo en firme logrado durante todo el proceso, no se produjo ninguna retención ni ataque a ningún sitio de la infraestructura petrolera. Sobre otros gestos futuros, Beltrán creyó muy difícil convencer al gobierno en el poder, dirigido directamente por el uribismo. «Seducir a Uribe es difícil, porque usted le puede ofrecer lo que sea y siempre va a considerar que es poco».

Mientras la situación no variase, la delegación *elena* aseguró que continuaría en La Habana pues al decir de Pablo Beltrán «los países garantes y acompañantes respaldan la estadía acá mientras que se logran unas garantías». La permanencia de este grupo en la capital cubana ya había provocado tensiones diplomáticas a nivel regional y suponía un gran desafío para la isla que avizoraba ya la probabilidad de ser incluida nuevamente las listas de países relacionados con el terrorismo, concebidas unilateral y prepotentemente por Estados Unidos, en todas sus variantes más o menos condenatorias.

El humanitarismo belicoso de Trump y Duque

«Venezuela tiene una dura situación humanitaria», una frase que a golpe de eco hacía de ese país el agujero negro mayor del planeta Tierra para todo aquel que creyese ciegamente en esas informaciones virales que pretendían erigirse como verdades absolutas. Sin siquiera corroborar *in situ* la tal gravedad por la que, según ciertas voces, atravesaba esa nación sudamericana, era evidente la mala intención que se cernía detrás de afirmaciones tan ligeras cuando, cualquier persona medianamente informada, sabría con certeza que difícilmente podía acercarse esa crisis de supuestamente grandes proporciones a la hambruna de millones de niños en Yemen o al éxodo sirio por la guerra o al suplicio de las familias de las niñas secuestradas en varios territorios africanos por extremistas o al caos callejero en Haití de ciudadanos que pedían la renuncia de su presidente, en un país con una deuda social impagable. Y pudiéramos incluso poner ejemplos de verdadera crisis en pleno corazón de la civilizada Europa, allí donde hay campos de refugiados, donde los acogidos son tratados como mercancía no rentable, una especie de merma humana.

Pero a los que sembraban la matriz de «Venezuela al borde del precipicio» no se les ocurría hacer semejantes comparaciones, nada conveniente a sus intereses. A los pregoneros de tempestades ni siquiera les pasaba por la mente mirarse por dentro y seguían empeñados en ver la paja en el ojo ajeno. Sin ir más lejos, por ejemplo, resaltaba un Iván Duque que volvía a tocar la puerta de la Casa Blanca, en febrero de 2019, con la misma arenga complaciente con la que buscaba seducir al que manejaba los hilos, el belicista Donald Trump. ¿Sería que Duque desconocía que «crisis humanitaria» era un concepto

que se aplicaba mucho más a medida en algunos rincones de la geografía colombiana que en Venezuela? Y no había que ir al pasado de la guerra — que para nada era pasado sino un presente camuflado por los cantos de una paz que lejos de construirse se hacía trizas — en ese minuto había comunidades nada pequeñas en el Cauca, el Catatumbo, Nariño, que desconocían la palabra tranquilidad, que permanecían en total marginación, y lo que era peor que la carencia, vivían en constante pánico de ver desaparecer a los suyos en esa escalada de asesinatos sistemáticos que colmaba las páginas de medios alternativos pero que pocas veces llegaba a titulares de los grandes medios que se leen, se escuchan y se ven.

Al presidente colombiano no le había importado tener bajo su jurisdicción una emergencia ambiental derivada de los malos manejos de la hidroeléctrica Hidroituango, ni que el gremio de educadores siguiese poniendo su gestión en jaque con nuevas paralizaciones de sus labores, ni que el congreso le exigiese cumplir con sus compromisos en materia de paz, ni que ocurriesen atentados en el centro de Bogotá y no tomara cartas en el asunto más allá de despotricar del contrario y envenenar a la opinión pública. Buena parte de los ciudadanos le sugería a Duque que en su viaje a Estados Unidos debía buscar apoyo, sí, pero para la reconstrucción del tejido social y económico que casi 70 años de conflicto armado habían destruido en Colombia y no para mostrarse dispuesto a asumir el trabajo sucio que los de Washington planeaban para que ejecutase el vecino que mejor se comportaba como títere leal.

Ni siquiera le había importado que allí, en la tierra del zar de las excentricidades, la más alta oficialidad de gobierno no se tomara la molestia de aprenderse correctamente el orden de sus apellidos y en lugar de «President Duque» le llamasen

«Presidente Márquez». Tampoco que Trump hablase de Colombia como el jardín anexo a la Casa Blanca al confirmar como cierto el rumor sobre el envío de tropas estadounidenses a suelo colombiano —concretamente 5 000 soldados, según rezaba el descuidado escrito en la agenda del Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, captado por los siempre acechantes medios de comunicación— como quien saca a su perro a pasear por el patio. Duque, en cambio, asintió automáticamente ante cada capricho o idea desproporcionada de su interlocutor; intercambiaron saludos y sonrisas cómplices como habían hecho en ocasiones anteriores.

«Que entre la ayuda humanitaria», era el cacareo del momento. Una «ayuda» que se acopiaba en Bogotá, que presuntamente venía de muchos interesados en alimentar y socorrer a venezolanos famélicos y moribundos —porque así maquillaban la realidad para justificar una asistencia que superaba los 100 millones de dólares, acompañada, según decían, de medicamentos y comida. Pero de qué humanitarismo se hablaba si tal gesto no había sido avalado por las organizaciones correspondientes como la Cruz Roja, ni siquiera dentro de Colombia, y violaba el principio elemental de neutralidad e imparcialidad al escudarse tras ella la oposición interna y externa que pretendía derrocar a Nicolás Maduro.

Mientras el autoproclamado presidente Juan Guaidó advertía de fechas límites —conminaba a que el 23 de febrero de ese mismo año la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debía definirse «si al lado del pueblo y la Constitución o del usurpador»— el padrino Duque prestaba su territorio para una nueva reunión del Grupo de Lima dos días después del plazo dado como ultimátum.

Triste papel seguía jugando Bogotá en la embestida global contra el chavismo. Se le había visto involucrada, incluso, en los actos de agresión y magnicidio frustrado, tal y como lo corroboraron los mercenarios apresados por el gobierno bolívariano. Continuaba siendo la intervención militar la carta más peligrosa, no descartable de acuerdo con las amenazas de Trump, quien hablaba de «plan B, C, E y F» sin ofrecer más detalles y acentuando la peligrosa incertidumbre del momento.

Como reza el refrán, candil de la calle y oscuridad de la casa. Así se resumía la postura del ejecutivo colombiano, preocupado y ocupado por el vecino enemigo del gran amigo, mientras dejaba sus propios asuntos sin resolver. Y no eran poca cosa: guerra en las montañas, guerra en el congreso, guerra en las calles, guerra que calaba en las almas de una sociedad con deudas acumuladas por gestiones tan irresponsables e indolentes como la del actual presidente Iván Duque.

Impartir justicia: el talón de Aquiles del Acuerdo de Paz

Siete meses y tres días tardó el presidente colombiano Iván Duque en hacer exactamente lo contrario a lo que tanto pregonó en campaña: «no hacer trizas» el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Tal promesa se le escuchaba repetidamente en sus discursos, pero bien era sabido que se trataba de palabras de dientes para afuera, pues sus intenciones de solo «cambiar» algunas cosas sonaban a desmembrar todo el pacto en total consonancia con las aspiraciones expresas de su mentor político, el senador de ultraderecha Álvaro Uribe Vélez, su carta de triunfo para llegar a la Casa de Nariño.

Duque aprovechó sus prerrogativas presidenciales para vetar un grupo de artículos del corazón del proceso de paz: la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que, más que hacer trizas, redujo a polvo el texto consensuado en arduas jornadas de diálogo en la capital cubana durante unos seis años, entre sus distintas fases exploratoria, privada y pública. En este tema de la justicia estuvo siempre el nudo de la negociación en La Habana, al punto de poner en peligro más de una vez el desenlace de las conversaciones. Luego, tales discrepancias se trasladaron a los debates legislativos en el Congreso, convirtiendo también este asunto en el más extensamente discutido, después de más de una prórroga por falta de aprobación.

La JEP, por sus siglas, terminó siendo la causa de dilación mayor de la implementación de los acuerdos. Es por ello, que más de dos años después de firmada la paz, aún no se tenía todo el entramado legal necesario para que caminase con pies

propios el texto pactado. Tal retraso había llevado al documento a un limbo jurídico y a los ciudadanos colombianos a creer que todo esfuerzo había sido en vano.

El presidente Duque vino entonces a dar el toque de gracia a las ya desvencijadas alas de la reconciliación. La jugada era para él un arma de doble filo pues tenía por delante varios escenarios probables. Su veto, acompañado de reformas a cada una de las líneas con las que disentía, debía ser valorado en ambas cámaras del Congreso de la República y dependía de este órgano el futuro de la ley que marcaría cómo impartir justicia para los actores involucrados en el conflicto armado colombiano.

Para entonces, podrían Senado y Cámara aprobar las reformas presidenciales y se estaría deformando aún más un proyecto que ya había sufrido una desfiguración profunda —de hecho, tras la aprobación de la JEP por el Congreso, se produjo la ruptura del número dos de las FARC, Iván Márquez, con el partido político de la rosa roja, tras su inconformidad con lo allí modificado. O podrían las dos bancadas rechazar las propuestas del ejecutivo y sería una derrota política para el mandatario colombiano, con una aceptación popular bastante oscilante. En el peor de los casos se daría una división de criterios en las cámaras alta y baja, que conllevaría a engavetar el proyecto y aplazar indefinidamente su concreción.

Comenzaba así la conocida carrera por la seducción de votos, la acumulación del capital político que se precisaba y el chantaje partidista. No estaban del todo claros los números, solo que ninguna de las opciones sobre la mesa contaba con el respaldo necesario para ganar por mayoría calificada, es decir, la mitad más uno. Se tornaban valiosas las alianzas y determinantes ciertos personajes y partidos como Germán Vargas Llera

y su fuerza Cambio Radical. De cómo se inclinase la balanza dependerían los próximos pasos.

Los amantes convencidos de la paz comenzaron a buscar apoyo internacional en una comunidad que no veía con buenos ojos la decisión del *ducado*, porque además de, en su momento, haber celebrado con bombos y platillos el Acuerdo de Paz, tenía financiamiento involucrado en el proceso. La ONU se aprestó a tomar cartas en el asunto, pero poco podía hacer más allá de la denuncia pública y la incitación a no abandonar los caminos armoniosos.

Mientras, los exguerrilleros veían peligrar su estatus porque estaba en juego su juzgamiento y ninguno había dejado las armas con la idea de pagar un día de cárcel. El concepto de justicia negociado era más amplio y aceptado por las víctimas, en su mayoría, y pasaba por los principios de Verdad, Reparación y No Repetición.

Estaba claro que Duque necesitaba un buen pretexto para que la paz no prosperase, aunque con ello generara una guerra de poderes —era una deuda pendiente con su padrino, el presidente más antiguerrilla— pero sin presentarse ante todos como un detractor, más bien como el salvador que buscaba un acuerdo «mejorado»; casualmente, los mismos términos e ideas que usó Uribe en la campaña por el No del plebiscito. Ambos querían pijama de raya para los exinsurgentes y extradición, así como determinar quiénes sí y quiénes no se someterían a las cortes especiales de transición. Lo demás se reducía a oratoria barata.

El caso Santrich y el futuro de la JEP

La Justicia Especial para la Paz ha estado en permanente y encendido debate en el escenario político-jurídico colombiano, desde su difícil concepción en La Habana hasta su paso en busca del aval constitucional y, en consecuencia, su aplicación práctica. De entonces a la fecha, ha sido un entramado legal que ha sufrido más de una mutación al punto que, de lo suscrito por las partes del conflicto en el Acuerdo de Paz a lo legislado por el Congreso de la República, dista un buen trecho.

La polémica principal giró desde el principio en torno a dos aspectos: la impunidad y la extradición. En su momento, cuando se negociaba en la mesa de diálogo cómo armar un proyecto de justicia transicional, el gobierno colombiano buscaba pactar sanciones carcelarias para la insurgencia, al tiempo que los guerrilleros rechazaban el traje a rayas, pero más que todo insistían en un acuerdo que los protegiera de ser enviados a Estados Unidos y juzgados allí.

Fue extremadamente ardua la tarea de redactar los principios de la JEP para los equipos negociadores del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Sin embargo, deshacer lo que en tantas noches de desvelo y días de intensa discusión se construyó, resultó pan comido para los congresistas a la hora de crear el articulado de la Ley Estatutaria, presionados por el ultraderechista y empoderado Partido Cambio Democrático, del enemigo número uno de la guerrilla: Álvaro Uribe.

Uribe y los suyos se dieron a la tarea de contarle a la ciudadanía su versión distorsionada y engañosa de lo que sería la JEP. Para el plebiscito, que buscaba el respaldo de los colombianos al Acuerdo Final de Paz, les funcionó la intimidación y lograron el impensable triunfo del No. Aun y cuando se adecuó

el texto de La Habana a las exigencias de los detractores, la sombra de que el acuerdo era permisivo con las FARC siguió hasta hoy en el imaginario popular.

Es así que costó trabajo que la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Constitucional dieran luz verde a esta forma de impartir justicia, en su momento novedosa y única en el mundo cuando de resolución de conflictos se habla. A pesar de haber sido un tanto desmembrado el proyecto, seguía siendo el único posible que brindaba un mínimo de garantías a los combatientes desmovilizados.

El presidente Iván Duque se convirtió en el torpedero principal de la JEP. Intentó obstaculizar seis de sus artículos, los mismos que se relacionaban con el nudo gordiano: la extradición. Pero ambas cámaras rechazaron las objeciones presidenciales, dando un golpe mortal a las aspiraciones de Duque y dejándolo muy mal parado en su incipiente gestión.

En medio de toda la polarización en torno a la JEP, cobró protagonismo el caso del exguerrillero Jesús Santrich, un peso pesado de la otrora guerrilla y del nuevo partido político, que fue encarcelado y permaneció preso durante buena parte del proceso de discusión para la aprobación de la Jurisdicción de Paz. Estaba sobre el tapete el pedido de extradición a Estados Unidos pues fue allí donde se le inculpó. Santrich parecía el primero al que se le fabricaba una contundente historia de narcotráfico, le seguía Iván Márquez, y así se pretendió descabezar a la organización ahora en legalidad, mientras que a los de abajo, la masa insurgente sin armas, se les aniquilaba selectivamente. En resumen, la guerra sucia que siempre se vaticinó sucedería tras el aparente fin del conflicto firmado con el simbólico «balígrafo» por los adversarios en el Teatro Colón de Bogotá.

Para suerte de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la JEP había comenzado a dar síntomas de funcionamiento y la liberación de Santrich, así como la negativa a que fuese extraditado, fue la primera pequeña victoria en medio de los sinsabores e incumplimientos de la implementación de los acuerdos de paz. La decisión de los magistrados de ese tribunal especial desató un terremoto político en Colombia que hizo correr, en primer lugar, la cabeza del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

No obstante, una sombra de duda acompañó el caso pues comenzaron a aparecer videos que hasta el momento no se habían divulgado. No era de sorprender que se transgrediese el mandato constitucional de la JEP, si ya se habían violentado tantos otros estipulados de paz. Si bien Duque dijo que respetaba la separación de poderes, se mostró dispuesto a firmar la orden de extradición de «cualquier sindicado por el narcotráfico», contradictoria postura que apuntaba a intentar revertir la medida de la corte transicional.

Era sabido que la administración en el poder no comulgaba con lo suscrito por su predecesora a pesar de que su líder se comprometiera en campaña a «no hacer trizas» lo firmado. Su vocación antidualógica la confirmó al romper el proceso en curso con el Ejército de Liberación Nacional y al entorpecer el acuerdo con las FARC, el cual había querido modificar sustancialmente desde el inicio.

Santrich vino a ser entonces el caso piloto en esta historia, de lo que sucediese con él, dependería en gran medida el futuro de la Jurisdicción Especial y, en consecuencia, del Acuerdo de Paz en su conjunto. Y éste era solo un capítulo de una novela que daría un giro inesperado.

¿Y Santrich?

Por más de un año, entre abril de 2018 y julio de 2019, todo lo relacionado con el acuerdo colombiano de paz pasó por un nombre o, mejor dicho, un sobrenombre de guerra: Jesús Santrich. Es cierto que una golondrina no hace verano, pero hay casos, cosas y personas que trascienden lo individual para ser símbolos de una causa. Así sucedió con este exguerrillero, cuya historia de vida post acuerdo se convirtió en un medidor sobre la efectividad de lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el extinto grupo insurgente, FARC.

Primero, preso —y casi muere por una huelga de hambre—, luego absuelto y vuelto a apresar en el mismo día, después investido como congresista hasta que se reporta en paradero desconocido. Apretada síntesis de lo acontecido alrededor de este hombre que, más allá de sus años de guerrilla y los altos cargos dentro de la organización, trascendió como uno de los más envalentonados negociadores de la paz en La Habana.

Todo el que siguió de cerca el proceso recordará que, casi a diario, se producía una alocución pública de la delegación de las FARC sobre un tema relacionado o no con la discusión interna en la Mesa de Diálogo. Las declaraciones en voz de Santrich y aquellas genéricas, pero de su evidente autoría, tenían un tono distinto al habitual; mientras el resto de los plenipotenciarios insurgentes mezclaba la denuncia con un llamado a la conciliación, este hombre de gafas oscuras y bastón por su condición de invidente y al que no faltaba además una bufanda o su típico pañuelo palestino, se distinguía por ser incisivo y provocador, sarcástico e incompatible con los representantes del status quo.

No fue distinto después de abandonar la capital cubana, aun y cuando la firma de la paz supuso el fin de bandos y no se

hablaría más de adversarios hostiles, sino de contrarios políticos. A Santrich no le tembló la voz para continuar expresándose sin tapujos, incluso, desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde estuvo recluido hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz desestimara su causa por no encontrar sostenibles las pruebas en su contra.

Fue precisamente su caso el que dibujó una línea bastante gruesa entre los números uno y dos de la organización guerrillera convertida en partido político. El insurgente que logró pactar la paz, Iván Márquez, se puso del lado de Jesús Santrich, y rompió filas con aquel que estampó su firma en lo que Márquez negoció durante 4 largos años. Se establecía así una clara división entre los que estaban con Iván y los que respaldaban a Timochenko. La fractura se mantuvo y se resintió aún más con otros sucesos posteriores.

La desaparición de Santrich supuso nuevos desentendimientos y desconfianzas. Desde que su equipo de seguridad le perdiera pista, muchas fueron las suposiciones. Lo cierto es que no estaba siendo perseguido, no tenía orden de privación de libertad o restricción de movilidad y fungía como diputado a la Cámara de Representantes. Precisamente, que hubiese pasado de sospechoso por narcotráfico —a punto de extradición a Estados Unidos— a ocupar su escaño en el congreso colombiano, significaba el primer y hasta entonces mayor síntoma de supervivencia de un acuerdo de paz que agonizaba. Parecía que funcionaba la JEP. Demasiada sorpresa aquella que provocó un verdadero terremoto en la administración de Iván Duque y le costó el puesto al Fiscal General y a la Ministra de Justicia.

¿Qué pasó entonces? ¿Por qué esta salida intempestiva del mapa político? ¿Disidencia o temor por su futuro? Hasta tanto no apareciesen luego mayores indicios que arrojasen claridad

en esta historia, había dos posibilidades. Una: Santrich era culpable, temía ser encarcelado y juzgado definitivamente, quien sabe si enviado a Nueva York donde se le tenía abierta causa, y huyó. Claro que bien pudo haberse volado antes en lugar de seguir apostándole al proceso y asumir sus nuevas funciones. Dos: era inocente, pero conoció de antemano que la justicia no estaría de su lado en la nueva indagatoria que tenía pendiente, o supo de amenazas inminentes contra su vida, y buscó refugio con aquel grupo, también en paradero desconocido, que seguía jurando fidelidad a la paz acordada en papel, pero no ya al infeliz desenlace de lo pactado por obra y gracia de un gobierno desligado del proceso.

A la hora de tomar partido por una de las opciones sobre la mesa, había que tener en cuenta que en Colombia la justicia es todo menos justa y las causas se fabrican solas a golpe de dólares. Para romper un tanto, aunque no del todo —el número creciente de asesinatos selectivos bajo la égida de Duque da fe— con la tradición pasada de asesinar por la espalda a desmovilizados de grupos armados, la tendencia parecía ser la de involucrarlos en delitos recientes, posteriores a la firma de los acuerdos, para desmitificar su imagen pública, sobre todo con los rostros visibles, los de alto rango, porque con la masa rasa el final seguía siendo de traición y muerte.

Aquellos que exigían cumplimiento a cabalidad de lo consensuado en La Habana y no se conformaban con las medias tinta pasaron a ser el nuevo blanco de ataques de los enemigos de siempre de la paz colombiana. Desafortunadamente, lo sucedido con Santrich le dio alas a esos que despotricaron del acuerdo, hasta tanto no se despejasen las incógnitas.

Círculo vicioso de guerra

El rearme de las FARC, o al menos de una facción del extinto grupo guerrillero como se prefirió presentar para minimizar su impacto, conmocionó a Colombia y, por supuesto, a la comunidad internacional a la que no le era ajena el asunto porque una buena parte de sus miembros había estado vinculada activamente a los esfuerzos de paz, bien como garantes o acompañantes del proceso de negociación o bien como proveedores de recursos para el postconflicto.

La primera reacción y la mayoritaria fue de rechazo a la decisión de retomar la senda de la guerra. Primó un sentimiento colectivo de pesar, al considerar que se quebrantaba la paz. Llovieron las críticas hacia los alzados en armas y el único que pareció celebrar fue el expresidente Álvaro Uribe porque ahora tenía sobrados argumentos para sostener su tesis de que el proceso de paz había sido una farsa.

Dos hombres fueron los principales protagonistas del suceso: Iván Márquez y Jesús Santrich —nombres de guerra con los que era mejor llamarlos porque volvían a su condición de subversivos al margen de la ley—, dos personajes con un peso tremendo en el grupo armado cuando estaba en activo y después en el partido político de la rosa roja. La figura de estos dos guerrilleros fue lo que hizo trascendente la noticia porque la disidencia ya era un fenómeno natural y en ascenso desde la firma de los acuerdos de paz. Se calculaba en ese entonces que unos 2 000 habían roto con el pacto y reuniformado. Pero ahora, el hasta ayer número dos de las FARC, en franco posicionamiento de nuevo líder, se daba a la tarea de unificar a los frentes aislados, fundamentalmente a aquellos que seguían teniendo algún tipo de fe ideológica y no a esos que permanecían en el

monte con propósitos de enriquecimiento ilícito, bandidaje u otro motivo repudiable.

Márquez no solo pretendía aglutinar a su tropa dispersa sino establecer alianza con el Ejército de Liberación Nacional, otra insurgencia que coexistió a la par de las FARC-EP y que aún operaba en condición de clandestinidad y oposición pujante contra el Estado colombiano. Ciertamente en el pasado, ambos grupos se mantuvieron independientes uno del otro y a veces hasta enfrentados porque pesaban las diferencias conceptuales y estructurales por encima de los objetivos políticos comunes. Dadas las condiciones del momento, era unificarse o ser aniquilados en el intento de proseguir la lucha, sobre todo porque la vía armada era descalificada, incluso, por las fuerzas que en el pasado la apoyaron.

¿Era entonces un error retomar la confrontación? Primaría el sí como respuesta, pero resultaba discutible. El propio Márquez, mientras fungió como jefe de la delegación negociadora de las FARC en La Habana, tuvo una proyección dialoguista por encima de todo intento de ruptura de las pláticas. Insistió hasta el cansancio en que todo era solucionable por la ruta del entendimiento, pero defendió con igual vehemencia que la rebelión era un derecho y no un delito, siempre y cuando el resto de las opciones estuviesen agotadas.

Si se analizaba en profundidad el escenario del postconflicto, prácticamente había un único punto cumplido y por una sola de las partes: la entrega de las armas y la conversión en partido político. Del otro lado de la mesa había un Estado que limitó su compromiso a palabras huecas, máxime cuando el que estampó su firma ya no gobernaba y su sucesor no acababa de comprender la dimensión de la responsabilidad heredada.

Una era la realidad que vivían los exjefes guerrilleros investidos como congresistas o en posiciones políticas de cierta comodidad, y otra bien distinta la de los antiguos mandos inferiores que ni siquiera habían podido completar su reinserción social. Dónde vivir, cómo trabajar y la vuelta a la legalidad sin susto no había sido posible para buena parte de esos 13 000 hombres que dos años atrás se deshicieron del único elemento que les proporcionaba seguridad: su fusil.

Eso por no hablar de los puntos en blanco y negro que iban más allá de los actores del conflicto: la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos y la reparación a las víctimas. Nada de ello ni siquiera se había esbozado jurídicamente. Nada había cambiado en ese sentido después de noviembre de 2016 y del estrechón de manos y la palmadita en el hombro entre Timochenko y Juan Manuel Santos.

Además de los incumplimientos, los cuales es cierto que podían seguir reclamándose desde una postura de paz y no con la vuelta a la beligerancia, estaban las jugarretas disfrazadas de justicia que comenzaban a gestarse contra determinados cabezallas como fue el caso de los dos ahora alzados. Y la gota que desbordó la copa de la paciencia pacifista: la matanza sistemática de los que no comulgaban o eran detractores del sistema. Según la cuenta del propio Iván Márquez, 150 de los suyos habían sido asesinados hasta completar 500 si se contaban los líderes campesinos e indígenas y los activistas sociales, una cifra que se circunscribía al mandato de Iván Duque, un año apenas, porque la cuenta general era mucho más fatídica. Había que reconocer que el exterminio estaba siendo más discreto que el perpetrado contra la Unión Patriótica en el pasado, pero la perfidia era la misma.

Las razones numeradas se parecían bastante a las que hacía 60 años provocaron el surgimiento de las FARC, si bien el contexto regional desentonaba. Entonces Fidel Castro había demostrado que mediante las armas se podía llegar al poder y las revoluciones, imitando a la cubana, proliferaban en el continente. Desde la primera década del siglo XXI comenzó a satanizarse la opción militar y se puso de moda elecciones sí o sí. Si bien ya no había dictaduras a la vieja usanza, se seguían cometiendo acciones tan anticonstitucionales como antaño y el camino electoral mantenía zonas oscuras. En casos como el colombiano —que no el único— se aparentaba un estado de derecho en el que se hacía abuso del marketing democrático —la democracia se limitaba al discurso— mientras la práctica cotidiana distaba mucho del respeto por el orden constitucional.

A pesar de todo, continuaba siendo difícil aplaudir o justificar la guerra porque traía inevitablemente derramamiento de sangre inocente. Márquez, Santrich y su nuevo grupo que apelaba a los mismo símbolos, significados y propósitos que el anterior, tenían en contra a mundo y medio, y era previsible que la respuesta militar sería mayúscula con el fin de reducirlos a cenizas. Por lo pronto, habían enviado dos señales positivas en medio del caos: renunciaban al secuestro y a la táctica ofensiva contra soldados y policías. Aunque no dieron detalles, prometieron un *modus operandi* novedoso en el que primasen las situaciones defensivas y apuntaron como enemigo a la oligarquía corrupta. Habría que ver si por el camino no se distorsionarían las aspiraciones iniciales.

Más allá de si el proceso de paz fracasó o no, lo que quedaba en entredicho, tras los hechos de rearme guerrillero, era la unidad, fortaleza y sustento ideológico de las fuerzas de izquierda en la región. No todos se habían pronunciado, era prematuro

vaticinar las diversas posturas, pero hasta el momento primaba la condena a la sublevación y el respaldo a la defensa de la paz.

En esta competencia, la paz como bien supremo, como derecho universal, siempre tendría las de ganar mayoritariamente, pero la paz como acuerdo no cumplido, reducida a documentos engavetados, cuando más a disposiciones reinterpretadas y alejadas de su espíritu original, nunca podría imponerse al sentir de unos pocos por hacer valer lo una vez firmado y traicionado.

Era absolutamente predecible el curso de los acontecimientos desde que Márquez salió de circulación y quedó en paradero desconocido. Su desacuerdo con Timochenko venía, incluso, de más atrás, de cuando se celebró el congreso fundacional del partido, donde a pesar de la reservas del encuentro, trascendió una fractura profunda entre dos visiones antagónicas: la de Márquez, más radical y firme a pesar de ser el que había negociado a profundidad la paz en La Habana, con más autoridad y conocimiento que todos en la materia; y la de Timochenko, líder histórico, pero visiblemente maleable a la hora de ceder ante los reclamos del contrario, buscando un acuerdo a cualquier costa. Las votaciones en esa ocasión, mayoritarias hacia Iván Márquez, evidenciaron cuál postura primaba, pero la elite dominante dentro del grupo se decantó por mantener el mismo liderazgo de las selvas en la civilidad.

Iván Márquez y Jesús Santrich sabían, como pocos, vivir en anonimato y escurrirse del sistema. Pudieron alejarse del proceso de paz al sentirlo burlado y disfrutar su propia paz después de décadas en guerra permanente. O también volver al clandestinaje sin show de rebeldes convencidos de su causa, si la razón que los compulsaba era el negocio de las drogas del que se les acusaba. La decisión de reagruparse no fue improvisada y sí muy audaz. Llevaban, como mínimo, un año estu-

diándola, al tiempo que buscando apoyos y alianzas. Volvieron a empuñar las armas, aunque fuesen los primeros en saber que tal coraje no los conduciría al triunfo. No sucedió en el pasado cuando estaban en mejores condiciones numéricas y con más sostén político y de recursos, por lo que estaba lejos de suceder en este minuto de total adversidad para ellos.

En cuanto a la paz, esa no se frustró con ese incidente. La firma del acuerdo era el punto de inicio de un proceso de reconciliación, de construcción armónica de la sociedad que no se dio. Las armas se depusieron, pero la voluntad de recomponer el tejido social se quedó en mera aspiración. El nuevo gobierno no supo tener una dimensión de Estado y fue el primero en no cumplir su parte del trato, ahora una parte de la contraparte decidía revelarse para romper definitivamente un acuerdo que jamás abandonó el papel.

Volvió otra vez a no haber buenos buenos ni malos malos. No había vencedores ni vencidos, las culpas andaban repartidas. Solo se podían predecir las grandes víctimas de este nuevo capítulo del conflicto: Colombia como nación, América Latina como zona de paz y la gente común que volvería a ser carne de cañón en medio del fuego cruzado.

La frontera belicosa

Los dos vecinos más incómodos de Sudamérica volvían a tener un pico de enemistad. Lamentablemente en este caso, ninguno podía permutar de casa, estaban obligados a coexistir lo más pacíficamente que sus respectivos genios se lo permitiesen, casi siempre condicionados por el jefe de turno del hogar. Solo que, bastante avanzado el año 2019, la armonía deseada estaba un poco más lejos que de costumbre por los aires de guerra que se respiraban.

Era la Venezuela de Nicolás Maduro y la Colombia de Iván Duque como antes había sido la Venezuela de Hugo Chávez y la Colombia de Álvaro Uribe. Curiosamente, en ambos casos, los gobernantes del momento eran los herederos políticos —no por mera sucesión sino por decisión— de los de ayer y defendían una línea ejecutoria y discursiva prácticamente idénticas para con el contrario. En esta historia estuvo otro personaje de por medio, Juan Manuel Santos, quien también quiso dejar constancia de su animadversión por el proyecto chavista, pero aún y cuando mostró pulso con el de al lado, tuvo que pactar una tregua mientras Caracas le echaba una mano con el proceso colombiano de paz.

La antipatía tenía evidentes causas políticas, cada quien defendía un proyecto de país distinto, en el que un tercero condicionaba la relación a conveniencia. Estados Unidos había tenido en Bogotá a un aliado «estratégico» para intentar reducir a la Caracas insumisa; por lo que el asentado en Nariño casi siempre hablaba por mandato del que se posicionaba en la Casa Blanca.

Es así que en las últimas dos décadas había habido pocos momentos de concordia. Antes, los gobernantes venezolanos

tenían un compromiso de palabra con Washington y antepo-
nían los intereses norteamericanos a los nacionales, realidad
que cambió con la llegada de Chávez al poder. La ruptura de
relaciones diplomáticas había sido entonces recurrente — como
amenaza y como acción manifiesta— y la sombra de un con-
flicto armado había estado más de una vez sobre la mesa.

Esa vez, el pretexto era un viejo conocido. Duque acusaba a
Maduro de dar albergue a terroristas. Desde el propio término
empezaban ya las desavenencias. Para el jefe de estado colom-
biano, terroristas eran todos aquellos miembros de las guerrillas
de su país, mientras que el mandatario venezolano los conside-
raba combatientes que defendían una causa social y se oponían
a un sistema político como el que por décadas ha dominado en
Colombia. Precisamente, la imputación de Iván Duque partía
de esa cercanía ideológica que había existido entre los grupos
insurgentes y el chavismo. En días recientes a las acusaciones
del ejecutivo colombiano, habían aparecido supuestos docu-
mentos clasificados del servicio de inteligencia venezolano de
los que Duque echaba mano para sustentar sus denuncias.

El detonante para una acusación que no era nueva fue el
rearme de una facción de las FARC que se alejó completamente
del proceso de paz en su estadio de inoperancia, bajo el mando
del mismísimo hombre que negoció esa paz: Iván Márquez.
Desde que se conoció la noticia, era absolutamente previsible
que inculparan a Maduro de auspiciar tal decisión. Mucho antes,
cuando Márquez quedó en paradero desconocido, se señalaba al
territorio venezolano como su posible sitio de refugio.

Certezas aparte, lo que estaba en juego entonces era la esta-
bilidad regional a partir de lo que podía suceder en la franja
fronteriza que separa a estas dos naciones. Las tropas de las
Fuerza Armada Nacional Venezolana realizaban ejercicios

militares, con orden de «alerta naranja», dígase vigilantes a cualquier acción del vecino belicoso. El presidente colombiano había sido el primero en bajar la guardia después de tal despliegue: «serenidad» fue su llamado, mientras que su mentor norteamericano le daba una palmada en el hombro para expresarle su total apoyo en caso extremo de que sonaran los cañones.

A Duque siempre le sería más conveniente culpar al vecino que asumir la responsabilidad que como gobierno tenía en la desertión de los insurgentes. Colombia tenía antecedentes de acciones ilegales contra territorios colindantes en su afán de cacería guerrillera. Ejemplo de ello fue el operativo en el que mataron al guerrillero Raúl Reyes en suelo ecuatoriano creando una crisis de grandes proporciones que incluyó víctimas «colaterales».

Y si de amparo y protección se hablaba, cada quien sabía cobijar a su simpatizante más cercano. Si Maduro permitía a insurgentes en su patio, Duque también había dado cabida en sus predios a todo aquel que se confesase enemigo del chavismo, desde los legisladores opositores venezolanos hasta los militares desertores, pasando por el mismísimo «autoproclamado» Juan Guaidó. En la Colombia fronteriza y en la que no, se acostumbraba a ensayar numerosos planes macabros para destronar el proyecto bolivariano. Y si de terroristas se trataba, más de un colombiano se había visto involucrado en acciones violentas contra los venezolanos, los de gobierno y los de a pie.

Al menos, en aquel intercambio airado hubo más gritería y enseñadera de músculos que órdenes de guerra. A ninguno de los dos les convenía un enfrentamiento militar, Venezuela por su situación económica, además de estar en el ojo del huracán de las críticas internacionales, y Colombia por su propia hostilidad interna. El objetivo era más bien jugar al desgaste del gobierno

bolivariano, al hostigamiento de todas las formas posibles. La opción armada había flotado una y otra vez, incluso desde un adversario mayor y con un comandante más desquiciado como era el caso de Donald Trump. Pero hasta él y sus sinsentidos sabían reconocer que los tanques no eran una elección viable, con la presión diplomática habían logrado recabar más apoyo que usando la fuerza, un método demasiado repudiado por el pasado de intervenciones militares en la región.

El chiste del momento

¿Hasta dónde podía llegar la ridiculez del gobierno colombiano cuando de Venezuela se trataba? Una cosa era darle un espaldarazo a Juan Guaidó, decirle «míster president» para congraciarse con míster Trump. El reconocimiento al autoproclamado como legítimo Jefe de Estado de Venezuela, dando por usurpador a Nicolás Maduro, era entendible viniendo de Colombia, y de los otros 50 países, mientras permaneciese en el plano simbólico, en lo político, o lo que es lo mismo, en los dimes y diretes que servían para alimentar la rencilla con el vecino chavista que más de un mandatario colombiano había mantenido, por idéntico motivo que lo hacía Iván Duque en ese minuto: ser el interlocutor —en buena lid, perrito faldero— estadounidense en suelo latinoamericano.

Pero ir más allá en este paripé, era ser presa del chiste. Parece que a Duque y su gabinete no les interesaba en lo más mínimo que comenzaran las carcajadas tras el suceso que desencadenó la madre de todos los memes. Tuvo lugar el 13 de febrero de 2020 cuando la cancillería colombiana formalizó la petición de extradición de la prófuga Aída Merlano a la «embajada de Caracas», donde radicaba el «embajador designado» por el «presidente Juan Guaidó». Por cierto, ¿habría recibido el documento «oficial» el de fresquito nombramiento entonces, Tomás Guanipa, o algún otro encargado dado el caso que ni siquiera había podido ratificarse en su puesto porque tocaba a la Asamblea hacerlo y ahí el señor Guaidó tenía otro embrollo armado, disputándose la presidencia del ente legislativo con otro líder opositor? La verdad que la plaza diplomática en Bogotá le había dado bastantes dolores de cabeza a Juan Guaidó, pues había tenido hasta que destituir al anterior plenipotenciario,

Humberto Calderón Berti, a quien le dio por denunciar los manejos irregulares que «su presidente» hacía de los fondos destinados a la operación de «ayuda humanitaria».

Lo cierto es que, risas aparte, el presidente Duque insistía en no defraudar a su par norteamericano, sobre todo después de que Trump le diera un «boca a boca» al agonizante elegido para destronar a Maduro, llevándolo al Congreso a escuchar su discurso anual del Estado de la Unión o «canto a mí mismo».

La pieza que propició esta recreación de un gobierno que acuñaban como real, donde solo había ilusos con títulos y cargos que no podían ni emitir un visado o sellar un memorando, había sido una mujer prácticamente desconocida en la arena internacional hasta que cayó en manos del multimediático Maduro.

¿Quién era Aída Merlano? ¿Por qué se había convertido en un eslabón decisivo en las ya maltrechas relaciones colombo-venezolanas?

Se trataba de una excongresista colombiana en busca y captura por las autoridades de su país y la Interpol desde que el primero de octubre de 2019 protagonizara lo que fue calificado como «fuga de película». Y lo fue, digna de una serie de narcos, de esas muy vistas alrededor del mundo y que estigmatizan la realidad de todo el que diga «soy de Colombia». En síntesis: la criminal sale del recinto penitenciario a una cita médica, para nada de primera urgencia, sino un asunto odontológico de rutina, y allí salta por una ventana y se descuelga por una soga hasta la calle donde la espera una moto que huye a toda velocidad. Una evasión que corroboró la fragilidad de la institucionalidad colombiana toda, donde la corrupción, delito por el que fue condenada esta señora a 15 años de cárcel, después de demostrársele que era parte de una red de compra de votos,

está enquistada hasta los huesos del sistema electoral, político y jurídico. El acuerdo de paz de La Habana se proponía renovar y sanear todas esas ramas, pero tal empresa chocó con el poder real de los que financiaban y sostenían el clientelismo en todos los ámbitos.

En otras palabras, Merlano pagó a los votantes para hacerse Senadora de la República y pagó luego a mucha más gente para huir de su purgatorio después de ser inculpada. Ahora reaparecía tras ser capturada en territorio venezolano con una identidad falsa y adquiría una dimensión superior, no era ya una persona que tenía deudas con la justicia, era, más que todo, la persona que podía desenredar una madeja oscura y sucia de la política colombiana, y había caído en manos de quien menos esperaban esos que podían salpicarse, en las garras del tan «odiado» Maduro, sobre quien tanto habían despotricado y que se aprestaba a tomar venganza.

Lo malo de toda la historia radicaba en las tantísimas mentiras de por medio, lo que diluía todo ápice de veracidad. La fugitiva recapturada acumulaba un rosario de acusaciones que ahora vendía como una farsa armada en su contra por aquellos a los que señalaba como verdaderos culpables. Resultaban cuestionables entonces sus cuentos sobre la siembra de pruebas, el secuestro, los vejámenes y más. Los señalados por ella eran, nada más y nada menos, que la «crème de la crème» de la política colombiana, expresidentes y presidente de turno incluido. Del otro lado, le hacía contrapeso a la novela, la información manipulada contra la Venezuela de Maduro que servía a Duque y demás inculpados para restarle notoriedad a las denuncias de Merlano.

La podredumbre que vociferaba como cotorra desesperada la reclusa en cuestión ha sido una verdad como un templo en la

Colombia de todos los tiempos, que se escondía bajo la alfombra de administración en administración. En la región conocida como costa Caribe, en el departamento Atlántico, donde fue «electa» a golpe de soborno, primero como Representante a la Cámara y luego como Senadora, el asunto tenía vieja data, tanto como que de allí surgió el senador más veterano con más de 40 años como congresista del país, Roberto Gerlein, un típico cacique, en tiempos de aparente democracia. Y es que, en esa zona, que se nos hace más familiar si le digo que Barranquilla es la ciudad capital, la cosa ha sido siempre de apellidos de ringorango y abolengo y quedaban entre dos o tres; dos o tres que se distribuían y turnaban los puestos de importancia a cambio de favores o cheques al por mayor y nadie decía nada de tanta putrefacción de cuello blanco. Gerlein, Chad, Name, los nombres de clanes familiares conocidos que han dominado la escena atlanticense con la economía en un puño y la política en otro. Los que a su vez han impulsado a otros más arriba en puestos de mayor investidura. Todos temblando entonces con la lengua suelta de un chivo expiatorio que se les había escapado.

No le quedaba de otra a la parte colombiana salpicada que rencauzar el discurso e intentar que la narrativa de corrupción se disolviese en medio de la arremetida contra «Maduro, el dictador». Era muy fácil que le siguiesen el cuento por lo satanizado que estaba el gobierno venezolano y por la cantidad de naciones, con sus consabidos brazos mediáticos, que se prestaba a repetir el relato antichavista.

La cosa no iba a pasar a mayores, a pesar de que hubiese más de uno asustado. Por mucho que vomitase la Merlano, en la vecina Colombia no iba a producirse un terremoto político ni mucho menos, cuando más un poco de revuelo en diarios y noticieros que se calmaría poco a poco. El mejor ejemplo era que

Aída Merlano había sido procesada en 2019 y, aún y cuando fueron ampliamente documentados sus vínculos con los clanes mencionados, apenas si se rociaron con su escándalo. Un par de meses después, en las elecciones regionales del propio año, los elegidos para los puestos claves de Atlántico y Barranquilla, dígase gobernador y alcalde, fueron las fichas promovidas por los mismos que estuvieron detrás de las candidaturas fraudulentas de la Merlano. ¿En serio había que creerse que se trataba de fidelidad partidista? La vida continuaba igual por aquellos lares y otros, caja contadora mediante.

Quien sí sacaría amplio provecho, aunque fuese solo por hacer ruido, sería Maduro. Era su pequeño momento de gloria frente a la Colombia que lo avasallaba cotidianamente. Máxime cuando les demostraría a todos que el presidente que se inventaron para sacarlo de en medio solo ejercía en las mentes creativas de Trump y sus aliados; y en este caso puntual, en el imaginario de Duque. Porque, por muchas cartas y peticiones formales que le hicieran llegar al sin poder de Guaidó, jamás podría mover un dedo para cumplir con lo demandado. Por Aída Merlano, Duque debía esperar sentado.

Claro, era comprensible la postura del presidente colombiano. Hacer otra cosa hubiese sido contradecirse. Y lo que era peor, reconocer que Maduro ostentaba la legitimidad y su gestión abarcaba toda la institucionalidad venezolana. Por otro lado, si bien las delaciones de la Merlano eran molestas desde la tierra vecina, en casa tampoco se quería reabrir ese capítulo que se pensaba cerrado con cuatro candados. Tendría no solo que volver a Colombia para cumplir su condena pendiente, sino someterse a nuevo juicio por fuga y demás, y nuevos actores podrían verse involucrados. Así que jugar al presidente ilusorio no resultaba tan inconveniente tampoco. Girar la

atención hacia el «villano» de Maduro y enfatizar en la criminalidad de la Merlano, le permitía a la elite política colombiana continuar posicionando a señores corruptos hasta los tuétanos en los más altos y distinguidos puestos de la nación.

Del conflicto armado al conflicto social

Colombia se sumó al hervidero social que se propagó veloz por la región a fines de 2019 y se extendió hasta bien entrado 2020. Hubo un evidente efecto contagio que provocó una especie de sublevación latinoamericana, pero con marcadas singularidades de acuerdo al caso. Era importante no confundir el origen y alcance de cada una de las protestas, sobre todo porque no todas fueron del todo espontáneas; unas tuvieron una profunda motivación política con bastante de inoculación externa y manipulación —como fue el caso de las que dieron al traste con la gestión de Evo Morales en Bolivia— mientras las otras, que fueron las predominantes, un marcado sello económico.

En estas últimas entraba el estallido colombiano. Como también en Chile y Ecuador, existió un detonante relacionado con medidas de gobierno que colmaron la paciencia de una ciudadanía que acumulaba disgustos y estrecheces. Quizás, en el caso colombiano, el rechazo popular se adelantó al «paquetazo», porque aún no habían sido decretadas las acciones, sin embargo, saberlas cerca bastó para que la gente saliera a la calle a decir no más.

Solo que, mientras a los gobiernos de Sebastián Piñera o Lenín Moreno, la protesta les estalló en la cara con un claro efecto sorpresa, Iván Duque tenía la jugada cantada. El paro del 21 de noviembre de ese año estaba debidamente programado y todo el gabinete se preparó para el día cero —incluso se cerraron fronteras— sin sospechar que la presión iba a sobrepasar las 24 horas previstas.

Quizás Duque se confió en que históricamente en Colombia, el miedo y la impotencia han superado el espíritu de rebeldía. No ha sido una nación de protesta social porque ha vivido

demasiado tiempo en guerra. Por años se le dio el mismo tratamiento de enemigo a la guerrilla que a un puñado de civiles enojados. Las manifestaciones han sido contadas en la últimas décadas, han tenido altas cuotas de criminalización y, en su mayoría, tenían el rechazo al conflicto armado como centro.

Ciertamente, por primera vez en mucho tiempo ya se podía demandar algo más que paz, dado el caso que tres años atrás se proscribió la confrontación bélica con el mayor grupo armado irregular del país, las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Justamente la celebración del tercer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC coincidió con la jornada de movilizaciones populares, y terminó por ser eclipsada, la fecha el 24 de noviembre más bien se diluyó en medio de tanta indignación y reclamos.

Si bien el cumplimiento de lo pactado con la exguerrilla formaba parte del pliego de peticiones de entonces, había exigencias más urgentes según las consideraciones de la ciudadanía que tenían que ver con pensiones, salarios, empleo juvenil, acceso a la educación y asuntos fiscales. En un segundo plano habían quedado las denuncias por los asesinatos selectivos de líderes del campo y de las comunidades indígenas, que pasaron a las primeras planas tras la muerte de un joven protestante a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Lo que se consideró un deliberado asesinato de un menor de edad por el uso abusivo de la fuerza —el caso de Dilan Cruz— pasó a ser el combustible que avivó la llama de las protestas. Fue también el hecho que obligó al ejecutivo colombiano a convocar por adelantado a un diálogo a modo de contención. Un *modus operandi* tradicional de las diferentes administraciones ante brotes de cólera social y que solía surtir efecto. Y surtía efecto precisamente porque no había una base organizativa con

conciencia política en la movilización que exigiese un verdadero cambio estructural. Los grupos inconformes acostumbraban a ceder fácilmente ante las regalías paliativas de los gobernantes.

Muchos se preguntaban si esa vez sería diferente. Aunque el primer intento de las conversaciones falló, Duque se sacó de la manga la primera curita: un proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que incluía la eliminación del impuesto sobre las ventas (IVA) para familias de bajos ingresos, incentivos para los empresarios que diesen empleo a jóvenes y reducción del aporte de los pensionados al sistema de salud.

Parecía que tenía que ser más generoso porque los ánimos se habían enardecido bastante. Las reivindicaciones habían aumentado, ahora se exigía la depuración de la policía y el desmonte del ESMAD tras la víctima fatal que se convirtió en símbolo de resistencia en Bogotá. Se sumaban demandas relacionadas con cuestiones ambientales como el fin de la agresiva práctica del *fracking* en la extracción petrolera.

A la par de la multiplicidad de peticiones, se habían incrementado los sectores sociales. Primero fueron algunos sindicatos obreros y luego le respaldaron estudiantes, mujeres —coincidiendo también con el día internacional de la no violencia contra las mujeres y las niñas—, jubilados, campesinos, indígenas y gremios de profesionales de la salud y la educación. La deuda con todos ellos era inmensa y de larga data, su resentimiento hacia las instituciones y figuras del Estado era proporcional a las carencias.

En medio de esa heterogeneidad de colombianos se vio también marchar a los desmovilizados de las FARC en proceso de reinserción a la vida civil. El mismísimo presidente del partido de la rosa roja, Rodrigo Londoño, Timochenko, salió como uno más a acompañar a los manifestantes de la ciudad de Medellín,

un hecho inédito para un hombre que tuvo que retirarse de la campaña presidencial de 2018 por amenazas de muerte y sobre el que en el pasado pesaban millonarias recompensas por su captura o muerte.

Habían transcurrido tres años desde que se sellara la paz de Juan Manuel Santos con las FARC y si bien del grueso de lo negociado apenas si se había implementado un porcentaje ínfimo, se podían percibir cambios innegables, y lo de Timochenko en las calles de un territorio tan antiguamente *uribista* como Medellín, era uno de ellos.

Sobre el vacío legal en torno al Acuerdo de Paz recayó el reclamo de los exinsurgentes, apoyados por buena parte de la ciudadanía. No se había movido un dedo a favor de la reforma agraria o de la sustitución de los cultivos ilícitos, y el plan integral para abordar el narcotráfico era cosa de papeles archivados. De los cerca de 13 000 guerrilleros que entregaron su fusil, menos de 2 000, según cifras manejadas por la propia organización convertida en fuerza política, habían podido enrolarse entonces en proyectos productivos propios y acceder a viviendas y demás servicios. La mayoría se había visto forzada a abandonar los espacios territoriales donde permanecían concentrados por falta de futuro inmediato y por un factor mucho más peligroso: la inseguridad. Los desmovilizados formaban parte del blanco permanente de las bandas paramilitares, junto a los activistas de las comunidades marginadas que sufrían persecución y exterminio.

La falta de compromiso del gobierno de Duque con el acuerdo heredado para la pacificación y reconciliación del país, podía servir de medidor para esos miles que le plantaron cara en las calles. No le cumplían a las FARC lo convenido durante 4 años de zozobranante proceso de negociación y dispuesto en

unas 300 hojas resguardadas por las Naciones Unidas. ¿Qué garantías había entonces de cumplirle a los que paralizaban por aquellos días a Colombia?

Cuando Chile despertó, algunos conocedores de la realidad colombiana creyeron improbable que en Colombia se diese un estallido similar y sus razones eran bien fundamentadas. En Colombia se mataba antes de que alguien intentase siquiera alzar la voz un poco más fuerte, no era represión, era criminalización, intimidación de la que cala en los huesos. Los métodos disuasorios partían del derramamiento de sangre por adelantado y la impunidad campeaba. Era una política de terror bien estructurada donde los autores no se dejaban ver y el trabajo sucio lo hacían unos pocos al margen de la ley a los que casi siempre les pagaban sueldos los que escribían y ejecutaban las leyes.

Por esos días finales de 2019 parecía que la gente había perdido el miedo en Bogotá y en todos esos sitios donde se protestaba con convencimiento y coraje. Como en el resto de los escenarios latinoamericanos en efervescencia, la perseverancia, organización y empuje de los descontentos determinaría en el alcance de su movilización; si es que se trataba de un paro más, reducido en pocos días a golpe de chorros de agua, gases lacrimógenos y bastonazos o un verdadero estallido popular que lograra un cambio de fondo por encima de decisiones cosméticas. No se pudo saber a ciencia cierta la verdadera respuesta. Llegó una fatídica pandemia a sembrar pánico, a sumar muertes por la enfermedad y a «resolverle» el asunto de las calles revueltas a los gobernantes en jaque.

Con tantos muertos, ¿de qué paz me hablas, viejo?

Los números suelen ser fríos, inexactos y fácilmente olvidables, pero a veces pueden provocar un *shock*, así de fácil, con solo aparecer y ser duramente ilustrativos, contundentes. Tal fue el caso de los resultados de una investigación del Instituto de Estudios de Desarrollo y Paz de Colombia (INDEPAZ): 28 líderes sociales asesinados en Colombia en los primeros 28 días de 2020. ¡Un asesinato diario! Y si el dato se hubiese congelado allí, pues sería dramático, pero no tan cruento como que matar a quien mostrase algún tipo de activismo o interfiriese en planes de algún empresario, político, capo o delincuente se había vuelto un ejercicio sistemático que engordaba estadísticas fatales.

Cuando de este tema se hablaba, más de una organización llevaba sus propios cálculos, al margen de los números oficiales, que convenientemente eran siempre inferiores. Entre todas las de la nación suramericana, INDEPAZ gozaba de bastante prestigio y credibilidad. Pero no fue la única en arrojar conclusiones de espanto. También la Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un informe sobre violencia política en el que señalaba que los primeros 30 días del año se registraron 55 hechos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales, de los cuales 19 terminaron con la vida del agredido. Por cuenta del Estado, el dato costó más encontrarlo, tímidamente se habló de unas 11 víctimas fatales. Las cifras no coincidieron, pero evidentemente hubo consenso en que enero de 2020 fue un mes letal para los colombianos y en los meses siguientes la situación no varió demasiado, al punto que, en plena crisis global por el coronavirus, las muertes por esa violencia con marcado sesgo político compitieron con las provocadas por la COVID-19 en la nación sudamericana.

Y era cuando menos un contrasentido que una Colombia que presumía de vivir el postconflicto tras ponerle «fin a la guerra» a través de un Acuerdo de Paz, después de una prolongada negociación exitosa en medio de otros tantos intentos fallidos entre los archienemigos Estado y guerrilla, ahora atravesase un período tan violento como en los más sanguinarios años de las casi siete décadas de beligerancia.

¿Quiénes eran los muertos de todos los días en una Colombia que presumía de paz? Apenas una pregunta de tantas otras a las que querían mutilarle las respuestas. ¿Por qué los mataban? ¿Quiénes los mataban? ¿Qué decía el gobierno de tantos muertos? ¿Eran hechos aislados o una práctica sistemática? ¿Verdaderamente se había acabado la guerra? ¿A dónde había ido a parar el Acuerdo de Paz?

Reseñaron los medios colombianos que el día primero de enero de ese año fue el único de tregua para ese plan de exterminio. Porque no era posible calificar de otra manera la oleada de muertes que, tras la firma del acuerdo, se había desatado con furia redoblada. No podía ser posible tampoco que tantos años de guerra hubiesen naturalizado el inhumano acto de matar, a «lo coser y cantar», y se matasen unos a otros por rencillas personales. Se volvió un asunto tan cotidiano que espantaba. Precisamente, la asiduidad de los crímenes obligó al jefe de estado a pronunciarse. Solo que el presidente Iván Duque y su comitiva pretendieron presentar los hechos de asesinatos a líderes sociales como casos puntuales asociados a la delincuencia común o al narcotráfico. ¿Miopía o encubrimiento?

Los blancos de ataque eran políticos locales en el ejercicio del cargo o compitiendo por él; personajes con autoridad en comunidades indígenas y afro, jefes gremiales o comunales, es decir, gente que lideraba algún sindicato o alguna colectividad;

campesinos y activistas del grupo LGTBI. En resumen, personas de influencia en todos esos ámbitos que tenían como factor común —y mortal— ser constantes inconformes con las injusticias, defensores a ultranza de su pedacito de tierra o negocio familiar, protectores de sus ya escasos derechos, los primeros en oponerse a cualquier persona, empresa o iniciativa que los ninguneara, los que no se quedaban callados, aunque les llovieran panfletos con amenazas.

¿Casualidad entonces que a toda esta gente la estuviesen matando? Definitivamente, no. No eran individuos al azar. Eran personas que entorpecían intereses puntuales y a los que era más fácil «dar piso» que intentar convencer o sobornar. Por tanto, no era cosa de delincuencia común y razones triviales.

Muchas muertes podían endilgársele a los narcos y sus sicarios que aniquilaban sin piedad a quien entorpeciera el oficio, porque ciertamente, los sitios de mayor incidencia, donde mayor cantidad de asesinatos se cometían eran las regiones con presencia de cultivos ilícitos y las rutas del tráfico de cocaína, la reina blanca que había querido gobernar Colombia. Pero sucede que allí lo que verdaderamente reinaba era el desgobierno y no la droga. La permisividad del Estado con el fenómeno y el olvido expreso de esos territorios los hacía, en primera instancia, culpables por omisión.

El ejército era el único del *status quo* que solía portarse por esas zonas remotas, y lo hacía solo cuando quería apuntarse un éxito militar, como el del 29 de agosto de 2019. Con esa acción se vitorearon a sí mismos por darle de baja a un alto cabecilla de los grupos escindidos de las FARC, alias Giraldo Cucho y a otros 14 rebeldes. El bombardeo fue catalogado de «meticuloso e impecable» por el presidente Duque y resulta que poco tiempo después se descubrió que habían muerto, como conse-

cuencia del ataque, ocho menores de edad. Y cuando le preguntaron sobre el tema al mandatario, se hizo el sueco con un «¿de qué me hablas, viejo?» El «error» le costó el puesto al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el resto tan campantes como antes hasta la próxima metedura de pata.

Y mientras, en lo intrincado del monte marginado, no pocos campesinos se veían obligados a ser parte de la cadena de la droga. Eran los cultivadores, el eslabón débil que no se enriquecía, apenas sobrevivía con la coca porque no había más opción. Y eran los que salían a oponerse a la solución del gobierno: aspersiones con glifosato para cumplir otro «plan» de supuesta erradicación de cultivos. Y si se oponían, había que «convencerlos». No importaba que en el Acuerdo de Paz las aspersiones hubiesen quedado prohibidas, ya sabemos por dónde se pasaban Duque y compañía el texto negociado. Esas 300 y tantas páginas que se redactaron en La Habana, para luego estar engavetadas, irrespetadas, incumplidas.

Siguiendo con las víctimas, estaban los que no guardaban relación con el narco y hasta ayer, hasta antes de morir, eran defensores ambientalistas; o los indígenas que luchaban porque una transnacional no les quitara la tierra y de pronto se convertían en un triste titular más. ¿También en estos casos eran culpables los capos mafiosos?

¿Y a los opositores políticos en Colombia quién los eliminaba? A esos aspirantes a cambiar la podredumbre institucional, la «mermelada», como se le dice a sobornar a diestra y siniestra. Aquí el peso de la historia colombiana no deja otra opción que pensar que continuaba siendo práctica común, hasta que se demostrase lo contrario, matar a todo político que no se prestase al juego. Esto ha sido así desde los tiempos

inmemoriales de la violencia partidista de los años 40, la que precisamente provocó el surgimiento de las guerrillas.

En esta empresa, los que han sobrecumplido «el plan» han sido los paramilitares, bueno, Duque corregiría la oración y diría «las bandas criminales», porque papá Uribe acabó, según él mismo, con el paramilitarismo en Colombia. El tan «querido» Uribe creó a esa gentuza para que hiciera el trabajo sucio que no podía seguir haciendo descaradamente el ejército, el de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales, y después se inventó un pacto de desarme con ellos.

Lo cierto es que los paramilitares siguieron fungiendo como un ejército paralelo e ilegal, al servicio de intereses poderosos, de narcos y políticos prácticamente por igual, y no por cuenta propia. Continuaron haciendo de las suyas a golpe de secuestros, extorsiones, y la especialidad de la casa: muerte por encargo, mientras más cruel, mejor se cotizaría; y como testigos, una Colombia rural entera los contemplaba y sufría. Y no se trataba de iniciativas propias o cuestión de ideología, había dinero en abundancia que los compulsaba.

No por gusto, el «santo» de Uribe acumulaba unas ¿cuántas? causas abiertas en su contra, pero ya para que alguna de éstas llegase a feliz término y fuese juzgado y declarado culpable, había que sanear el sistema judicial colombiano, entre otras instancias de poder.

Justamente, reforma judicial y política, para no más muertos y no más impunidad para sus autores, ni para los que mandaban a matar ni para los que ejecutaban a sangre fría, fue otro de los consensos del dichoso e irrespetado Acuerdo de Paz de La Habana. El mismo acuerdo que logró el impensable primer estrechón de manos entre los entonces rostros de la guerra: Juan Manuel Santos y Timochenko. Para que tres años y más des-

pués de firmar la paz, prometer entendimiento y respeto por lo pactado, Timochenko sufriera un atentado, frustrado por sus escoltas y la policía, también a inicios de 2020. Y es que los desmovilizados de las FARC se habían sumado a la lista de los blancos de muerte.

El que fuera jefe máximo de las FARC cuando estaban uniformados en la clandestinidad y luego presidente del partido FARC, en legalidad, pudo haber sido asesinado también en el enero mortífero de 2020. No pasó. Salió ileso. Pero por ese entonces, otros 200 guerrilleros no habían podido vivir para hacer el cuento después que salieron de sus selváticos escondites.

Entregaron las armas, cuando no estaban convencidos de que el Estado les cumpliera, como no les cumplieron a todos los guerrilleros que en el pasado confiaron en promesas de paz y reconciliación, y ahora los cazaban igual que pasó con los desmovilizados del M-19, o los agrupados en Unión Patriótica. Esta vez, el exterminio era a cuentagotas para no levantar demasiado revuelo. Uno hoy, otro mañana, alternando entre líderes sociales y exguerrilleros.

«Se matan entre ellos, los disidentes le pasan la cuenta a los reincorporados a la sociedad». Era la versión que se vendía barata. «Cosa de retaliación», la palabrita de orden, dígame por venganza o para que no hablasen demasiado los venidos a hombres de bien. Y sí, ha habido represalias de los rearmados hacia sus antiguos aliados, incluso ajustes de cuenta de viejos enemigos de clanes rivales con los ahora desmovilizados. Pero aquí también ha tenido su cuota de culpa el Estado que se comprometió a protegerlos y, en cambio, los ha dejado huérfanos de resguardo, incluso, en los espacios de convivencia temporal establecidos por acuerdo para la reinserción social.

Por otro lado, ya ha habido más de un caso en que se ha comprobado la participación de las fuerzas militares en esos aparentes ajustes de cuenta. Si pasó con uno, por qué no pasar con otros. Enemigos por más de medio siglo en el campo de batalla no dejan de serlo con la firma de un papel. Pasarán años para cambiar las mentes de millones de colombianos que tienen metido en las entrañas la imagen más brutal de los otrora insurgentes. Es lo que ha sucedido con mucha de la gente común, o con víctimas de unos y otros, o con los soldados rasos, pero ¿y los que gobiernan?

¿Acaso no fue Uribe el que les dio plomo a más no poder y después, en su condición de presidente en la sombra obligó a su duquecito a desconocer los acuerdos de paz? No debe haber sido nada fácil para el señor Uribe tener tan cerca sentados en el Senado a los «terroristas» de las FARC, como prefirió siempre seguir llamándolos, aunque tuviesen su mismo estatus de congresista.

Que iba a haber guerra sucia después de la firma del acuerdo de La Habana, era previsible, es propia de todo trance bélico hacia la concordia nacional. Pero que un gobierno enemigo declarado del diálogo político, como el que sucedió al presidente firmante de la paz en Colombia, hiciera de esa matanza deshonesto su plan de cabecera o que mirase hacia otro lado cuando el muerto lo ponía otro, eso sí podía catalogarse de impunidad con corbata en las narices del mundo.

Samper: «Nos asomamos a la paz y no queremos devolvemos a la guerra»

Entrevista al expresidente colombiano Ernesto Samper. Junio, 2020.

Las relaciones entre Colombia y Cuba se enrarecieron desde la llegada al poder de Iván Duque y entraron en una fase de tensión máxima tras la petición de extradición de los guerrilleros del ELN que se encontraban en La Habana como parte del fallido proceso de negociación con esa insurgencia; más que un pedido se convirtió en una exigencia que la administración colombiana antepuso al sentimiento de gratitud que le debía a la isla por sus aportes a la paz. El expresidente colombiano, Ernesto Samper, fue uno de los primeros en condenar la actitud de Duque de querer empañar los buenos oficios de Cuba como garante de las conversaciones con las FARC y el ELN.

Presidente Samper, ¿es cierta la imagen que quiere posicionar la administración Duque de que el gobierno cubano protege a «terroristas» guerrilleros o se trata del estricto ejercicio de apego a los compromisos de garante como las autoridades de la isla aseguran?

La posición del presidente Duque no representa en lo absoluto la posición de todos los colombianos. Es más, existe una comisión asesora de relaciones exteriores, en la cual participamos los expresidentes por derecho propio y le puedo asegurar que la mayoría de los expresidentes estamos totalmente en desacuerdo con el camino que ha seguido el presidente Duque al desconocer los méritos que tiene Cuba, y por los cuales le estaremos eternamente agradecidos, al servir de anfitrión y al prestar su casa, no solamente para la negociación de los acuerdos

con las FARC, que permitieron llegar al final del conflicto con esta organización en lo que se llaman aquí los acuerdos de La Habana, sino también en haber aceptado continuar las negociaciones que se comenzaron con el ELN en Quito y continuaron en Cuba cuando el gobierno ecuatoriano lamentablemente dejó de ser anfitrión de esas negociaciones.

Esas negociaciones están enmarcadas dentro de una normatividad internacional que no se la inventó ni Cuba ni se la inventó Noruega, ni los países facilitadores. Y en esa normatividad se establece claramente que, cuando un país sirve de facilitador o de anfitrión de unas negociaciones, hay unos protocolos. Primero, para que la gente que va a sentarse a negociar pueda llegar al sitio sin ninguna dificultad. Segundo, para que se respeten unas pautas mínimas en la negociación misma y tercero, para que si no se llegara a ningún acuerdo, las partes que sirven de alguna manera de padrinos de la negociación, se aseguren de que puedan regresar las dos partes en la mesa tranquilamente a su sitio de origen. Ese es el protocolo que firmó el Estado colombiano, en el gobierno del presidente Santos, y que fue lamentablemente desconocido por el gobierno del presidente Duque, como si él no representara en este mismo momento el mismo Estado que firmó los mismos acuerdos. Y por eso, nosotros no acompañamos la decisión del presidente Duque de solicitar la extradición de unos negociadores (los del ELN) que regresarían a Colombia a ser sometidos a un juicio en el cual ni siquiera tendrían las garantías mínimas para defenderse. En ese sentido, no estamos de acuerdo con el desconocimiento de los protocolos.

Al esfuerzo fallido con el ELN le anteceden más de cuatro años también de gestión cubana como garante entre la administración Santos

y las FARC, cuyo desempeño ha sido ampliamente elogiado dentro y fuera de Colombia. ¿Podría citar ejemplos concretos que ilustren la conducta de Cuba en los momentos más críticos de las negociaciones?

Son muchos los episodios. Recordamos con especial cariño en estos momentos al embajador cubano (Iván) Mora, que fue la persona que estuvo todo el tiempo acompañando el proceso conjuntamente con la cancillería cubana. En temas como, por ejemplo, la aprobación del sistema de justicia transicional, que en determinado momento encontró muy enfrentadas a las partes, fue definitiva la intervención del gobierno cubano porque aquí estamos en un nuevo sistema de justicia que es la justicia para la paz. Lo que queremos no es solamente imponerle sanciones a la gente sino que, aquella gente que voluntariamente aceptó dejar las armas como lo aceptaron los más de 12 000 combatientes de las FARC, convertirse en partido político y buscar a través del Congreso de la República lo que antes estaban buscando a través de la lucha armada, a esa gente se le tiene que respetar estas garantías y ese era un punto fundamental en los acuerdos, que finalmente se logró superar a través de un sistema de justicia transicional que hoy día está operando en el mundo como un sistema ejemplar para todos los procesos de paz.

De la misma manera, La Habana jugó un papel muy importante en la aproximación de las Fuerzas Armadas con los Comandantes de las FARC. Imagínese usted la dificultad, después de estar 50 años echándose bala en el monte, sentarlos en una misma mesa a convenir unos términos de lo que puede ser la paz en Colombia. Entonces, la intervención de Cuba no solamente fue servir de anfitrión, también sirvió de facilitador. En algunas ocasiones, aunque no estaba escrito, de mediador y lo hizo contando siempre con el apoyo de Noruega porque fue la pareja de países (garantes), Cuba y Noruega, los dos que de

alguna manera impulsaron estas negociaciones con el apoyo de otros países muy importantes de la región; hay que mencionar el caso de Venezuela con la que también han sido injustos en el tratamiento que le han dado, el caso de Chile, el caso de Brasil, que también eran países facilitadores, no estaban en la mesa pero facilitaban las situaciones.

Yo creo que si usted le preguntara en este momento a los colombianos que en un 80% han apoyado el proceso de paz, cuál es el papel que ha jugado Cuba, yo diría que más del 80 le diría que ha sido el papel de un país amigo, de un país comprometido con la paz y que es un país al cual no se le puede hacer esta traición que en términos internacionales se conoce como el delito de perfidia. Parece un bolero pero es simple y sencillamente desconocer un acuerdo que se ha firmado de buena fe. Y Colombia cometió el delito de perfidia y le sirvió el plato a los Estados Unidos al considerar como terroristas a los negociadores (del ELN) para que Estados Unidos colocara nuevamente a Cuba como uno de los países amigos del terrorismo.

Quienes conocemos el proceso reciente de Cuba, sabemos que el primer país que ha rechazado el terrorismo en la región es Cuba. Sabemos que Cuba desecha, actualmente, cualquier posibilidad, inclusive, de lucha armada como forma de llegar al poder. En ese sentido, la única explicación que hay es que Estados Unidos saca todas esas «certificaciones» sobre narcotráfico, derechos humanos, sobre países terroristas, simplemente, para dividir el mundo entre sus amigos y sus enemigos. Y los que no piensan como ellos, por fortuna para muchos de nosotros, como el caso de Cuba, pues simplemente son considerados como enemigos. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad.

Como usted ya señalaba, la presencia de guerrilleros elenos en suelo cubano vino a ser justificación perfecta para que Estados Unidos incluyera a Cuba en una lista selectiva de países que según su prisma «no colaboran con la lucha antiterrorista». ¿Cómo entender la lógica de los hechos: Duque actuó bajo órdenes de Estados Unidos y le sirvió en bandeja el pretexto o la casa Blanca le dio el «espaldarazo» a Bogotá como dijo el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos?

Sería demasiada ingenuidad pensar que es una simple coincidencia que Colombia pide a los negociadores como terrorista y Estados Unidos apoya su decisión catalogando a Cuba como país amigo del terrorismo internacional, basado en que Cuba se niega a extraditar a los negociadores; y se tenía que negar porque si Cuba no se niega, si los hubiera extraditado, en este momento habrían perdido toda su legitimidad los procesos, 80 o 90 procesos de paz que están teniendo curso en el mundo. Quién va a querer ir a otro país a hacer la paz si sabe que, si no está de acuerdo con su contraparte, lo devuelven al país a una cárcel o a ser víctima de un sistema de justicia injusto.

De tal manera que es demasiada «coincidencia» y lamento que el gobierno Colombia haya servido de excusa o se haya prestado deliberadamente, si lo hizo, para que Estados Unidos apoyara ese argumento que, de una manera inexplicable, el Comisionado de Paz de Colombia, que aquí entre nosotros es más un comisionado de guerra que de paz porque no ha tenido ni sólo gesto hacia la paz, lo celebra como un espaldarazo. ¡Por Dios! Aquí lo que hubo fue un incumplimiento muy grave en términos internacionales de unos protocolos que tenía que respetar Cuba y que tenía que honrar el Estado colombiano y no lo hizo.

¿Qué solución hay para la salida de los guerrilleros del territorio cubano? ¿Hay algo que a Cuba le falte por hacer?

Si estamos hablando de un bien y de un valor tanpreciado como la paz, con el cual no tenemos derecho a ser pesimistas, yo podría decir que la mejor manera de que los guerrilleros regresen a Colombia, la mejor vía es que se reactiven las negociaciones, si Cuba está de acuerdo en seguir sirviendo de anfitrión; en Cuba o en cualquier otra parte, pero que se reactiven las conversaciones, que lleguen a un acuerdo sobre cuál es la salida política al conflicto armado con el ELN y que se reintegren a la vida civil como lo están haciendo en este momento los más de 12 000 combatientes de las FARC y lo podrían hacer los 3 000 o 4 000 combatientes del ELN. Esa sería la salida perfecta.

Si eso no es, y si el gobierno colombiano insiste en su posición absurda de que este país resuelva a las malas y a través de la guerra, y no a través del diálogo y de la salida política, el conflicto armado que le queda, pues tendría el gobierno colombiano que facilitarle a Cuba y a Noruega, para que ellos devolvieran los negociadores a sus puntos de origen, en los cuales podrían seguir combatiendo y cumplir con su cometido de un conflicto con el cual, por supuesto, los colombianos no estamos de acuerdo, porque queremos una salida política y no seguir con esa guerra loca que en este momento, inclusive, se está reproduciendo en Colombia por la propia actitud del gobierno que no tiene una política de paz.

Teniendo en cuenta que dentro de Colombia hay voces mayoritarias a favor de retomar el diálogo como herramienta de pacificación y no la fuerza, ¿a qué o a quienes responde la conducta de Duque, reacia a reconsiderar el proceso con el ELN?

Hay varios candidatos enemigos. Está, por supuesto, el partido de gobierno que apoya al presidente Duque, que desde el comienzo ha dicho que quería volver trizas el proceso de paz. Ese mismo partido, cuyo jefe, el presidente Uribe señaló que, el camino para conseguir en Colombia la paz, era el camino de la guerra, de la confrontación y de entender que los que estaban del otro lado del conflicto armado eran unos terroristas, como se acaba de confirmar con la solicitud del presidente Duque a Cuba para que extradite a los negociadores del ELN en su condición de terroristas.

También Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. Estados Unidos comenzó a solicitar en extradición a algunos de los negociadores de los acuerdos de La Habana, con la clara intención de trasladar el proceso de paz de Colombia a los Estados Unidos y manejarlo desde allí.

La paz tiene muchos enemigos, enemigos poderosos, pero también tiene muchísimos amigos, empezando por las víctimas, por los 7 000 000 de colombianos que fueron víctimas del conflicto armado y que en su gran mayoría le van a decir a usted que ellos quisieran ver honrada la memoria de sus muertos o satisfecho su dolor, simple y sencillamente, con una garantía de no repetición, que esto no se volviera a repetir.

Son temas muy de fondo acá que tienen amigos y enemigos de lado y lado.

¿Hay algún gesto o postura que podría tener el ELN para que el gobierno colombiano lo percibiese como señal de querer retomar el diá-

logo o es una decisión que está en la cancha del gobierno, el cual no muestra la menor voluntad?

Unas pocas semanas antes de terminar el gobierno del presidente Santos, cuando estaba todavía activa la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, se definieron los términos de lo que sería, primero, el respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, las dos partes se pusieron de acuerdo en respetar el DIH como parte del proceso de negociación y segundo, prácticamente se acordó un cese el fuego bilateral y temporal mientras seguían las negociaciones.

Si el ELN quisiera hacer algún gesto ahí, en esos dos acuerdos, existen una serie de compromisos que podrían poner fácilmente en marcha o reiterar su compromiso en relación con los secuestros, en relación con el reclutamiento de menores, en relación con la protección del medio ambiente. Y el gobierno también, porque el gobierno también ha sido parte responsable del conflicto. El gobierno también podría, de alguna manera, reiterar su voluntad. Aquí tal vez esa es la palabra clave, aquí lo que ha faltado es voluntad.

Yo sí registro en el ELN una voluntad de paz que lamentablemente no encuentro en el gobierno. Pero si ellos aceptaran solamente sentarse a la mesa y revisar los términos de esos dos acuerdos, no estaríamos en esta situación equívoca que estamos, en que todo el debate se hace a través de la prensa, a través de las redes y el gobierno pide al ELN que haga, precisamente, lo que debe ser materia del acuerdo con el gobierno. Es como si usted quisiera comprar una mercancía que yo tengo y le digo, bueno, nos ponemos de acuerdo, pero eso sí, yo no le voy a decir el precio. Se lo digo en el momento en que usted me de claridad de que me lo quiere comprar.

En este momento, la paz está en un limbo con el ELN. Yo creo sinceramente, porque hemos vivido lo que es estar en paz y no estar en paz, que vale la pena hacer un esfuerzo para salvar el proceso y queremos seguir contando con la buena voluntad de Cuba y del pueblo cubano, de los noruegos, de los países de la Unión Europea que hoy día están en el grupo de contacto que también está buscando una salida. Hay una voz unánime para que siga el diálogo y creo que, si hay voluntad de parte y parte, los otros temas se arreglan.

Una eventual reanudación de ese diálogo truncado pasaría, en primera instancia, por la valoración de lo que ha sido el acuerdo con las FARC, un medidor imposible de obviar para el ELN. ¿Qué se ha cumplido y qué no?

El acuerdo se ha cumplido en unas partes muy importantes. Por ejemplo, los compromisos de desmovilización de las FARC se cumplieron totalmente. Las FARC entregó más de un arma por cada combatiente, se desmovilizó, se concentró en unos centros de reintegración, solicitó sus amnistías, presentó su voluntad de colaborar con la justicia transicional, se convirtió en partido, está actuando dentro del Congreso. Eso era una parte fundamental del acuerdo que se cumplió.

Se está cumpliendo, aunque con grandes enemigos todavía, la columna vertebral de esto que llamaban la justicia transicional, que es lo que nos va a permitir pasar del conflicto al postconflicto, a través de tres elementos: la verdad, la justicia y la reparación, que los actores armados, tanto en las Fuerzas Armadas como en la guerrilla, cuenten la verdad de lo que hicieron, en función de las víctimas. Segundo, que el sistema de justicia sobre esa verdad establezca unas penas no privativas de la libertad y tercero, que eso nos permita la reconciliación

a través de un compromiso de no repetición. Esa justicia, esa columna vertebral, que tiene una Comisión de la Verdad, que tiene un Tribunal de la Paz y que tiene una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, está funcionando, con dificultades porque el gobierno le ha quitado recursos económicos; el partido del presidente Uribe, Centro Democrático, la sigue atacando, pero ahí está.

En lo que estamos muy mal es en el cumplimiento de los compromisos, especialmente, los que tienen que ver con aquellas personas que fueron víctimas del conflicto armado. Están asesinando casi un líder social y medio diariamente. ¿Qué están pidiendo estos líderes sociales? Que les cumplan los programas de sustitución de cultivos ilícitos para no tener que ser víctimas de la fumigación, de la destrucción militar de unos cultivos sin tener una sustitución. Esos acuerdos no se están respetando. Están pidiendo que les den las tierras que les ofrecieron en la negociación de La Habana, no hay una sola propuesta en materia de tierras. Están pidiendo que le respeten los derechos a las víctimas con su reparación, no se está reparando suficientemente a las víctimas.

Entonces eso que es el meollo, que es la parte de la satisfacción social, la presencia social del Estado en las zonas que fueron abandonadas y que por 50 años no tuvieron sino presencia militar, eso no se está cumpliendo. Y eso le está haciendo un gran daño a la paz porque está ocasionando víctimas. Ya son 200 las personas desmovilizadas de las FARC que han sido asesinadas. Entonces, estamos lamentablemente viendo que en el talón de Aquiles del proceso de paz es donde está concentrado el mayor daño social que puede hacer el incumplimiento.

El gobierno del presidente Duque lamentablemente ha aprovechado la pandemia que se está viviendo en este momento en

el país para quitarle recursos a la paz, para hacer incursiones de destrucción militar de los cultivos ilícitos, persiguiendo a la gente, no se está haciendo nada consistente para evitar el asesinato de los líderes sociales y están prosperando otra vez los grupos paramilitares.

Si usted me hubiese hecho esta misma pregunta hace seis meses, yo le hubiese contestado, como han contestado algunos institutos internacionales, que el vaso de la paz en Colombia está medio lleno, hoy le tendría que contestar que está más vacío que lleno.

¿Cómo se ve Cuba a lo interno de Colombia? ¿Ha habido algún cambio en la percepción de los colombianos sobre la isla después de sus oficios como garante de la paz?

En primer lugar, la imagen que tiene el país (Colombia) no solamente de Cuba como estructura compleja, sino de los cubanos y del concepto de solidaridad de los cubanos, y de los médicos y de la gente que está colaborando en medio de esta crisis, es una imagen favorable. Esa imagen se ha reforzado además por múltiples viajes de los colombianos a disfrutar de la isla, y a conocer de cerca la isla y la ventaja turística más importante que es su gente.

También hay un culto de admiración por Fidel, por los líderes de la Revolución, que nos incluye a generaciones que ya nos pueden considerar como generaciones de salida, como nos están considerando ahora en la pandemia.

Yo creo que la gente ha visto que el comportamiento de Cuba ha sido un comportamiento claro. No es la primera vez que Cuba se presta para servir de anfitrión de procesos de paz de Colombia. Yo diría que casi todos los procesos que intentamos los que hemos sido presidentes de este país en el pasado

tuvieron como referente a Cuba. Yo hice un intento de proceso con el ELN en Cuba que lamentablemente no funcionó. Pero hubo el primer proceso que se hizo con las FARC, en fin, Cuba siempre ha estado dispuesta antes, y durante el tiempo que estuvo (la negociación con las FARC) veíamos todos los días la presencia activa de los funcionarios de Cuba, discreta, no era para dar declaraciones, no era para robarse el *show*, era una presencia discreta, era un acompañamiento.

Y finalmente, con la firma de los acuerdos este país se asomó a la paz. Durante el tiempo que duraron las conversaciones de la paz en La Habana, sin haberse firmado los acuerdos, nos economizamos 5 000 muertes; los secuestros bajaron a 20 cuando estaban en 800; las minas antipersona que volaban las piernas de dos personas diariamente, bajaron a 15 o 20 a lo sumo en todo este tiempo. El hospital militar que era donde iban todas las personas de las Fuerzas Armadas que eran víctimas del enfrentamiento armado quedó prácticamente desocupado. Nosotros nos asomamos a la paz y no queremos devolvernos a la guerra, porque sabemos que los que pagan los platos rotos de la guerra no son los que están aquí, en Bogotá, echando teoría, son los que están en el Catatumbo, los que están en el Chocó, los que están en el Putumayo, en las zonas donde lamentablemente se está produciendo una especie de metástasis del conflicto armado, porque el gobierno, que se ha comprometido como Estado a mejorar la presencia social en esos 280 municipios donde estaban las FARC, lo que ha reforzado es la presencia militar y no la presencia social. Y así lamentablemente no podemos salir adelante.

Santos: «Cuba hizo posible un proceso que parecía imposible»

Entrevista al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.
Junio, 2020.

Juan Manuel Santos, el presidente colombiano que logró el Acuerdo de Paz que todos sus antecesores en más de medio siglo buscaron fallidamente, alzó su voz para reivindicar a Cuba, ahora como exmandatario, pero con todo el peso de su experiencia como uno de los máximos responsables del éxito de la negociación. Y es que el papel de la isla como garante del proceso colombiano de paz, se había puesto en tela de juicio a raíz de los ataques del gobierno de su sucesor, Iván Duque, y sus emplazamientos públicos sobre la presencia en La Habana de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el manejo del tema por las autoridades cubanas.

Esta era la entrevista que había quedado truncada cuando Santos visitó La Habana en 2016. Un primer cuestionario para la ocasión todavía rondaba los archivos de mi computadora. Se imponía retomar interrogantes de aquel y conjugarlas con incertidumbres nuevas. Cuando ejercía como mandatario, se cuidaba mucho para emitir juicios sobre el proceso de paz. Después de retirado del puesto, había dejado engavetado todo activismo político. Podía descansar del escrutinio público constante y había hecho un pacto no escrito en el que se juraba no desgastarse en críticas contra el sucesor. Cuba ameritaba la excepción.

Presidente Santos, durante las negociaciones con las FARC y también con el ELN – diálogos que se iniciaron también bajo su gestión – ¿considera que la diplomacia cubana ha sido parcial o ha favorecido

en algún momento a una guerrilla u otra en detrimento del gobierno colombiano?

No. Cuba y Noruega cumplieron un papel muy constructivo y muy positivo, donde todo lo contrario, lo que quisieron fue siempre ayudar a que se llegara a unos acuerdos y, cuando había dificultades, ellos por iniciativa invitaban a los países acompañantes, porque también estaban acompañando el proceso Chile y Venezuela, pero los garantes eran Noruega y Cuba. Creo que cumplieron un papel muy positivo y ayudaron mucho; un proceso que parecía imposible, lo hicieron posible.

¿Pudiera citar ejemplos puntuales de la intervención de los garantes cubanos en los momentos críticos de la mesa de conversaciones con las FARC en La Habana?

Momentos difíciles en una negociación tan difícil hubo muchísimos. Muchísimos momentos donde las dos delegaciones se enfrentaban, amenazaban con levantarse de la mesa, había desacuerdos y ahí es donde los garantes cumplían un papel muy específico y muy constructivo. No le puedo dar un ejemplo concreto porque hay muchísimos, pero por ejemplo, el tema de la justicia que era uno de los temas más complejos, el que más tiempo se llevó y el que más dificultades tuvo, porque, al fin y al cabo, en un proceso de paz, la decisión más importante es dónde traza uno la línea entre justicia y paz. En ese momento tuvimos muchos desacuerdos con la guerrilla hasta que finalmente logramos ponernos de acuerdo y fue la primera vez que yo viajé a Cuba y dónde me encontré por primera vez con el Comandante de las FARC, con Rodrigo Londoño, en Cuba. Fue cuando firmamos el acuerdo sobre justicia; entonces fue cuando se desarrolló todo el proceso porque ese era el punto fundamental.

Justamente, el pasado 23 de junio se cumplieron 4 años de esa visita suya a La Habana y del primer estrechón de manos con su entonces adversario de guerra, Timochenko, el líder de las FARC, con la complicidad mediadora de Raúl Castro. Esa foto pasó a la historia como un símbolo de paz.

Yo me acuerdo que Raúl Castro nos agarró de la mano y prácticamente nos obligó a darnos la mano. Pero antes de esa reunión nos había dejado solos a Rodrigo Londoño y a mí, primera vez que nos veíamos. La verdad que fue una reunión bastante interesante que rompió mucho el hielo, donde hablamos sobre el compromiso de ambos para lograr la paz y yo recuerdo que le dije: «mire, Comandante, usted y yo, a partir de este momento, estamos en la misma barca y remando en la misma dirección, que es la dirección de la paz. Vamos a tener muchos enemigos, vamos a tener muchos obstáculos, pero si usted está comprometido, yo estoy comprometido, si es que queremos sacar esto adelante.» Esa fue la primera conversación que tuvimos porque Raúl Castro nos empujó a una sala y él se fue y nos dejó solos.

¿Valió la pena que Raúl Castro les hiciera esa encerrona?

Yo creo que sí. Ahí se generó algo muy importante en cualquier negociación que es una química positiva, una confianza mínima entre dos personas que estábamos en bandos totalmente contrarios y, para llegar a los acuerdos, ese mínimo de confianza y esa química personal son muy importante.

Después de la firma de los acuerdos de paz, usted estuvo apenas un año y medio en la presidencia, por lo cual la implementación quedó a medias y en manos de la gestión posterior, para nada amiga de este

pacto. ¿Qué se ha logrado concretar y cuánto falta? ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío si tuviera que valorar el destino del acuerdo?

Este acuerdo fue el más ambicioso que se haya firmado en la historia. Un acuerdo que tiene un alcance mucho mayor que el que, normalmente, acuerdos de este tipo tienen. Por lo general, hablan simplemente de desarme, de la reincorporación de la insurgencia a la vida civil, algunos tienen un elemento de justicia, pero este acuerdo fue mucho más allá. Por eso le dimos 15 años para que se cumpliera. Por ejemplo, tenemos unos planes de desarrollo en las zonas que fueron afectadas por la guerra durante tanto tiempo, para que la población de esa zona tenga un mínimo nivel de vida. Esos planes fueron negociados con las comunidades, lo cual es algo que también fue *sui géneris*. Reitero, fue un acuerdo muy ambicioso. Yo diría que la parte normal de los acuerdos se cumplió y se cumplió muy rápido: lo referente a la entrega de armas, la reincorporación a la vida civil y a la vida política, y la creación de las instituciones que están encargadas de la implementación del acuerdo. Todo eso se efectuó con bastante rapidez.

El nuevo gobierno fue muy reacio al acuerdo. El presidente Duque y su partido fueron muy críticos del acuerdo, pero nosotros dejamos el acuerdo blindado jurídicamente. La Corte Constitucional emitió un fallo donde dice que, en los próximos tres gobiernos, no puede emitirse ni aprobarse ninguna ley o ningún decreto que vaya en contra del cumplimiento de los acuerdos; eso es algo muy importante porque jurídicamente los deja blindados.

Ha faltado voluntad política en acelerar aspectos como los planes de desarrollo, la sustitución de cultivos ilícitos de forma voluntaria; inclusive, el cumplimiento de un aspecto concreto como es la creación de las circunscripciones especiales para que

estas zonas sean representadas en el Congreso, en la Cámara, eso falta todavía. Yo espero que, con la presión de la población de esas zonas, con el mandato constitucional y la presión de la opinión pública internacional, siga avanzando la implementación y que avance a más velocidad.

Entonces, es optimista sobre el futuro del acuerdo.

Yo sí soy optimista. La guerrilla de las FARC no va a volver al monte. Hay unos disidentes que se regresaron por diferentes razones. Eso siempre sucede en todos los acuerdos, pero el grueso de los miembros de las FARC está comprometido con el acuerdo, está comprometido con la dejación de las armas y está reincorporándose a la vida civil. Hemos tenido dificultades. Lamentablemente se han asesinado algunos de sus miembros.

En términos generales, soy optimista. Hoy en día, el acuerdo está siendo cada vez más valorado, porque fue un acuerdo muy vilipendiado, muy atacado con mentiras, con toda clase de desinformación y la gente poco a poco se ha dado cuenta que era un buen acuerdo, que era un acuerdo que a Colombia le convenía.

Achaca las deserciones de los guerrilleros a un fenómeno natural en todo proceso de este tipo, pero me gustaría preguntarle en el caso de la vuelta a las armas de Iván Márquez, quien no era un guerrillero cualquiera sino el jefe negociador de las FARC en La Habana, el que logró el texto del acuerdo final junto a su enviado, Humberto de la Calle. ¿Le sorprendió el abandono del acuerdo por parte de Márquez?

Sí, me sorprendió, aunque siempre fue el más difícil de todos los comandantes frente al proceso. Mi opinión es que Iván Márquez está otra vez donde está porque un sobrino de él está en Estados Unidos y está haciendo unas delaciones sobre supuestos negocios que tenía la guerrilla después de haber firmado la

paz. Lo que pasó con Jesús Santrich, su captura, eso puso a Iván Márquez muy nervioso, creo que él se fue por eso.

Los temas que abarcan la justicia y el desarme, que fueron los que más tiempo de discusión entre las partes llevaron, han sido los de más rápido cumplimiento, mientras que asuntos que se resolvieron en la mesa en pocos meses, aún están estancados y sin una implementación real a la vista. ¿Encuentra, como yo, contradicción en esto?

En cuanto al tema de la justicia, efectivamente, se creó el mecanismo, se creó el tribunal especial, está funcionando, y lo que la gente está esperando es que comienzan los fallos; todavía no habido fallos formales.

La comisión de la verdad está funcionando bastante bien, la unidad de búsqueda de los desaparecidos también está funcionando, todo eso va funcionando bastante bien, y usted tiene razón, tenemos que darle mucha más velocidad a algo que no era para las FARC, era para el país: el desarrollo rural. Nosotros llevamos 200 años en Colombia desconociendo el campo y ahí es donde está concentrada la pobreza, el subdesarrollo. Lo que tenía este acuerdo era una reforma rural, unos planes ambiciosos para llevarles desarrollo a esa zona.

Ha faltado también lo de la sustitución de cultivos ilícitos, un asunto que ha tenido la oposición, inclusive de Estados Unidos. Algo insólito, Estados Unidos dice que no puede financiar eso (la sustitución de cultivos ilícitos) porque a los campesinos los considera como miembros de las FARC y considera además que las FARC siguen siendo parte de la lista de terroristas a pesar de que ya han entregado las armas. Entonces, por un lado, le exigen a Colombia que luche contra el narcotráfico y que luche contra los cultivos ilícitos, pero por otro lado frenan

la financiación a esa transición de los cultivos ilícitos a los cultivos lícitos.

Otra cosa muy importante, la única forma, y eso está comprobado, que los campesinos van a dejar de cultivar coca es si les dan una alternativa. Ellos no van a permitir que sus hijos se mueran de hambre y, si no tienen alternativa, los narcotraficantes los van a utilizar para seguir cultivando coca. Ahí el gobierno y la comunidad internacional tienen que hacer un esfuerzo mayor para que ese punto del acuerdo se cumpla a cabalidad.

Ha tocado dos elementos importantes que dan pie a mi siguiente pregunta: Estados Unidos y terrorismo. Estados Unidos acaba de incluir a Cuba en una lista selectiva de países que, según Washington, «no cooperan plenamente con la lucha antiterrorista». La excusa ha sido dada por el gobierno colombiano de Iván Duque, al tildar de «terroristas» a los negociadores del ELN y exigirle a Cuba su extradición. ¿Usted considera que Cuba es un país terrorista, que practica o defiende el terrorismo?

Yo me he mantenido muy al margen de la política, pero a raíz de ese tema yo di una entrevista, recientemente, a un medio muy importante en Colombia, donde dije que me parecía totalmente injusto con Cuba. Cuba lo que ha hecho en los últimos años, en las últimas décadas, es ayudar a que desaparezcan los conflictos armados. Desde la época, en el caso colombiano, de Andrés Pastrana, Cuba estuvo presente ayudando. Fidel, en ese entonces, me acuerdo que hizo una declaración en la que afirmaba que la lucha armada ya estaba mandada a recoger.

Durante la presidencia de mi antecesor, de Álvaro Uribe, Cuba también ayudó, inclusive acogió las conversaciones que tuvo el gobierno de Uribe con el ELN. Y ¡qué hablar con mi gobierno! Lo que ha hecho Cuba es todo lo contrario, lo que ha

hecho Cuba es ayudar a que esos conjuntos armados desaparezcan y ayudar a conseguir una paz que a todos nos conviene.

De manera que a mí me ha parecido muy injusta la inclusión de Cuba como un país que está cobijando o defendiendo el terrorismo por el hecho de que, en este momento, tenga a los negociadores del ELN allá. Y si están allá es porque el gobierno colombiano le pidió Cuba que lo ayudara en esas negociaciones. El actual gobierno colombiano los considera terroristas (a los negociadores del ELN) pero eso no quiere decir que el gobierno cubano esté defendiendo el terrorismo, sino que el gobierno cubano tiene que cumplir con los protocolos que se firmaron, precisamente, para que los del ELN pudiesen viajar a Cuba o a cualquier otro país. Lo que está haciendo Cuba es cumplir con los protocolos.

La ruptura de la mesa de diálogo con ELN se produjo bajo la presidencia de Duque, pero el inicio de esa negociación fue posible dentro de su gestión. Es así que usted conoce la letra chica de lo estipulado en la agenda que rige las conversaciones. ¿Podría detallar qué dicen los protocolos de ruptura y si Cuba está cometiendo alguna violación al respecto?

No sólo en el caso de Cuba. En cualquier proceso de paz, se firman unos protocolos para que, si hay una ruptura de las negociaciones, si no hay éxito en las negociaciones, se le den las garantías a la insurgencia para que se devuelva a su país de origen, a su sitio de origen, porque de otra forma nadie iría a otro país a ninguna negociación, si tiene el riesgo de que, si esa negociación falla, los capturen ahí y los metan a la cárcel. Entonces, los protocolos se hacen, precisamente, para facilitar los procesos de paz. Lo que hizo Cuba fue firmar unos protocolos como garante, con Noruega, —Noruega también los firmó—

con el ELN y con el gobierno de Colombia, para, en el caso de que se rompieran las negociaciones, se le dieran las garantías suficientes a la guerrilla, en este caso al ELN, para que se regresara a Colombia.

¿Existe alguna probabilidad de que se retome el diálogo con el ELN, en este gobierno o en otro? ¿Ve una salida política o definitivamente la permanencia de la opción armada con esta guerrilla aún en activo?

Nosotros estuvimos a punto de firmar con ellos (con el ELN) un cese el fuego y teníamos, más o menos, la agenda establecida.

El nuevo gobierno decidió que no quería continuar con esas negociaciones. Yo creo que esas negociaciones, si hay voluntad política, se pueden retomar y creo que un acuerdo es factible. En eso soy también optimista, pero para bailar se necesitan dos y ninguno de los dos en este momento tiene muchas ganas de bailar, pero eventualmente van a llegar a una mesa porque es la única forma de acabar con este conflicto con el ELN.

¿Ve a Cuba siendo parte nuevamente de otro esfuerzo conciliatorio entre el Estado colombiano y la insurgencia elena o cree que se impondrá este alejamiento diplomático que ha repercutido además en un cambio en la política exterior colombiana hacia Cuba?

Yo, por experiencia propia, puedo decir, sin lugar a dudas, que es mucho más favorable para todo el mundo un acercamiento, tener buenas relaciones. Acuérdense cómo estaba yo cuando llegué a la presidencia. No teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela ni con Ecuador. Éramos un país casi que aislado en América Latina, y establecimos puentes, diálogos, sin necesidad de sacrificar nuestros principios. Teníamos diferencias, yo con Chávez tenía muchas diferencias, pero ambos teníamos también muchos comunes denominadores.

De manera que soy siempre partidario de mantener el diálogo, mantener las buenas relaciones, y si hay diferencias, las diferencias como en cualquier matrimonio o amistad, se pueden ir resolviendo amigablemente. Siempre he sido partidario de acercamientos, de tener buenas relaciones.

Si tuviera que darle un mensaje a todos aquellos que se dejan seducir por el discurso del uribismo y del presidente Duque sobre Cuba y su participación en el proceso de paz, ¿qué les diría?

No solamente a ellos, sino al mundo entero. Inclusive, hay muchos mandatarios europeos, en este momento, pidiéndole a Cuba que se mantenga como garante del proceso de paz, que es lo que la comunidad internacional quiere, porque a todos nos consta que el papel de Cuba ha sido muy constructivo y que es mucho mejor tener a Cuba ayudando a resolver los problemas, como ayudó a resolver los problemas con las FARC, que tenerla del otro lado, saboteando o totalmente indiferente. Cuba puede aportar, Cuba puede ayudar, por eso es mucho más positivo tender puentes y una buena relación con Cuba.

El abrazo de tres

Había acabado de recordar la fecha durante la entrevista con Santos, el 23 de junio de 2020 se cumplieron cuatro años del primer estrechón de manos de dos hasta entonces enemigos de batalla que habían decidido apostarle a un entendimiento pacífico con el propósito de parar el fuego cruzado. No fue espontáneo, más bien esquivo y solo posible por un tercero conciliador, el entonces presidente cubano Raúl Castro. Ese día, Juan Manuel Santos y Timochenko, como máximos representantes de dos fuerzas contrapuestas: el Estado colombiano y la más grande guerrilla del país, anunciaron al mundo la noticia más esperada en torno a Colombia: el fin del conflicto armado, que se iniciaba con un cese inmediato y definitivo del fuego entre los actores hostiles hasta tanto no se rubricase la paz en su conjunto, se hiciese efectivo el desarme y adiós a la guerra; hoy diríamos con menos entusiasmo que entonces, adiós a «esa» guerra.

Se llegaba ese día en La Habana al acuerdo más importante y último dentro de lo que sería el *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Dos meses después, el 24 de agosto de 2016, vería la luz este valioso instrumento, conseguido tras poco más de tres años y nueve meses de negociaciones públicas, algún tiempo antes de exploraciones y contactos secretos, y muchísimos otros intentos frustrados de diálogo político durante una guerra de incontables víctimas que acumulaba ya más de seis décadas.

Habría después otras dos fechas importantes de sendas ceremonias formales de rúbrica de la paz, la pomposa de Cartagena, pero desechada tras el No que el plebiscito popular le dio al texto consensuado, y la del Teatro Colón en Bogotá, más modesta pero definitiva. Sin embargo, ninguno de los eventos

posteriores al encuentro de Santos y Timochenko en La Habana aquel 23 de junio, fue más estridente, al punto que, cuando del acuerdo de paz se habla, la foto más socorrida es ese abrazo de tres que Castro propició.

También se impone ese evento por sobre los demás por lo inesperado que resultó en medio de una negociación que parecía estancada por entonces, sobre todo después de haber rebasado la fecha límite del 23 de marzo de ese año, un intento fallido por ponerle punto final al diálogo. En segundo lugar, por el apoyo internacional que tuvo con la presencia en la capital cubana de seis presidentes latinoamericanos y del entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y tercero, porque se estaba anunciado por voz de los máximos implicados en el asunto, que las FARC dejarían las armas y con ello terminaría el enfrentamiento armado. ¡Un verdadero notición! Para Santos y los del gobierno, la paz misma, porque así la entendían y pretendían, en la versión reducida de la desmovilización insurgente. Lástima que asuntos mucho más trascendentes consensuados en La Habana no hubiesen recibido las palmas y sonrisas que el silenciamiento de fusiles infundía.

Analizado desde la óptica de los cuatro años transcurridos, es también la rúbrica más importante, a pesar de que entonces era apenas el tercer punto de una agenda de conversaciones de seis acápites, porque ha sido el único cumplido dentro de las más de 300 páginas de compromisos traspapelados.

No sorprendió la no concreción de lo plasmado en blanco y negro, creo que ni a los mismos exinsurgentes, o al menos a los que se vieron las caras con sus adversarios del gobierno. Hubo demasiadas reticencias en el camino de las pláticas para acordar letra por letra. A la postre, parecía demasiado bueno como para ser verdad que el Estado colombiano se hubiese comprometido

con una reforma agraria integral, una reforma política y electoral, la sustitución de cultivos ilícitos en lugar de la erradicación forzada, a fortalecer lo rural y hacerse presente allí donde jamás había pisado un funcionario público. Tras la firma de la paz, esas aspiraciones se redujeron a promesas que esperaban por quorum legislativo, y leyes que se quedaron en proyectos sin los votos suficientes o con tantas modificaciones como para perder su esencia. Mientras, la oposición de ayer, ahora envalentonada en su posición oficialista, decía a sus adentros: «misión cumplida», «buen trabajo», «hemos hecho trizas el dichoso acuerdo». ¡Qué digo trizas! Añicos, polvo, nada.

Era la famosa óptica del vaso medio lleno o medio vacío cuando del cumplimiento de los acuerdos de paz se hablaba. La respuesta iba en dependencia de a quién se le preguntase. ¿Hay paz en Colombia? ¿Se ha puesto en práctica lo pactado? Si tocaba contestar a los del gobierno, a algún que otro funcionario de la ONU o a un ciudadano de las grandes ciudades colombianas, puede que tuvieran una respuesta afirmativa que inmediatamente justificarían con el desarme efectivo de las FARC y su conversión a partido político que ya incursionó en procesos electorales; las miles de muertes que se habían evitado desde entonces; la disminución de la horrorosa práctica del secuestro, tan habitual en el pasado reciente de la nación; y la puesta en práctica del sistema de Justicia Especial para la Paz, el inédito mecanismo para que no hubiese impunidad en los otrora actores armados. Y, justamente, eso que sí se estaba cumpliendo formaba parte del cuerpo del acuerdo rubricado aquel 23 de junio: el calendario para la dejación de armas y las garantías de seguridad para los guerrilleros en su reincorporación a la vida civil y a la legalidad. Todo lo concerniente al *Fin del Conflicto* como subtema, el único punto que verdaderamente interesaba

al gobierno de Santos y al de su sucesor, Iván Duque; y aunque a éste último se le achacaba la no voluntad de paz, desde la misma administración firmante de los acuerdos ya se veía a las claras la intención de engavetar u obstaculizar el resto de los asuntos. Solo que el presidente Santos no lució como el malo, la Corte y el Congreso le hicieron el trabajo de demorar la implementación para que quedara en terreno del siguiente en el cargo.

Si se le hacía la misma pregunta a un excombatiente de las FARC, a un campesino, a un indígena, a una mujer rural cabeza de familia, a un activista político de oposición, a un integrante de organizaciones sociales defensoras de la paz, o a un analista internacional con una visión amplia del fenómeno, la respuesta sobre el líquido del vaso sería bien pesimista. Puede que alguno ni siquiera encontrase rastro de líquido y hay hasta para quien el vaso se quebró. No había guerra declarada, había menos muertos, sí, pero quienes habían dejado de morir eran los soldados y la policía para pasar a ser los ahora rebeldes despojados de fusiles quienes ponían la carne frente al cañón traicionero de los asesinatos selectivos. Y junto a ellos, aquellos indefensos que antes se sentía protegidos por la insurgencia verde olivo allí donde gobernaba el desgobierno. Se acabó la guerra de guerrillas y comenzó la matanza a cuenta gotas en la que «nadie» sabía quién disparaba la bala.

Los blancos preferidos de los asesinos, vale reiterarlo, eran los mismos que exigían que se cumpliera todo aquello prometido: un pedazo de tierra, el título de la que se tenía de manera ilegal, recursos para hacerla producir y no tener que sobrevivir con lo que se daba sin grandes esfuerzos: la coca. Así era en el campo, cuando en la ciudad se exigía parar la corrupción política que minaba las instituciones de gobierno. En las elecciones regionales de octubre de 2019, hubo menos violencia, sí, pero se quitó del medio, a la misma vieja usanza, a aspirantes a alcal-

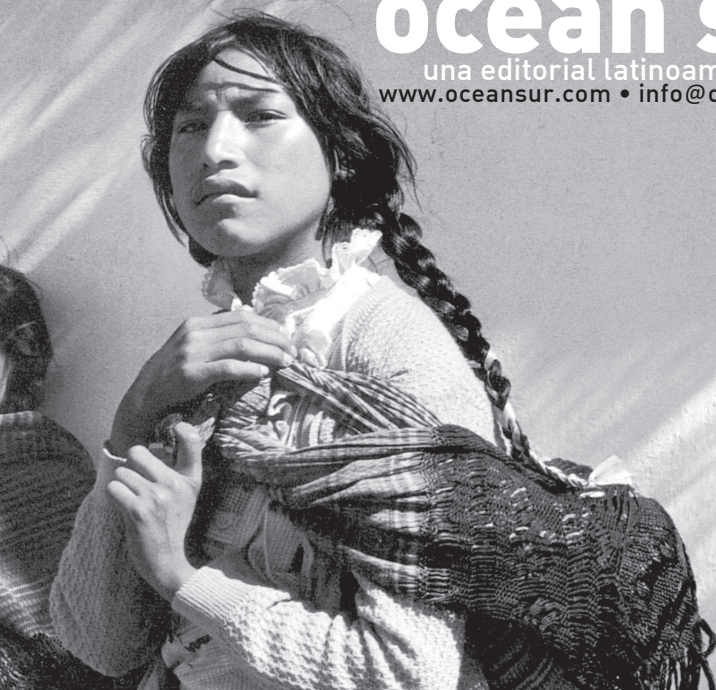
días y gubernaturas que no eran «idóneos» a los intereses de la clase que se resiste a perder su clase y no tiene la menor clase. En resumen, la «mermelada» seguía untándose igual que antes, no había reforma a la vista que la diluyese.

Y si los incumplimientos se quedaran en un simple malestar ciudadano, la cosa no iría a mayores, porque Colombia no era el único país de políticos corruptos reacios a perder sus privilegios. La cuestión es que, lo que sí la ha distinguido, y para mal, es que los de más abajo en la cadena se van al monte ante el menor sentimiento de desamparo, fusil en mano, a darse plomo con quien intente frenarle el paso, y no pocos, acuden al negocio de las drogas como sustento de vida.

La realidad ha sido que, de los 13 000 hombres de las FARC que entregaron las armas, unos 4 000 se habían reestructurado ya al cabo de tres años de la fecha de la entrega de armas, contando entre los desertores y los que jamás se sometieron a los «beneficios» de la paz. Las llamadas disidencias venían a ser más peligrosas que la guerrilla misma en su momento, porque persistían las divisiones entre los frentes, había rivalidad por el mando único y ya no se movían por ideales tan nobles, aunque la aspiración al poder político persistiese en algunos de los que habían retomado la rebeldía. Se sumaba la multiplicidad de grupos ilegales coexistiendo —el ELN entre ellos, cuyas aspiraciones de paz se perdían nuevamente en el horizonte desde el momento en punto que el gobierno de Duque los dejó sin interlocutor y se dio a la tarea de cazarlos— y disputándose territorios con mayor ferocidad que antes, cuando el país estaba repartido en zonas de influencia. Una realidad que se complejizaba todavía más y que, en poco tiempo, podría retrotraer las peores prácticas violentas del pasado, mientras que la foto del 23 de junio de 2016 se volvía un documento histórico de archivo.

ocean sur

una editorial latinoamericana
www.oceansur.com • info@oceansur.com



Ocean Sur es una casa editorial latinoamericana que ofrece a sus lectores las voces del pensamiento revolucionario de América Latina de todos los tiempos. Inspirada en la diversidad étnica, cultural y de género, las luchas por la soberanía nacional y el espíritu antiimperialista, desarrolla múltiples líneas editoriales que divulgan las reivindicaciones y los proyectos de transformación social de Nuestra América.

Nuestro catálogo de publicaciones abarca textos sobre la teoría política y filosófica de la izquierda, la historia de nuestros pueblos, la trayectoria de los movimientos sociales y la coyuntura política internacional.

El público lector puede acceder a un amplio repertorio de libros y folletos que forman sus doce colecciones: Che Guevara, Fidel Castro, Revolución Cubana, Nuestra América, Cultura y Revolución, Roque Dalton, Vidas Rebeldes, Historias desde abajo, Pensamiento Socialista, Biblioteca Marxista, El Octubre Rojo y la Colección Juvenil.

Ocean Sur es un lugar de encuentros.

DE LA HABANA A BOGOTÁ: **desAcuerdos de Paz**

¿Cómo entender la paz en Colombia? ¿Cuán escabrosa ha sido la búsqueda de una salida dialogada a un conflicto armado pero también socioeconómico que parece eterno? ¿Qué se pactó en la capital cubana en materia de entendimiento político entre enemigos de guerra? ¿Cuánto de lo suscrito ha cobrado vida más allá del papel? Este libro compila artículos escritos al calor de cada uno de los acontecimientos que cuenta, pero estructurados e hilvanados en una narrativa que permite entender cronológicamente y de primera mano el más reciente proceso colombiano de paz.

El relato abarca desde la negociación entre la administración de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, hasta los primeros cuatro años de la etapa de implementación del Acuerdo de La Habana, que quedaría luego a cargo del gobierno sucesor, pasando por un fallido esfuerzo conciliador con el ELN. Tienen voz los principales protagonistas de la historia para ayudarnos a comprender por qué se hace tan esquiva la paz que tanto claman los colombianos.

